

DIARIO DE SESIONES

Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba

20 de diciembre de 2023

43ª REUNION – 40º SESION ORDINARIA

145º PERIODO LEGISLATIVO

**Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Presidente del Poder Legislativo**

PRUNOTTO, Myrian

Presidente Provisorio

TORRES LIMA, Facundo

Vicepresidente

FERNANDEZ, Nadia Vanesa

Vicepresidente 1ª

SALIBA, Oscar Elías Mario

Vicepresidente 2ª

JUEZ, Daniel Alejandro

Secretaria Administrativo

ROSSA, Sebastián Matías

Secretario Legislativo

ARIAS, Guillermo Carlos

Secretario de Comisiones

CASADO, Justo José

Secretario General

ALONSO, Guillermo

Pro-Secretario Administrativo

YACOB, Darío David

Pro-Secretario Legislativo

GARCÍA, Leandro Álvaro

Pro-Secretario de Comisiones

ORTIZ OLMOS, Matías Gabriel

Prosecretario General

BALDUZZI, Edgard Maciel

**LEGISLADORES
PRESENTES**

ACEVEDO, María
ACUÑA, Karen
ALESANDRI, Federico
BLANGINO, Juan José
BRUNO, Karina
BUSSO, Victoria
CEBALLOS RECALDE, Mariano
CHAMORRO, Matías
CONSALVI, David
ESLAVA, Marcelo
FERNANDÉZ, Nadia
FIGUEROA, Raúl
FLORES, Ramón
FRÍAS, Cristian
GALO, Abraham
HEREDIA, Jorge
JURICH, Silvina
KNIPSCHEER REYNA, Bernardo
LIMIA, Leonardo
LORENZO, Mariano
NAVARRO ALEGRE, Verónica
OVEJEROS, Pablo
PEREYRA, Cristina
PRESAS, Luciana
QUIÑÓNEZ, Natalia
QUAGLINO, Ileana
RÉBORA, Enrique
RINALDI, Julieta
ROMERO, Delia
ROSSI, Dante Valentín
RUFEL, Rodrigo
SICILIANO, Miguel
SOSA, Ricardo
SPACCESI, Agustín
SUAREZ, Carmen
TÉVEZ, Gustavo
TORRES LIMA, Facundo

**LEGISLADORES AUSENTES
NO JUSTIFICADOS**

No justificaron sus ausencias por lo que les corresponde la aplicación estricta del Reglamento Interno (Artículo 13).

AGRELO, Rodrigo
ALMADA, Nancy
AUSTIN, Brenda
BISOTTO, Graciela
BOTTA, Patricia
BOTTASSO, Gustavo
BRÍA, José
BRINNER, Carlos
CARIGNANO, Carlos
CONTRERAS, Inés
ECHEVARRÍA, Luciana
FERRERO, Alejandra
GISPERT, Walter
GRICH, Ariel
GUDIÑO, Daniela
GVOZDENOVICH, Matías Pablo
HERNÁNDEZ MAQUEDA, Gregorio
JAIME, Mauricio
JUEZ, Daniel
LUNA, Fernando
MARTOCCIA, Viviana
MOLINA, Víctor
NICOLÁS, Miguel
NIGRO, Alfredo
NOSTRALA, Walter
PERALTA, Sebastián
PEREYRA, Gloria
PEIRONE, Juan Pablo
SALA, Ignacio
SALIBA, Oscar
SZPANIN, Ariela
TAMIS, Oscar
VALIENTE, Lucas

**LEGISLADORES AUSENTES
JUSTIFICADOS**

SUMARIO

1.- Izamiento de la Bandera Nacional..	2470
2.- Legisladora Delia Romero. Juramento de ley.....	2470
3.- Versión taquigráfica. Aprobación....	2470
4.- Asuntos entrados:.....	2470
I.- Comunicaciones particulares.....	2471
II.- Otras comunicaciones.....	2471

De los legisladores

III.- República de Israel y Franja de Gaza. Muertes ante el ataque terrorista de la organización Hamas. Preocupación y solidaridad. Proyecto de declaración (38408/D/23) de la legisladora Szpanin.....	2471
IV.- República de Israel. Situación de los argentinos que se hallan en el país. Informes. Organización Hamas. Declaración como grupo terrorista. Solicitud al Gobierno nacional. Proyecto de resolución (38409/R/23) de la legisladora Szpanin.....	2471
V.- Servicio público en la provincia de Córdoba. Principios, deberes, prohibiciones e incompatibilidades respecto a su desarrollo. Marco genérico y regulatorio. Establecimiento. Ley Nº 8198, de Declaración Jurada Patrimonial de Funcionarios y Magistrados. Modificación. Proyecto de ley (38411/L/23) del legislador Gvozdenovich y los bloques UCR, Frente Cívico de Córdoba, PRO, Construyendo Córdoba y Coalición Cívica ARI.....	2471
VI.- Ley Nº 8024, Régimen de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la provincia. Diversos artículos. Modificación. Ley Nº 10694, de Fortalecimiento del Sistema Previsional. Artículos 29, 32, 33 y 35. Derogación. Ley Nº 10928, Código Tributario 2024. Artículo 63. Derogación. Proyecto de ley (38412/L/23) de los legisladores Gvozdenovich, Szpanin, Bisotto, Gudiño, Rossi y los bloques UCR, Frente Cívico de Córdoba, PRO, Construyendo Córdoba y Coalición Cívica ARI.....	2471
VII.- Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. Establecimiento y derogación de la Ley Nº 8803. Proyecto de ley (38419/L/23) de la legisladora Botta.....	2471
VIII.- Sr. Rodrigo Rufeil. Situación procesal en la causa por enriquecimiento ilícito radicada en su contra. Pedido de informes. Proyecto de resolución (38420/R/23) del legislador Hernández Maqueda.....	2471
IX.- Ruta provincial E-61, que une las localidades de La Cruz y Embalse, Dpto. Calamuchita. Deterioros. Arreglos. Solicitud. Proyecto de resolución (38422/R/23) del legislador Jaimés.....	2471
X.- 13º Festival de las Manos Artesanas, en la localidad de Las Palmas, Dpto. Pocho. Adhesión. Proyecto de	

declaración (38423/D/23) del legislador Heredia.....	2472
--	------

XI.- Ley Nº 8560, Provincial de Tránsito. Artículos 5º y 121. Modificación. Artículo 74. Suspensión. Proyecto de ley (38424/L/23) del legislador Rossi.....	2472
---	------

XII.- 44º Festival Nacional del Maíz de la Pampa de Pocho, en la localidad de Salsacate, Dpto. Pocho. Adhesión. Proyecto de declaración (38425/D/23) del legislador Heredia.....	2472
--	------

XIII.- Marchas de protestas y reclamos en la ciudad de Córdoba. Consejo de Partidos Políticos y organizaciones sociales. Convocatoria a fin de establecer reglas de convivencia social. Solicitud. Proyecto de declaración (38427/D/23) del legislador Rossi.....	2472
---	------

XIV.- Gobierno provincial. Previsiones adoptadas ante la devaluación del dólar y la deuda pública. Sr. Ministro de Economía y Gestión Pública. Citación para informar. Proyecto de resolución (38428/R/23) de los legisladores Gudiño, Austin, Bisotto, Bria, Contrera, Carignano, Ferrero, Luna, Nicolás, Saliba y Szpanin.....	2472
--	------

XV.- Ley Nº 8024, Régimen General de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Artículo 59. Modificación. Proyecto de ley (38429/L/23) del legislador Agrelo.....	2472
---	------

XVI.- Servicio Penitenciario de Córdoba. Condenados que cumplan penas privativas de libertad. Obligatoriedad de trabajar o estudiar. Establecimiento. Proyecto de ley (38431/L/23) del legislador Agrelo.....	2472
---	------

XVII.- Dispositivo denominado Flipper Zero o similares. Prohibición de su tenencia, venta o expendio. Ley Nº 10326, Código de Convivencia. Artículo 78 bis. Incorporación. Proyecto de ley (38432/L/23) del legislador Agrelo.....	2472
--	------

XVIII.- Consejos de Promoción Juvenil. Creación en el ámbito de la provincia. Proyecto de ley (38433/L/23) del legislador Agrelo.....	2472
---	------

XIX.- Personas que desempeñen funciones por elección popular en la provincia. Presentación de certificado negativo de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales. Obligatoriedad. Establecimiento. Proyecto de ley (38435/L/23) del legislador Tamis.....	2473
--	------

XX.- Cooperativa Las Cañitas de la localidad de El Tío, Dpto. San Justo. 80º aniversario. Beneplácito. Proyecto de declaración (38436/D/23) de la legisladora Acevedo.....	2473
--	------

XXI.- Festival de las Noches Fortineras, en la ciudad de La Carlota, Dpto. Juárez Celman. Beneplácito. Proyecto de declaración (38437/D/23) de los	
--	--

legisladores Bisotto, Szpanin, Ferrero, Nigro, Briá, Saliba y Nicolás.....2473
XXII.- Ruta provincial N° 4, entre las ciudades de La Carlota y Laboulaye. Deterioro. Arreglos. Solicitud. Proyecto de resolución (38438/R/23) de los legisladores Bisotto, Jaimes, Austin, Nigro Nicolás, Luna, Saliba, Briá, Contrera, Carignano, Rossi y Szpanin.....2473

Del Poder Ejecutivo

XXIII.- Rector Normalizador de la Universidad Provincial de Córdoba, Mgter. Jorge Omar Abel Jaimez. Renuncia al cargo. Acuerdo y designación de la Especialista Lic. María Julia Oliva Cuneo. Proyecto de ley (38434/L/23) del Poder Ejecutivo.....2473

Asuntos entrados fuera de término (Art. 109 RI)

De los legisladores

XXIV.- Ley Nacional N° 27725, de Impuesto a las Ganancias. Abstención de su modificación o derogación. Instrucción e instancia a los legisladores nacionales por Córdoba. Proyecto de ley (38439/R/23) del legislador Knipscheer.....2473

XXV.- Ley N° 10870, sobre adjudicación de terrenos al radio municipal de Tanti, Dpto. Punilla. Derogación. Proyecto de ley (38442/R/23) del legislador Luna.....2473

XXVI.- Localidad de San Esteban, Dpto. Punilla. Fiestas patronales. Adhesión. Proyecto de declaración (38443/D/23) del legislador Limia.....2473

XXVII.- Decreto 185/23, de la Presidencia de esta Legislatura (reducción dietas y sueldo básico de autoridades superiores y funcionarios de la planta política). Adhesión. Proyecto de resolución (38445/R/23) del legislador Siciliano...2473

XXVIII.- Reglamento Interno de la Legislatura. Artículo 59. Modificación. Proyecto de resolución (38462/R/23) de los legisladores Gvozdenovich, Nostrala, Rossi, Hernández Maqueda y Botta.....2474

XXIX.- 37° Carnavales Gigantes de la ciudad de Villa Nueva, Dpto. Gral. San Martín. Adhesión. Proyecto de declaración (38463/D/23) del legislador Nigro.....2474

XXX.- 56° Festival Nacional de Folclore en el Agua, en la ciudad de Villa del Rosario, Dpto. Río Segundo. Adhesión. Proyecto de declaración (38464/D/23) del legislador Valiente.....2474

Del Poder Ejecutivo

XXXI.- Personal comprendido en el régimen de la Ley N° 8024. Incremento de las alcúotas de los aportes personales. Disposición. Ley N° 9277, creación de la APROSS. Artículo 33. Modificación. Proyecto de ley (38468/L/23) del Poder Ejecutivo.....2474

5.- Legisladores Claudia Martínez y Gustavo Brandan. Licencias. Solicitud. Se consideran y aprueban. Comisión de Poderes. Constitución y despacho.

Legisladora electa Luciana María Presas. Juramento de ley.....2474

6.- A) IPEA 293 Ing. Chiesa Molinari, de Bell Ville, Dpto. Unión. Supuesto hecho de abuso sexual a un alumno. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (37380/R/23) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2476

B) Programa 451 (CE) Actividades de Fiscalización y Registro, Ley N° 6222 y modificatorias, y Cuenta de Inversión. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (37387/R/23) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2476

C) Instituciones sanitarias de alta complejidad en la zona del Polo Sanitario y la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba. Servicio de alojamiento a personas que requieran asilo con tratamiento médico. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (37177/R/23) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2476

D) Plan Conectividad Córdoba. Contratos por el servicio de transporte de datos y tránsito IP. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (37184/R/23) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2476

E) Escuela primaria French y Beruti, de Yacanto, Dpto. Calamuchita. Problemas eléctricos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (37459/R/23) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2476

F) Escuela primaria French y Beruti, de Yacanto, Dpto. Calamuchita. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (37379/R/23) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2476

G) Escuela primaria José Hernández, de Villa del Prado, Dpto. Santa María. Retraso en la construcción del nuevo edificio. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (37838/R/23) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2477

H) Programa 415 de Mediación Extrajudicial y ejecución presupuestaria. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (37791/R/23) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2477

I) Programa 659/4 Atención Integral para Personas Mayores y ejecución presupuestaria. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (37794/R/23) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2477

J) Ministerio de Desarrollo Social. Ayudas económicas en concepto de asistencia alimentaria. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución

(37944/R/23) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2477

K) Escuela primaria Gral. San Martín, de Río Cuarto. Problemas de inseguridad. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (37979/R/23) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2477

L) Obra de Nexos Cloacales para barrios de la ciudad de Córdoba (Urbanización de barrios populares. Etapa 2). Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (37762/R/23) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2477

LL) Programa 766 - Participación Ciudadana en Políticas de Seguridad. Pedido de informes. Proyecto de resolución (37496/R/23) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2477

M) Emprendedores. Créditos sin interés. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (37470/R/23) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2477

N) Escuela primaria Gobernador Amadeo Sabattini e IPEM Nº 5 Eva Perón. Estado edilicio. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (37658/R/23) de la legisladora Irazuzta. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2477

Ñ) Empresa Aguas Cordobesas. Canal maestro que atraviesa la localidad de Bouwer. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (38121/R/23) del legislador Rossi. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2477

O) Línea 102 de denuncias contra el trabajo infantil. Campaña de difusión. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (38127/R/23) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2477

P) Programa 642, Fortalecimiento de la Economía Popular y Familiar. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (38128/R/23) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2477

Q) Localidad de Quilino, Dpto. Ischilín. Radio municipal. Modificación. Proyecto de ley (37568/L/23) del Poder Ejecutivo. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2477

R) Localidad de Avellaneda, Dpto. Ischilín. Radio comunal. Modificación. Proyecto de ley (37983/L/23) del Poder Ejecutivo. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2477

S) Localidad de Conlara, Dpto. San Javier. Radio comunal. Modificación. Proyecto de ley (38197/L/23) del Poder Ejecutivo. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2477

T) Localidad de San José. Dpto. San Javier. Radio comunal. Modificación.

Proyecto de ley (38200/L/23) del Poder Ejecutivo. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2477

U) Localidad de Villa Sarmiento, Dpto. San Alberto. Radio municipal. Modificación. Proyecto de ley (38295/L/223) del Poder Ejecutivo. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2477

V) Lengua ranquel. Patrimonio cultural intangible e inmaterial de la provincia. Declaración. Proyecto de ley (28689/L/19) del legislador Miranda. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2477

W) Centros educativos de nivel secundario presencial y semipresencial y/o a distancia. Docentes con situación de revista interina en cargos no directivos y en horas cátedra. Titularización. Proyecto de ley (38298/L/23) de la legisladora García. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2477

X) Municipalidad de Villa Carlos Paz. Denuncia contra la Cooperativa Integral (COOPI) por vertido de líquidos cloacales sin tratar en el lago San Roque. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (37144/R/23) de la legisladora Echevarría. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....2477

Y) Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (IPAD). Situación actual. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (37594/R/23) de la legisladora Echevarría. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....2477

Z) Camino a la Calera o Av. Ejército Argentino, que colinda con el barrio Country Las Delicias y con tierras del Ejército Argentino. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (38116/R/23) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....2477

A1) Parque de la Vida. Posibilidad de realizar obras. Pedido de informes. Proyecto de resolución (37935/R/23) de la legisladora Echevarría. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....2477

B1) Parque de la Vida. Proyecto de obra vial que lo atravesaría. Pedido de informes. Proyecto de resolución (37936/R/23) de la legisladora Echevarría. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....2477

7.- A) Festival de Sensibilización Enlazándonos, en Sampacho, Dpto. Río Cuarto. Adhesión. Proyecto de declaración (38384/D/23) del bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Tratamiento en los términos del art. 157 del Reglamento. Se considera y aprueba.....2482

B) República de Israel y Franja de Gaza. Muertes ante el ataque terrorista de la organización Hamas. Preocupación y solidaridad. Proyecto de declaración (38408/D/23) de la legisladora Szpanin. Tratamiento en los términos del art. 157

del Reglamento. Se considera y aprueba.....2482

C) República de Israel. Situación de los argentinos que se hallan en el país. Informes. Organización Hamas. Declaración como grupo terrorista. Solicitud al Gobierno nacional. Proyecto de resolución (38409/R/23) de la legisladora Szpanin. Tratamiento en los términos del art. 157 del Reglamento. Se considera y aprueba.....2482

D) 13° Festival de las Manos Artesanas, en la localidad de Las Palmas, Dpto. Pocho. Adhesión. Proyecto de declaración (38423/D/23) del legislador Heredia. Tratamiento en los términos del art. 157 del Reglamento. Se considera y aprueba.....2482

E) 44° Festival Nacional del Maíz de la Pampa de Pocho, en la localidad de Salsacate, Dpto. Pocho. Adhesión. Proyecto de declaración (38425/D/23) del legislador Heredia. Tratamiento en los términos del art. 157 del Reglamento. Se considera y aprueba.....2482

F) Cooperativa Las Cañitas de la localidad de El Tío, Dpto. San Justo. 80° aniversario. Beneplácito. Proyecto de declaración (38436/D/23) de la legisladora Acevedo. Tratamiento en los términos del art. 157 del Reglamento. Se considera y aprueba.....2482

G) Localidad de San Esteban, Dpto. Punilla. Fiestas patronales. Adhesión. Proyecto de declaración (38443/D/23) del legislador Limia. Tratamiento en los términos del art. 157 del Reglamento. Se considera y aprueba.....2482

H) Decreto 185/23, de la Presidencia de esta Legislatura (reducción dietas y sueldo básico de autoridades superiores y funcionarios de la planta política). Adhesión. Proyecto de resolución (38445/R/23) del legislador Siciliano. Tratamiento en los términos del art. 157 del Reglamento. Se considera y aprueba.....2482

I) 37° Carnavales Gigantes de la ciudad de Villa Nueva, Dpto. Gral. San Martín. Adhesión. Proyecto de declaración (38463/D/23) del legislador Nigro. Tratamiento en los términos del art. 157 del Reglamento. Se considera y aprueba.....2482

J) 56° Festival Nacional de Folclore en el Agua, en la ciudad de Villa del Rosario, Dpto. Río Segundo. Adhesión. Proyecto de declaración (38464/D/23) del legislador Valiente. Tratamiento en los términos del art. 157 del Reglamento. Se considera y aprueba.....2482

8.- Localidad de Chuña Huasi, Dpto. Sobremonte. Radio comunal. Modificación. Proyecto de ley (38198/L/23) del Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Se considera y aprueba, en general y en particular.....2482

9.- Fracción de terreno en la localidad de Saladillo, Dpto. Marcos Juárez. Utilidad pública y sujeta a expropiación, destinada a

la construcción de viviendas y a la actividad comercial. Declaración. Proyecto de ley (38188/L/23) de la legisladora Rinaldi, con despacho de comisión. Se considera y aprueba, en general y en particular.....2485

10.- Personal comprendido en el régimen de la Ley N° 8024. Incremento de las alícuotas de los aportes personales. Disposición. Ley N° 9277, creación de la APROSS. Artículo 33. Modificación. Proyecto de ley (38468/L/23) del Poder Ejecutivo. Moción de tratamiento conforme art. 119 RI. Cuarto intermedio por falta de quórum. Retiro de la moción. Se aprueba.....2488

11.- Rector Normalizador de la Universidad Provincial de Córdoba, Mgter. Jorge Omar Abel Jaimez. Renuncia al cargo. Acuerdo y designación de la Especialista Lic. María Julia Oliva Cuneo. Proyecto de ley (38434/L/23) del Poder Ejecutivo. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho. Se considera y aprueba, en general y en particular.....2489

12.- A) Ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana. Establecimiento. Leyes números 9400, Adhesión provincial al Programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego; 10571, Régimen de los Prestadores de Servicio de Seguridad Privada; 9475, creación del COPEC y 9235, Policía de Córdoba. Modificación. Proyecto de ley (38407/L/23), compatibilizado con los proyectos 38413; 38415 y 38435/L/23, con despachos de comisión en mayoría y minorías. Se considera y aprueba, en general y en particular, el despacho en mayoría.....2494

B) Fiscalías de Instrucción y Juzgados de Control en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba; y Fiscalías de Instrucción en las ciudades de Villa Carlos Paz, Río Cuarto y Cosquín. Creación. Proyecto de ley (38413/L/23) del Poder Ejecutivo, compatibilizado con los proyectos 38407; 38415 y 38435/L/23, con despachos de comisión en mayoría y minorías. Se considera y aprueba, en general y en particular, el despacho en mayoría.....2494

C) Fiscalías Móviles de Instrucción de Lucha contra el Narcotráfico en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Villa Carlos Paz, Cruz del Eje, Marcos Juárez, Bell Ville, y Villa Dolores; y Juzgado de Control con competencia en la Lucha contra el Narcotráfico en la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba. Creación. Proyecto de ley (38415/L/23) del Poder Ejecutivo, compatibilizado con los proyectos 38407; 38413 y 38435/L/23, con despachos de comisión en mayoría y minorías. Se considera y aprueba, en general y en particular, el despacho en mayoría.....2494

D) Personas que desempeñen funciones por elección popular en la provincia. Presentación de certificado

negativo de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales. Obligatoriedad. Establecimiento. Proyecto de ley (38435/L/23) del legislador Tamis, compatibilizado con los proyectos 37407; 38413 y 38415/L/23, con despachos de comisión en mayoría y minorías. Se considera y aprueba, en general y en particular, el despacho en mayoría.....2494

13.- Narcotráfico. Envío de fuerzas de seguridad federales para su combate y constitución del Comité de Crisis del Consejo de Seguridad Interior. Instancia al Poder Ejecutivo. Proyecto de resolución (38394/R/23) del legislador Agrelo. Tratamiento sobre tablas. Se considera y rechaza.....2536

14.- Ley N° 9571, Código Electoral Provincial. Incorporación del art. 49 bis. Ley N° 9572, Régimen jurídico de los partidos políticos. Incorporación del art. 11 bis. Proyecto de ley (38404/L/23) de la legisladora Austin. Tratamiento sobre tablas. Se considera y rechaza.....2538

15.- Ley N° 9122, Tribunales del Fuero Penal Económico y Anticorrupción, y Capítulo II del Título III de la Ley N° 8835, Carta del Ciudadano. Derogación. Proyecto de ley (38405/L/23) del legislador Hernández Maqueda. Tratamiento sobre tablas. Se considera y rechaza.....2542

16.- Ley Nacional N° 27725, de Impuesto a las Ganancias. Abstención de su modificación o derogación. Instrucción e instancia a los legisladores nacionales por Córdoba. Proyecto de ley (38439/R/23) del legislador Knipscheer. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2544

17.- Ley N° 10870, sobre adjudicación de terrenos al radio municipal de Tanti, Dpto. Punilla. Derogación. Proyecto de ley (38442/R/23) del legislador Luna. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....2545

18.- Reglamento Interno de la Legislatura. Artículo 59. Modificación. Proyecto de resolución (38462/R/23) de los legisladores Gvozdenovich, Nostrala, Rossi, Hernández Maqueda y Botta. Tratamiento sobre tablas. Se considera y rechaza.....2546

-En la ciudad de Córdoba, a 20 días del mes de diciembre de 2023, siendo la hora 19 y 30:

-1-

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidenta (Prunotto).- Contando con la presencia de 36 señores legisladores se ha alcanzado el quórum suficiente para dar inicio a la 40ª sesión ordinaria del 145º período ordinario de sesiones.

Invito a la legisladora Karen Acuña a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto, y al resto de los presentes a ponerse de pie.

-Puestos de pie los legisladores, autoridades y demás presentes, la señora legisladora Acuña procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2-

LEGISLADORA DELIA ROMERO

Juramento de ley

Sra. Presidenta (Prunotto).- En aplicación de la última parte del artículo 17, del Reglamento Interno, encontrándose presente la legisladora Delia Dolores Romero, se da por interrumpida la licencia que se le otorgara la sesión pasada.

Antes de invitar a ocupar su banca, voy a pedirle a la legisladora Romero que se ubique frente al estrado para tomarle el juramento de ley.

-Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de legisladora provincial la señora Delia Dolores Romero. (Aplausos).

-3-

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sr. Presidente (Prunotto).- Corresponde poner en consideración la versión taquigráfica de la sesión ordinaria anterior.

Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.

-Asentimiento.

Sr. Presidente (Prunotto).- Aprobada.

-4-

ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidenta (Prunotto).- Vamos a omitir la lectura de los asuntos entrados de esta sesión, que han sido remitidos por vía electrónica a los presidentes de los bloques para información de sus bancadas.

La legisladora o el legislador que así lo desee, puede solicitar la inclusión de coautores a los proyectos de su autoría.

Tiene la palabra el legislador Knipscheer.

Sr. Knipscheer.- Gracias, señora presidenta.

Es para solicitar la coautoría, en el expediente 38439/R/23, de los señores legisladores Lorenzo, Rufeil, Russo, Alesandri y Chamorro; es un proyecto que es de mi autoría, que instruye a senadores y diputados nacionales por Córdoba se abstengan a derogar la Ley del Impuesto a las Ganancias, presidenta.

Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Así se hará, legislador.

Tiene la palabra la legisladora Acevedo.

Sra. Acevedo.- Gracias, señora presidenta.

Es para solicitar la incorporación de los legisladores Gustavo Tévez y Matías Chamorro como coautores del proyecto 38436.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Así se hará, legisladora Acevedo.

Sra. Acevedo.- Muchas gracias.

I

COMUNICACIONES PARTICULARES

38426/N/23

Nota, remitida por el Legislador Brandán, solicitando licencia a su cargo de Legislador desde el 14 de diciembre de 2023 al 13 de junio de 2024.

38430/N/23

Nota, remitida por la Legisladora Martínez, solicitando licencia al cargo de Legisladora desde el 10 de diciembre de 2023 al 9 de junio de 2024.

II

OTRAS COMUNICACIONES

38421/N/23

Retirado

DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

III

38408/D/23

Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Szpanin, manifestando preocupación y solidaridad ante el ataque terrorista de la organización Hamas que provocó cientos de muertes en la República de Israel y en la Franja de Gaza el pasado 7 de octubre, condenando al terrorismo en todas sus formas.

Comisión: De Legislación General

IV

38409/R/23

Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Szpanin, instando al Poder Ejecutivo para que solicite informes al Gobierno Nacional sobre la situación de los argentinos en la República de Israel, particularmente de los cordobeses que aún se hallan en ese país y que se declare a la organización Hamas como grupo terrorista en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, en el marco de la Ley Nacional N° 25246.

Comisión: De Legislación General

V

38411/L/23

Proyecto de Ley, iniciado por el Legislador Gvozdenovich y los Bloques UCR, Frente Cívico de Córdoba, PRO, Construyendo Córdoba y Coalición Cívica ARI, estableciendo un marco genérico y regulatorio para la determinación de principios, deberes, prohibiciones e incompatibilidades respecto al desarrollo del servicio público en la provincia de Córdoba, modificando artículos de la Ley N° 8198, de Declaración Jurada Patrimonial de Funcionarios y Magistrados.

Comisiones: De Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación General

VI

38412/L/23

Proyecto de Ley, iniciado por los Legisladores Ferrero, Gvozdenovich, Szpanin, Bisotto, Gudiño, Rossi y los Bloques UCR, Frente Cívico de Córdoba, PRO, Construyendo Córdoba y Coalición Cívica ARI, modificando los artículos 6, 9, 46, 49, 51, 58 y 59 de la Ley N° 8024, Régimen de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la provincia; y derogando los artículos 29, 32, 33 y 35 de la Ley N° 10694, de Fortalecimiento del Sistema Previsional, y el artículo 63 de la Ley N° 10928, Código Tributario 2024.

Comisiones: De Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación General

VII

38419/L/23

Proyecto de Ley, iniciado por la Legisladora Botta, estableciendo la Ley de Derecho de acceso a la información pública, derogando la Ley N° 8803.

Comisiones: De Legislación General; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

VIII

38420/R/23

Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Hernández Maqueda, solicitando al Sr. Fiscal General de la provincia informe la situación procesal del Sr. Rodrigo Rufeil en la causa por enriquecimiento ilícito radicada en su contra en la Fiscalía Anticorrupción N° 1.

Comisión: De Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

IX

38422/R/23

Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Jaimes, solicitando al Poder Ejecutivo que arbitre los medios para realizar los arreglos necesarios en la Ruta provincial E-61, que une las localidades de La Cruz y Embalse, Dpto. Calamuchita.

Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

X

38423/D/23

Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Heredia, adhiriendo al 13º Festival de las Manos Artesanas, a desarrollarse el día 3 de febrero de 2024 en la localidad de Las Palmas, Dpto. Pocho.

Comisión: De Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional

XI

38424/L/23

Proyecto de Ley, iniciado por el Legislador Rossi, modificando los artículos 5, 121 y suspendiendo por un año el artículo 74 de Ley Nº 8560, referidos a definiciones de instrumental y montos de multas, desanclándolas del costo del combustible y determinándola en unidades fijas U.F.

Comisiones: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Legislación General

XII

38425/D/23

Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Heredia, adhiriendo al 44º Festival Nacional del Maíz de la Pampa de Pocho, a desarrollarse los días 12 y 13 de enero de 2024, en la localidad de Salsacate, Dpto. Pocho.

Comisión: De Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional

XIII

38427/D/23

Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Rossi, requiriendo al Sr. Gobernador que convoque al Consejo de Partidos Políticos y a las organizaciones sociales para establecer reglas de convivencia social vinculadas a las marchas de protestas y reclamos que se vienen intensificado en la ciudad de Córdoba, afectando el derecho a transitar de muchos vecinos.

Comisión: De Legislación General

XIV

38428/R/23

Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Gudiño, Austin, Bisotto, Bria, Contrera, Carignano, Ferrero, Luna, Nicolás, Saliba y Szpanin, citando al Sr. Ministro de Economía y Gestión Pública, para que informe (Art. 101 C.P.) sobre las previsiones adoptadas por el Gobierno provincial ante la devaluación del dólar y la deuda pública.

Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

XV

38429/L/23

Proyecto de Ley, iniciado por el Legislador Agrelo, modificando el artículo 59 de la Ley Nº 8024, Régimen General de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, referido al reingreso a la actividad.

Comisiones: De Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación General

XVI

38431/L/23

Proyecto de Ley, iniciado por el Legislador Agrelo, estableciendo la obligatoriedad de trabajar o estudiar para los condenados que cumplan penas privativas de libertad en el Servicio Penitenciario de Córdoba, exceptuando a quienes por razones de salud no pudieren hacerlo.

Comisiones: De Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General

XVII

38432/L/23

Proyecto de Ley, iniciado por el Legislador Agrelo, prohibiendo la tenencia, venta o expendio del dispositivo denominado Flipper Zero o similares, incorporando el artículo 78 bis de la Ley Nº 10326, Código de Convivencia.

Comisiones: De Legislación General; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

XVIII

38433/L/23

Proyecto de Ley, iniciado por el Legislador Agrelo, creando los Consejos de Promoción Juvenil en el ámbito de la provincia.

Comisiones: De Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia; y de Legislación General

XIX

38435/L/23

Proyecto de Ley, iniciado por el Legislador Tamis, estableciendo la obligatoriedad de presentar ante la autoridad competente, certificado negativo expedido por institución médica, acreditando la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, a todas las personas que desempeñen funciones por elección popular en la provincia.

Comisiones: De Salud Humana; de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones; y de Legislación General

XX

38436/D/23

Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Acevedo, expresando beneplácito por el 80º aniversario de la Cooperativa Las Cañitas de la localidad de El Tío, Dpto. San Justo.

Comisión: De Economía Social, Cooperativas y Mutuales

XXI

38437/D/23

Proyecto de Declaración, iniciado por los Legisladores Bisotto, Szpanin, Ferrero, Nigro, Bria, Saliba y Nicolás, expresando beneplácito por el Festival de las Noches Fortineras, a desarrollarse del 19 al 21 de enero de 2024, en la ciudad de La Carlota, Dpto. Juárez Celman.

Comisión: De Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional

XXII

38438/R/23

Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Bisotto, Jaimes, Austin, Nigro Nicolás, Luna, Saliba, Bria, Contrera, Carignano, Rossi y Szpanin, solicitando al Poder Ejecutivo que arregle la Ruta provincial N° 4, entre las ciudades de La Carlota y Laboulaye.

Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

DEL PODER EJECUTIVO

XXIII

38434/L/23

Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, aceptando la renuncia al cargo de Rector Normalizador de la Universidad Provincial de Córdoba al Mgter. Jorge Omar Abel Jaimez, designando en dicho cargo a la Especialista Lic. María Julia Oliva Cuneo, con los alcances establecidos en el artículo 14 de la Ley N° 9375 y su modificatoria.

Comisiones: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación General

**ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE TÉRMINO (ART. 109 RI)
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES**

XXIV

38439/R/23

Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Knipscheer, instruyendo a los Senadores (Art. 104 inc. 5 C.P.) e instando a los Diputados Nacionales por Córdoba para que se abstengan de modificar o derogar la Ley Nacional N° 27725 de Impuesto a las Ganancias.

Comisiones: De Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

XXV

38442/L/23

Proyecto de Ley, iniciado por el Legislador Luna, derogando la Ley N° 10870 sobre la adjudicación de terrenos al radio municipal de Tanti, Dpto. Punilla.

Comisiones: De Asuntos Institucionales, Municipales y Comunes; y de Legislación General

XXVI

38443/D/23

Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Limia, adhiriendo a las fiestas patronales de la localidad de San Esteban, Dpto. Punilla, a celebrarse el día 26 de diciembre en honor a su Santo Patrono.

Comisión: De Asuntos Institucionales, Municipales y Comunes

XXVII

38445/R/23

Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Siciliano, adhiriendo al Decreto 185/23 de la Presidencia de esta Legislatura, que dispone la reducción de las dietas de los Legisladores en un 15%, así como la reducción del sueldo básico de las Autoridades Superiores y Funcionarios de la planta política en un 10%.

Comisión: De Legislación General

XXVIII

38462/R/23

Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Gvozdenovich, Nostrala, Rossi, Hernández Maqueda y Botta, modificando el artículo 59 del Reglamento Interno de la Legislatura, estableciendo que los Presidentes de los Interbloques que se hubieren conformado integrarán la Comisión de Labor Parlamentaria.

Comisión: De Legislación General

XXIX

38463/D/23

Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Nigro, adhiriendo a los 37º Carnavales Gigantes de la ciudad de Villa Nueva, Dpto. Gral. San Martín, a desarrollarse del 22 al 28 de enero de 2024.

Comisión: De Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional

XXX

38464/D/23

Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Valiente, adhiriendo al 56º Festival Nacional de Folclore en el Agua, a desarrollarse del 12 al 14 de enero de 2024 en la ciudad de Villa del Rosario, Dpto. Río Segundo.

Comisión: De Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional

DEL PODER EJECUTIVO

XXXI

38468/L/23

Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, disponiendo el incremento de las alícuotas de los aportes personales del personal comprendido en el régimen de la Ley Nº 8024, hasta en 4 puntos porcentuales sobre los porcentajes vigentes al mes de noviembre de 2023 de cada sector del sistema previsional, modificando el artículo 33 de la Ley Nº 9277, -Creación de la APROSS-

Comisiones: De Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; de Salud Humana; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-5-

**LEGISLADORES CLAUDIA MARTÍNEZ Y GUSTAVO BRANDAN.
LICENCIAS. SOLICITUD. COMISIÓN DE PODERES. CONSTITUCIÓN Y
DESPACHO. LEGISLADORA ELECTA LUCIANA MARÍA PRESAS. JURAMENTO
DE LEY.**

Sra. Presidenta (Prunotto).- Se encuentran reservadas en Secretaría sendas notas presentadas por dos legisladores que solicitan licencia en su cargo.

Por Secretaría se dará lectura a las mismas.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 14 de diciembre de 2023.

**Sra. Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Myrian Prunotto
S. / D.**

De mi consideración.

Me dirijo a usted, en su carácter de presidenta de la Legislatura, y por su digno intermedio a mis pares legisladores y legisladoras, a fin de solicitar me otorguen, a partir del día de la fecha, licencia sin goce de dieta, por el término máximo que contempla el Reglamento Interno y renunciando al cobro de dieta, al cobro de lo que me hubiera correspondido.

El ejercicio de la responsabilidad que me ha encargado el señor gobernador resulta incompatible con el cumplimiento de la labor parlamentaria, razón por la cual hago este pedido.

Sin otro particular, saludo a usted y a los señores legisladores y señoras legisladoras con respeto y estima.

Claudia Martínez
Legisladora provincial

Córdoba, 14 de diciembre de 2023.

**Sra. Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba**

Myrian Prunotto
S. / D.

De mi consideración.

Me dirijo a usted, y por su digno intermedio a la Legislatura que usted preside, a fin de solicitarle se me otorgue licencia sin goce de sueldo, por el término máximo tiempo contemplado en el Reglamento Interno, a partir del día de la fecha.

Motiva el presente pedido el ofrecimiento que me formulara el señor gobernador para ocupar el cargo de Secretario de Coordinación Territorial, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, responsabilidad que aceptará y cuyo ejercicio considero jurídica y políticamente incompatible con las funciones parlamentarias.

Sin otro particular, descontando la aprobación de esta solicitud, me es grato saludar a usted, y por intermedio suyo a mis pares legisladores, con especial respeto y consideración.

Gustavo Brandan
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Prunotto).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, voy a poner en consideración la aprobación de las dos solicitudes de licencia leídas.

Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobadas.

Al haber sido otorgadas las dos licencias por un plazo superior al que establece el artículo 81 de la Constitución provincial, corresponde la cobertura de las vacantes con los respectivos suplentes.

Para ello, a los legisladores que en la sesión preparatoria y en la anterior integraron la Comisión de Poderes, les pido que vuelvan a hacerlo y, en tal carácter, pasen a deliberar al salón contiguo.

Mientras la Comisión de Poderes emite despacho, pasamos a un breve cuarto intermedio en las bancas.

-Es la hora 19 y 38.

-Siendo la hora 19 y 45:

Sra. Presidenta (Prunotto).- Continúa la sesión.

Por Secretaría se dará lectura el despacho emitido por la Comisión de Poderes

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Despacho de la Comisión de Poderes.

Córdoba, 20 de diciembre de 2023.

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
COMISIÓN DE PODERES

A los efectos de evaluar los derechos y títulos de la ciudadana Luciana María Presas y Karen Acuña para incorporarse a la Legislatura ante la licencia otorgada a los señores legisladores Claudia Roxana Martínez y Gustavo Horacio Brandan, por las razones que dará el señor mismo informante, aconseja que se le preste aprobación de la siguiente manera.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar los derechos y títulos de la señora legisladora Luciana María Presas disponiendo su incorporación a la Legislatura el día de la fecha, conforme los puntos 10 y 36 de la Resolución 38, emanada del Tribunal Electoral ad hoc, el día 1º de agosto de 2023, hasta tanto se reincorpore el legislador Gustavo Horacio Brandan.

Artículo 2º.- Ratificar ante la reasunción de la legisladora titular Delia Dolores Romero y la licencia otorgada a la legisladora titular Claudia Roxana Martínez la aprobación de los derechos y títulos de la señora legisladora Karen Belén Acuña, conforme el punto 36 de la Resolución 38, emanada del Tribunal Electoral ad hoc, el día 1º de agosto de 2023, hasta tanto se reincorpore cualquiera de las legisladoras mujeres en uso de licencia electas por distrito único de la lista de la alianza Hacemos Unido por Córdoba.

Los artículos 3º y 4º son de forma.

Firman seis de los miembros de la Comisión de Poderes.

Sr. Presidenta (Prunotto).- Tiene la palabra la miembro informante de la Comisión de Poderes, legisladora Julieta Rinaldi.

Sra. Rinaldi.- Gracias, señora presidenta.

Al igual que en la sesión anterior cuando se juzgaron los derechos y títulos de los legisladores suplentes, vamos a hacer lo mismo en esta oportunidad.

Como ya dijimos en aquella oportunidad, el artículo 81 de la Constitución Provincial, las licencias otorgadas por más de 30 días generan vacantes que deben ser cubiertas, tal lo que sucede con las licencias recién otorgadas a Gustavo Brandan y Claudia Martínez.

La primera de esta vacante la deja Gustavo Brandan, al ser por la representación del Departamento Colón, se cubre con quien es la suplente oficializada, la legisladora Luciana Presas.

La segunda vacante que se produce, ante la recientemente otorgada la licenciada Claudia Martínez, es apenas un poco más compleja dado que en esta misma sesión la legisladora Dolores Romero ha interrumpido la licencia que la semana pasada le acordamos. Ello, en función de que con solo su presencia en el recinto es suficiente a tales efectos conforme al artículo 17 del Reglamento Interno.

Entonces, en el tramo de Distrito Único de las listas de candidatas de Hacemos Unidos por Córdoba, tenemos una legisladora que interrumpe su licencia y otra que accede a la misma.

Por esas razones, quien ha asumido como suplente en reemplazo de la legisladora que vuelve, ahora lo hace por quien pide la licencia, pues se ratifica a Karen Acuña de quien ya, en su oportunidad, la Comisión de Poderes la ha aprobado y el Pleno aprobado sus derechos y títulos para ocupar banca en esta Legislatura.

En resumen, señora presidenta, habiendo analizado las resoluciones dictadas por la Justicia Electoral de oficialización de las listas de Hacemos Unidos por Córdoba y de la proclamación de electos, como así también por lo dicho respecto de las licencias otorgadas, consideramos que corresponde, entonces, que se apruebe el despacho leído por Secretaría, permitiendo así a la nombrada Luciana Presas, se incorpore a este Poder Legislativo y se ratifique la permanencia de Karen Acuña.

Muchas gracias.

Sr. Presidenta (Prunotto).- Muchas gracias, legisladora.

Voy a poner en consideración el despacho emitido por la Comisión de Poderes, aprobando la incorporación de la legisladora Luciana Presas, en su calidad de suplente del legislador Brandan, en uso de licencia, y la ratificación de la aprobación de derechos y títulos de la legisladora Karen Acuña.

Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidenta (Prunotto).- Aprobado.

Voy a pedirle a la legisladora Luciana Presas que se sitúe frente al estrado para prestar el juramento de rigor.

-Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de legisladora provincial la señora Luciana María Presas. (Aplausos).

-6-

A) IPEA 293 ING. CHIESA MOLINARI, DE BELL VILLE, DPTO. UNIÓN. SUPUESTO HECHO DE ABUSO SEXUAL A UN ALUMNO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

B) PROGRAMA 451 (CE) ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y REGISTRO, LEY N° 6222 Y MODIFICATORIAS, Y CUENTA DE INVERSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

C) INSTITUCIONES SANITARIAS DE ALTA COMPLEJIDAD EN LA ZONA DEL POLO SANITARIO Y LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SERVICIO DE ALOJAMIENTO A PERSONAS QUE REQUIERAN ASILO CON TRATAMIENTO MÉDICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

D) PLAN CONECTIVIDAD CÓRDOBA. CONTRATOS POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS Y TRANSITO IP. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

E) ESCUELA PRIMARIA FRENCH Y BERUTTI, DE YACANTO, DPTO. CALAMUCHITA. PROBLEMAS ELÉCTRICOS. PEDIDO DE INFORMES.

F) ESCUELA PRIMARIA FRENCH Y BERUTI, DE YACANTO, DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

G) ESCUELA PRIMARIA JOSÉ HERNÁNDEZ, DE VILLA DEL PRADO, DPTO. SANTA MARÍA. RETRASO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

H) PROGRAMA 415 DE MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

I) PROGRAMA 659/4 ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS MAYORES Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

J) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. AYUDAS ECONÓMICAS EN CONCEPTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

K) ESCUELA PRIMARIA GRAL. SAN MARTÍN, DE RÍO CUARTO. PROBLEMAS DE INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

L) OBRA DE NEXOS CLOACALES PARA BARRIOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA (URBANIZACIÓN DE BARRIOS POPULARES. ETAPA 2). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

LL) PROGRAMA 766 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN POLÍTICAS DE SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.

M) EMPRENDEDORES. CRÉDITOS SIN INTERÉS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

N) ESCUELA PRIMARIA GOBERNADOR AMADEO SABATTINI E IPEM Nº 5 EVA PERÓN. ESTADO EDILICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Ñ) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS. CANAL MAESTRO QUE ATRAVIESA LA LOCALIDAD DE BOUWER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

O) LÍNEA 102 DE DENUNCIAS CONTRA EL TRABAJO INFANTIL. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

P) PROGRAMA 642, FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y FAMILIAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Q) LOCALIDAD DE QUILINO, DPTO. ISCHILÍN. RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.

R) LOCALIDAD DE AVELLANEDA, DPTO. ISCHILÍN. RADIO COMUNAL. MODIFICACIÓN.

S) LOCALIDAD DE CONLARA, DPTO. SAN JAVIER. RADIO COMUNAL. MODIFICACIÓN.

T) LOCALIDAD DE SAN JOSÉ. DPTO. SAN JAVIER. RADIO COMUNAL. MODIFICACIÓN.

U) LOCALIDAD DE VILLA SARMIENTO, DPTO. SAN ALBERTO. RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.

V) LENGUA RANQUEL. PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE E INMATERIAL DE LA PROVINCIA. DECLARACIÓN.

W) CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO PRESENCIAL Y SEMI PRESENCIAL Y/O A DISTANCIA. DOCENTES CON SITUACIÓN DE REVISTA INTERINA EN CARGOS NO DIRECTIVOS Y EN HORAS CÁTEDRA. TITULARIZACIÓN.

Moción de vuelta a comisión

X) MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ. DENUNCIA CONTRA LA COOPERATIVA INTEGRAL (COOPI) POR VERTIDO DE LÍQUIDOS CLOACALES SIN TRATAR EN EL LAGO SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Y) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN (IPAD). SITUACIÓN ACTUAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Z) CAMINO A LA CALERA O AV. EJÉRCITO ARGENTINO, QUE COLINDA CON EL BARRIO COUNTRY LAS DELICIAS Y CON TIERRAS DEL EJÉRCITO ARGENTINO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

A1) PARQUE DE LA VIDA. POSIBILIDAD DE REALIZAR OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.

B1) PARQUE DE LA VIDA. PROYECTO DE OBRA VIAL QUE LO ATRAVESARÍA. PEDIDO DE INFORMES.

Mociones de vuelta a comisión, con preferencia

Sra. Presidenta (Prunotto).- Continúa la sesión.

Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.

Tiene la palabra el legislador Miguel Siciliano.

Sr. Siciliano.- Gracias, presidenta.

Solicito volver a comisión los proyectos obrantes en los puntos 2 a 4; 6 a 17; 19 a 21; 25 a 27; 29 a 32 del Orden del Día, como así también volver a comisión con preferencia para la próxima sesión, los proyectos incluidos en los puntos 1 y 5 del Orden del Día; como así también volver a comisión, con preferencia para la sesión subsiguiente, los proyectos que figuran en los puntos 18, 22 y 23 del Orden del Día.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Pongo en consideración la moción formulada por el legislador Siciliano.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobada.

PUNTO 2

Mociones de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

37380/R/23

Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al supuesto hecho de abuso sexual a un alumno del IPEA 293 Ing. Chiesa Molinari de la ciudad de Bell Ville, Dpto. Unión.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 3

Mociones de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

37387/R/23

Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al Programa 451 (CE) Actividades de Fiscalización y Registro, Ley N° 6222 y modificatorias, así como lo relacionado a cuenta de inversión de los últimos tres años.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 4

Mociones de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

37177/R/23

Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al servicio de alojamiento brindado a personas que por motivos de salud propios o de familiares, requieran asilo durante el período en que se encuentren con tratamiento médico en instituciones sanitarias de alta complejidad en la zona del Polo Sanitario y la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.

Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social

PUNTO 6

Mociones de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

37184/R/23

Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a contratos por el servicio de transporte de datos y tránsito IP del Plan Conectividad Córdoba.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 7

Mociones de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

37459/R/23

Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre los problemas eléctricos en la escuela primaria French y Beruti de la localidad de Yacanto, Dpto. Calamuchita.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 8

Mociones de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

37379/R/23

Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a la escuela primaria French y Beruti de la localidad de Yacanto, Dpto. Calamuchita.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 9

Mociones de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

37838/R/23

Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al retraso en la construcción del nuevo edificio para la escuela primaria José Hernández de la localidad de Villa del Prado, Dpto. Santa María.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 10

Mociones de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

37791/R/23

Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al Programa 415 de Mediación Extrajudicial y su ejecución presupuestaria.

Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

PUNTO 11

Mociones de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

37794/R/23

Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al Programa 659/4 Atención Integral para Personas Mayores y su ejecución presupuestaria.

Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social

PUNTO 12

Mociones de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

37944/R/23

Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a las ayudas económicas brindadas por el Ministerio de Desarrollo Social en concepto de asistencia alimentaria para grupos vulnerables (Oncológicos-VIH).

Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social

PUNTO 13

Mociones de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

37979/R/23

Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a problemas de inseguridad de la escuela primaria Gral. San Martín, de la ciudad de Río Cuarto.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 14

Mociones de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

37762/R/23

Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a la obra de Nexos Cloacales para barrios de la ciudad de Córdoba, -Urbanización de barrios populares. Etapa 2-.

Comisión: Servicios Públicos

PUNTO 15

Mociones de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

37496/R/23

Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el Programa 766 - Participación Ciudadana en Políticas de Seguridad.

Comisión: Legislación General

PUNTO 16

Mociones de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

37470/R/23

Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a los créditos sin interés para emprendedores.

Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

PUNTO 17

Mociones de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

37658/R/23

Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el estado edilicio de la escuela primaria Gobernador Amadeo Sabattini e IPEM Nº 5 Eva Perón en virtud de reclamos realizados en los años 2021 a la fecha.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 19

Mociones de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

38121/R/23

Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al canal maestro de la empresa Aguas Cordobesas en el tramo que atraviesa la localidad de Bouwer, Dpto. Santa María.

Comisión: Servicios Públicos

PUNTO 20

Mociones de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

38127/R/23

Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a la campaña de difusión de la Línea 102 de denuncias contra el trabajo infantil.

Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social; Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

PUNTO 21

Mociones de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

38128/R/23

Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al Programa 642, Fortalecimiento de la Economía Popular y Familiar en los últimos tres años.

Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales

PUNTO 25

Despachos Art. 100

37568/L/23

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la localidad de Quilino, Dpto. Ischilín.

Comisión: Legislación General; Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

PUNTO 26

Despachos Art. 100

37983/L/23

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio comunal de la localidad de Avellaneda, Dpto. Ischilín.

Comisión: Legislación General; Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

PUNTO 27

Despachos Art. 100

38197/L/23

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio comunal de la localidad de Conlara, Dpto. San Javier.

Comisión: Legislación General; Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

PUNTO 29

Despachos Art. 100

38200/L/23

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la localidad de San José. Dpto. San Javier.

Comisión: Legislación General; Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

PUNTO 30

Despachos Art. 100

38295/L/23

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la localidad de Villa Sarmiento, Dpto. San Alberto.

Comisión: Legislación General; Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

PUNTO 31
Despachos Art. 100

28689/L/19

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, iniciado por el Legislador Miranda, declarando a la lengua ranquel como parte del patrimonio cultural intangible e inmaterial de la provincia en todas sus formas de manifestación.

Comisión: Legislación General; Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 32
Despachos Art. 100

38298/L/23

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, iniciado por la Legisladora García, facultando al Poder Ejecutivo a titularizar a los docentes con situación de revista interina en cargos no directivos y en horas cátedras, que se desempeñen en Modalidad Jóvenes y Adultos en centros educativos de Nivel Secundario presencial y semipresencial y/o a distancia.

Comisión: Legislación General; Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 1
Mociones de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

37144/R/23

Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echavarría, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a la denuncia radicada por la Municipalidad de Villa Carlos Paz contra la Cooperativa Integral (COOPI) por vertido de líquidos cloacales sin tratar en el lago San Roque.

Comisión: Ambiente

PUNTO 5
Mociones de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

37594/R/23

Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a la situación actual del Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (IPAD).

Comisión: Salud Humana

PUNTO 18
Mociones de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

38116/R/23

Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al camino que colinda con el barrio Country Las Delicias al Este y con tierras del Ejército Argentino al Oeste, denominado Camino a la Calera o Av. Ejército Argentino con el barrio Los Carolinos de la ciudad de Córdoba.

Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

PUNTO 22
Mociones de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

37935/R/23

Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto a la posibilidad de realizar obras viales en el Parque de la Vida.

Comisión: Ambiente; Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

PUNTO 23
Mociones de Preferencia - Artículo 122 y Concordantes

37936/R/23

Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto a la existencia de un proyecto de obra vial que atravesaría el Parque de la Vida ubicado en la zona suroeste de la ciudad de Córdoba.

Comisión: Ambiente; Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-7-

A) FESTIVAL DE SENSIBILIZACIÓN ENLAZÁNDONOS, EN SAMPACHO, DPTO. RÍO CUARTO. ADHESIÓN.

B) REPÚBLICA DE ISRAEL Y FRANJA DE GAZA. MUERTES ANTE EL ATAQUE TERRORISTA DE LA ORGANIZACIÓN HAMAS. PREOCUPACIÓN Y SOLIDARIDAD.

C) REPÚBLICA DE ISRAEL. SITUACIÓN DE LOS ARGENTINOS QUE SE HALLAN EN EL PAÍS. INFORMES. ORGANIZACIÓN HAMAS. DECLARACIÓN COMO GRUPO TERRORISTA. SOLICITUD AL GOBIERNO NACIONAL.

D) 13° FESTIVAL DE LAS MANOS ARTESANAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, DPTO. POCHO. ADHESIÓN.

E) 44° FESTIVAL NACIONAL DEL MAÍZ DE LA PAMPA DE POCHO, EN LA LOCALIDAD DE SALSACATE, DPTO. POCHO. ADHESIÓN.

F) COOPERATIVA LAS CAÑITAS DE LA LOCALIDAD DE EL TÍO, DPTO. SAN JUSTO. 80° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.

G) LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN, DPTO. PUNILLA. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN.

H) DECRETO 185/23, DE LA PRESIDENCIA DE ESTA LEGISLATURA (REDUCCIÓN DIETAS Y SUELDO BÁSICO DE AUTORIDADES SUPERIORES Y FUNCIONARIOS DE LA PLANTA POLÍTICA). ADHESIÓN.

I) 37° CARNAVALES GIGANTES DE LA CIUDAD DE VILLA NUEVA, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. ADHESIÓN.

J) 56° FESTIVAL NACIONAL DE FOLCLORE EN EL AGUA, EN LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO, DPTO. RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN.

Tratamiento en los términos del art. 157 del Reglamento

Sra. Presidenta (Prunotto).- Conforme a lo acordado en Labor Parlamentaria y si no objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración: 38384, 38408, 38409, 38423, 38425, 38436, 38443/D/23, 38445/R/23, 38463/D/23 y 38464/D/23 sometidos a votación conforme a los textos acordados.

En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobados.

-8-

LOCALIDAD DE CHUÑA HUASI, DPTO. SOBREMONTES. RADIO COMUNAL. MODIFICACIÓN.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Corresponde dar tratamiento al punto 28 del Orden del Día, proyecto de ley 38198/L/23, por el que se modifica el radio comunal de Chuña Huasi, en el Departamento Sobremontes.

Aprovechamos para saludar al presidente comunal saliente y a la legisladora, mandato cumplido, Emilia Eslava. Muchísimas gracias por acompañarnos. (Aplausos).

Tiene la palabra el legislador Marcelo Eslava.

Sr. Eslava.- Gracias, señora presidenta, señores legisladores.

En primer lugar, quiero saludar al jefe comunal nuevo, Juancito Mosconi, felicitarlo y desearle éxito en su primera gestión a cargo de la comuna. También, saludar a mi hija, la legisladora mandato cumplido, María Emilia Eslava, y al jefe comunal saliente, el papá de Juan, por haber trabajado mucho en este proyecto.

Agradezco a este Cuerpo legislativo por permitirme fundamentar la modificación del radio comunal de Chuña Huasi, contenido en el proyecto de ley 38198/L/23, que se encuentra en tratamiento.

Chuña Huasi es una pedanía del Departamento Sobremontes, ubicada al suroeste del mismo, contando con una población de 560 habitantes, aproximadamente, un lugar chico, cálido, pero con mucha historia.

Su nombre es de origen aborigen, sus localidades están completamente relacionadas al contexto no sólo histórico, sino también ambiental, tal como el Paraje de La Totorilla, Las Piedritas, El Rodeito, Capi Cuchuna y Chuña Huasi. Estos parajes se encuentran muy distantes los unos de los otros.

Hoy esta Comuna cuenta con cuatro centros educativos y de salud, distribuidos en tres asentamientos que durante el Gobierno de Héctor Mosconi -Cacho, como le

decíamos nosotros-, fue creciendo gradualmente sin parar, con el apoyo del Gobierno de la Provincia y haciendo necesaria la modificación del radio comunal, constituyéndose en tres islas o polígonos, el de Chuña Huasi, El Rodeito, La Totorilla, donde se prestan los servicios esenciales, tales como educación, salud y seguridad, etcétera.

Señora presidenta: cabe destacar que las autoridades de esta localidad han cumplimentado los requisitos existentes a los fines de obtener la correspondiente ampliación del radio comunal, adjuntando además del plano su correspondiente memoria descriptiva y fundamentación discriminada por sectores de la ampliación pretendida.

Todo el procedimiento fue llevado adelante por el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales, trabajando en conjunto y acordando el mismo con las autoridades de la Comuna, considerando, principalmente, la actual prestación de servicios, las futuras ampliaciones y la necesidad de planificar el desarrollo urbano de la localidad, para prever aquellos aspectos relacionados a una mejor calidad de vida para su habitantes.

Asimismo, en el expediente analizado por las comisiones intervinientes, en el cual obra el informe emitido por el Departamento de Cartografía de la Dirección General de Catastro y el dictamen de Fiscalía del Estado, concluyendo que era oportuno y conveniente de enviar a esta Legislatura la modificación de radio en cuestión.

Señora presidenta, cada vez que en este recinto se trata un proyecto de esta naturaleza, un proyecto de ley, como es la modificación de radios, reiteramos la gran importancia y el valor que tiene para los municipios y comunas el contar con la ampliación del radio urbano, muchas veces frente al crecimiento demográfico y el progreso de las comunidades.

Es necesario ordenar jurídicamente el territorio de la Comuna de Chuña Huasi para una buena prestación de servicios.

Con el tratamiento de esta iniciativa legislativa, intentamos remediar esas condiciones de incertidumbre que perjudican el desarrollo económico y social de la localidad.

Por los motivos expuestos, y habiéndose cumplido con los requisitos que exige todo procedimiento administrativo y legislativo, quiero adelantar el voto afirmativo de los integrantes del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba y solicitar a mis pares y a los demás bloques la aprobación del presente proyecto.

Muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Muchas gracias, legislador.

Tal como se acordara en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a poner en consideración el proyecto en general y en particular en una misma votación.

En consideración el proyecto, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos Municipales y Comunales y de Legislación General.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobado en general y en particular.

Se comunica al Poder Ejecutivo. (Aplausos).

Por un error involuntario de Secretaría se advirtió la falta de quórum.

Vuelvo a poner en consideración la aprobación del ejido municipal de Chuña Huasi.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobado.

AL SR.

PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL

Cr. Manuel Fernando CALVO

S.//D.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio, a los integrantes del Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3º, de la Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la modificación del Radio Comunal de la localidad de Chuña Huasi, Departamento Sobremonte de esta Provincia de Córdoba.

A partir de la creación de la Unidad de Trabajo Provincia – Municipios y Comunas ("Mesa Provincia - Municipios"), producto de la Resolución Conjunta N° 132 de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.

Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos aprobados por las Leyes N° 8864, N° 9078 y N° 9108, que -sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia institucional- permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia.

Esta Política de Estado continuó con la sanción de la Ley N° 9206 de Regionalización y Creación de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales orientadas a la descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.

En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de 1983 y, especialmente, luego de la reforma constitucional de 1987.

Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas mencionadas, se decidió dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el entonces Ministerio de Gobierno comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.

En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley N° 9206, exclusivamente en materia de radios, que dio bases sólidas para promover la fijación de los nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.

Con posterioridad a ello, y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios", se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y Comunas a concretarlos.

La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.

Debe agregarse que, como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo dispuesto por las ya citadas Leyes Nros. 9206 y 9354.

Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la materia brindan las modernas tecnologías y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos, a los fines de su debida registración en la Dirección Provincial de Catastro.

Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone fue analizado por el Ministerio de Gobierno y Seguridad, a través de la Secretaría de Coordinación Territorial, acordando el mismo con las autoridades de la Comuna de Chuña Huasi, en función de la actual prestación de servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio del poder de policía comunal y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad para prever, en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Chuña Huasi.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 8102, la Comuna de la referencia fijó su radio, aprobándolo mediante Resolución N° 13/2022, razón por la que se ha cumplido con todas las exigencias requeridas por la mencionada Ley Orgánica para modificar el radio comunal de la localidad de Chuña Huasi.

Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.

Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.

JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

JULIÁN MARÍA LÓPEZ, MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD

JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.

**LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY**

Artículo 1º.- MODIFÍCASE el radio comunal de la localidad de Chuña Huasi, Departamento Sobremonste, de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley N° 8102, según se detalla en el plano confeccionado por la citada Comuna, aprobado por la Dirección General de Catastro en Informe N° 33 de fecha 1º de diciembre de 2022, el que, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.

Artículo 2º.- El radio comunal de la localidad de Chuña Huasi, se encuentra delimitado por tres polígonos: el polígono Chuña Huasi, de nueve (9) lados y nueve (9) vértices; polígono Rodeito, de cuatro (4) lados y cuatro (4) vértices; y polígono Totorilla, de quince (15) lados y quince (15) vértices, cuyas medidas y coordenadas georreferenciadas se especifican en el plano mencionado en el artículo precedente, encerrando una superficie total de ciento noventa y un hectáreas, ocho mil sesenta y cuatro metros cuadrados (191 has., 8.064 m²).

Artículo 3º.- Los puntos amojonados son:

- a) MOJÓN N° 1, de coordenadas: X = 6688455.47; e Y = 4392472.08; y
- b) MOJÓN N° 2, de coordenadas: X = 6688730.10; e Y = 4392616.31.

Artículo 4º.- De forma.

JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

JULIÁN MARÍA LÓPEZ, MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD

JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.

DESPACHO DE COMISIÓN

Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 21 de Noviembre de 2023

A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:

Las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunes y de Legislación General al dictaminar acerca del Expediente N° 38198/L/23, iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio comunal de la localidad de Chuña Huasi, Departamento Sobremonte, , **ACONSEJAN**, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, **PRESTARLE APROBACIÓN** de la siguiente manera:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1º.- Modifícase el radio comunal de la localidad de Chuña Huasi, ubicado en el Departamento Sobremonte de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley N° 8102.

Artículo 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de los lados que conforman los tres (3) polígonos del radio comunal de la localidad de Chuña Huasi, como así también los valores de las coordenadas georreferenciadas de los veintiocho (28) vértices que delimitan dichos lados, se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada comuna y verificada por la Dirección General de Catastro según informe técnico N° 33/2022 de fecha 1 de diciembre de 2022 que, en una foja, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.

Artículo 3º.- Los tres (3) polígonos que definen el radio comunal de la localidad de Chuña Huasi ocupan una superficie total de ciento noventa y una hectáreas, ocho mil sesenta y cuatro metros cuadrados (191 ha, 8.064,00 m²), distribuida de la siguiente manera:

a) Polígono Chuña Huasi: conformado por nueve (9) lados y nueve (9) vértices de ciento cincuenta y una hectáreas, cinco mil setecientos dos metros cuadrados (151 ha, 5.702,00 m²);

b) Polígono Rodeito: conformado por cuatro (4) lados y cuatro (4) vértices de veinticinco hectáreas, un mil trescientos veintidós metros cuadrados (25 ha, 1.321,00 m²), y

c) Polígono Totorilla: conformado por quince (15) lados y quince (15) vértices de quince hectáreas, un mil cuarenta y uno metros cuadrados (15 ha, 1.041,00 m²).

Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:

a) MOJON N° 1, de coordenadas: X=6688455,47 e Y=4392472,08, y

b) MOJON N° 2, de coordenadas: X=6688730,10 e Y=4392616,31.

Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Leg. Ambrosio, Carpintero, Eslava Gustavo, Giraldi, Piasco, Chamorro, Busso, Fernández, Guirardelli, Rinaldi

-9-

FRACCIÓN DE TERRENO EN LA LOCALIDAD DE SALADILLO, DPTO. MARCOS JUÁREZ. UTILIDAD PÚBLICA Y SUJECCIÓN A EXPROPIACIÓN, DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y LA ACTIVIDAD COMERCIAL. DECLARACIÓN.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Tiene la palabra el legislador Siciliano.

Sr. Siciliano.- Gracias, señora presidenta.

Corresponde dar tratamiento al punto 33 del Orden del Día, proyecto de ley 38188, por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un terreno en la localidad de Saladillo, Departamento Marcos Juárez, con el objeto de proceder a la regularización dominial y construcción de viviendas.

Estoy pidiendo que dicho proyecto, presidenta, se ponga en consideración.

Sr. Presidenta (Prunotto).- Tiene la palabra la legisladora Julieta Rinaldi.

Sra. Rinaldi.- Gracias, señora presidenta.

Para comenzar, quiero saludar al jefe comunal, Darío Quiroga, que hoy nos acompaña a todos en el recinto y disculpar, por supuesto, por las eventuales demoras que hemos tenido.

Luego decirle que, desde lo personal, ya que me desempeñé en la gestión anterior de esta Legislatura, como legisladora departamental de Marcos Juárez, que es una alegría poder traer este proyecto al recinto, que es de mi autoría y que, en su oportunidad como presidenta de Legislación General, se logró un despacho unánime de todos los bloques políticos y esto habla del trabajo que se realizó y la necesidad que se logre la expropiación de esta fracción del terreno de la comuna de Saladillo.

También, simplemente para hacer una reseña, quiero decir que conozco desde muy niña esta comuna, porque está pegada a un pueblo, que es Inrville, y que aprecio mucho a su gente y por nuestra sagrada virgen, por supuesto, que festejamos y celebramos todos los 24 de septiembre por nuestras fiestas patronales.

También mi alegría es poder tratarlo porque es muy importante, ya que hemos trabajado con todo el equipo de esta Legislatura, con las autoridades de Catastro, con la Dirección de Saneamiento, con Fiscalía de Estado, con los poseedores de esta localidad tan importante, los que nos pedían por favor que lo regularicemos de una vez por todas y subsanemos esto que viene de vieja data y que estamos en deuda con la comunidad.

Brevemente, voy a señalar de qué cuenta el proyecto, son siete artículos; el primero de ellos declara la utilidad pública y sujeto a expropiación un terreno ubicado en la localidad de Saladillo, Departamento Marcos Juárez, inmueble que cuenta con una superficie de 205 hectáreas y 6074 metros cuadrados con 20 decímetros cuadrados que será destinada a la construcción de vivienda y a la actividad comercial de la Comuna de Saladillo, previo a regularización del dominio de este inmueble.

Tiene otros artículos que, por supuesto, hacen a las formalidades de la ley y, para ser muy breves porque, los tiempos nos apremian y nuestro querido jefe comunal se ha venido de muy lejos, decirles y aclarar que esta expropiación, se trata de un amplio terreno ubicado en esta localidad y se excluyen aquellos inmuebles que actualmente poseen títulos perfectos de propiedad conforme se detalla, en los respectivos planos y en el artículo 1º de esta ley.

Así que, sin más, decirle, señora presidenta, que estamos muy felices todo el Departamento y la comunidad de Marcos Juárez por lograr esto, que es una deuda que, desde hace mucho tiempo, teníamos nosotros con la comuna de Saladillo.

Además, felicitar al intendente y, por supuesto, adelantar el voto favorable de mi bloque.

Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Muchas gracias, legisladora Rinaldi.

Conforme el artículo 17, última parte del Reglamento Interno, al encontrarse presente el legislador David Consalvi, se da por interrumpida su licencia.

Tal como se acordara en Labor Parlamentaria, vamos a poner en consideración el proyecto en general y en particular en una misma votación.

En consideración el proyecto, tal como fuera despachado por las comisiones que en su momento dictaminaron.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).

PROYECTO DE LEY

38188/L/23

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno ubicada en la localidad de Saladillo, Pedanía Saladillo, Departamento Marcos Juárez, destinada a la construcción de viviendas y a la actividad comercial de la Comuna de Saladillo - previa regularización dominial del inmueble en relación a espacios comunitarios y terrenos resultantes-. Dicho inmueble no consta inscripto en el Registro General de la Provincia y tiene una superficie de doscientas cinco hectáreas seis mil sesenta y cuatro metros con veinte decímetros cuadrados (205has. 6.064,20m2) conforme planos de mensura para expropiación visados por la Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba en expedientes

números 0033-104971/17; 0033-104968/17; 0033-104966/17; 0033-104969/17; 0033-104970/17 y 0033-104972/17 todos con fecha de visación 18/09/2017 que, compuesto de seis (6) fojas, se acompañan y forman parte integrante de la presente Ley como Anexo I.

Artículo 2º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas son las indicadas en los respectivos planos de mensura para expropiación que se indican en el Art. 1 de la presente Ley.

Artículo 3º.- El inmueble declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación por esta Ley ingresará al dominio privado de la Provincia y se inscribirá en el Registro General de la Provincia de Córdoba, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias del inmueble a título que corresponda para el cumplimiento de la finalidad de la presente norma.

Artículo 4º.- A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley y atento la particular condición del inmueble objeto de la misma, exímase a la Provincia de efectuar consignación previa del importe indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a las resultas del juicio que se tramite por dicha causa.

Artículo 5º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.

Artículo 6º.- DERÓGASE la Ley Nº 10189.

Artículo 7º.- De forma.

Leg. Julieta Rinaldi

FUNDAMENTOS

La presente iniciativa importa llevar adelante la expropiación de la fracción de terreno ubicada en la localidad de Saladillo, Pedanía Saladillo, Departamento Marcos Juárez, con una superficie de 205has. 6.064,20m², correspondiente a la urbanización de dicha localidad, la que conforme planos de mensura para expropiación visados por la Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba en expedientes números 0033-104971/17; 0033-104968/17; 0033-104966/17; 0033-104969/17; 0033-104970/17 y 0033-104972/17 todos con fecha de visación 18/09/2017, excluye las superficies correspondientes a los inmuebles que actualmente poseen títulos perfectos de propiedad, conforme se detalla en los respectivos planos.

Que los planos mencionados fueron confeccionados dentro del marco de procedimientos administrativos desarrollados en Expediente Nº 0535-102036/2012, a los fines de concretar la expropiación referida en la ley que hoy se deroga, excluyendo aquellos inmuebles sobre los que se hubiera iniciado trámite de usucapión.

Mediante la presente expropiación se tiene por finalidad la regularización dominial de parte de los inmuebles que conforman el ejido de la comuna de Saladillo, los que carecen de títulos de propiedad y se encuentran ocupados por vecinos de forma pública y pacífica y sostenida en el tiempo y que comprenden la mayoría de la población. Existe no obstante un número menor de pobladores que poseen propiedades cuyas titularidades dominiales se encuentran perfectamente saneadas, los cuales no se han tomado en cuenta al momento de realizar las mensuras, por lo que resultan excluidas de los efectos del presente proyecto de expropiación en virtud de la finalidad del mismo.

Conforme a los estudios efectuados de dominio, no existen propietarios o terceros que puedan reclamar la titularidad de los inmuebles objetos del presente proyecto de Ley, habida cuenta de la inexistencia de títulos de propiedad.

En el marco del Expediente Nº 0535-102036/2012, han tomado la intervención de su competencia la Dirección General de Catastro, Delegación Marcos Juárez, informando en relación a los inmuebles afectados por posesión y con titularidad registral, adjuntando documentación respaldatoria; en tanto la Contaduría General de la Provincia se pronuncia en idéntico sentido.

Los informes realizados por las áreas ut supra referidas convienen en la necesidad de excluir de la Expropiación propiciada a los inmuebles que efectivamente han obtenido la titularidad del dominio, ratificando que la expropiación tiene como único objetivo el saneamiento definitivo de todos los títulos de propiedad involucrados, por lo que los inmuebles que sólo han realizado empadronamientos, sin avanzar en la obtención de títulos deben formar parte de este procedimiento, habiendo prestado consentimiento para esta inclusión los mismos poseedores de los inmuebles mediante la firma de acuerdos individuales.

Resulta imperioso perfeccionar la situación dominial ut supra referida, teniendo en especial consideración la política llevada adelante por el Gobierno Provincial con relación a la presente problemática y con un sentido social.

Las actuaciones referidas fundamentaron la sanción de la Ley 10.189, cuya derogación se pretende, como consecuencia de la imposibilidad de concluir el procedimiento de expropiación dentro de los plazos previstos en el artículo 57 de la Ley Nº 6394. Sin embargo, los antecedentes colectados en los expedientes administrativos labrados en su consecuencia resultan apropiados y de gran utilidad para el trámite posterior, en especial los planos para expropiación confeccionados.

Por lo expuesto, y en el convencimiento de la importancia, oportunidad y conveniencia que tiene la propuesta solicito la aprobación del presente proyecto.

Leg. Julieta Rinaldi

DESPACHO DE COMISIÓN

Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 06 de Diciembre de 2023

A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:

Las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación General al dictaminar acerca del Expediente Nº 38188/L/2023, iniciado por la Legisladora Rinaldi, declarando de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno ubicada en la localidad de Saladillo, Dpto. Marcos Juárez, destinada a la construcción de viviendas y a la actividad comercial, previa regularización dominial del inmueble, derogando la Ley Nº 10189, **ACONSEJAN**, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, **PRESTARLE APROBACIÓN** de la siguiente manera:

**LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY**

Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno ubicada en la localidad de Saladillo, Pedanía Saladillo, Departamento Marcos Juárez, destinada a la construcción de viviendas y a la actividad comercial de la Comuna de Saladillo, previa regularización dominial del inmueble en relación a espacios comunitarios y terrenos resultantes.

Dicho inmueble no consta inscripto en el Registro General de la Provincia y tiene una superficie de doscientas cinco hectáreas, seis mil sesenta y cuatro metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados (205 ha, 6.064,20 m²) conforme planos de mensura para expropiación visados por la Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba con fecha 18 de septiembre de 2017 en expedientes números 0033-104971/17, 0033-104968/17, 0033-104966/17, 0033-104969/17, 0033-104970/17 y 0033-104972/17 que, compuestos de seis (6) fojas, se acompañan y forman parte integrante de la presente Ley como Anexo I.

Artículo 2º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas son las indicadas en los respectivos planos de mensura para expropiación que se indican en el artículo 1º de la presente Ley.

Artículo 3º.- El inmueble declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación por esta Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar las transferencias del inmueble a título que corresponda para el cumplimiento de la finalidad de la presente norma.

Artículo 4º.- A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley y atento la particular condición del inmueble objeto de la misma, exímase a la Provincia de efectuar consignación previa del importe indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a las resultas del juicio que se tramite por dicha causa.

Artículo 5º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de esta Ley.

Artículo 6º.- Derógase la Ley Nº 10189.

Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Leg. Ruiz, Blangino, Chamorro, Guirardelli, Latimori, Rinaldi, Scorza, Zorrilla, Brizuela, Carpintero.

-10-

**PERSONAL COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN DE LA LEY Nº 8024.
INCREMENTO DE LAS ALÍCUOTAS DE LOS APORTES PERSONALES.
DISPOSICIÓN. LEY Nº 9277, CREACIÓN DE LA APROSS. ARTÍCULO 33.
MODIFICACIÓN.**

Mociones

Sra. Presidenta (Prunotto).- Tiene la palabra el legislador Siciliano.

Sr. Siciliano.- Gracias presidenta.

En función del artículo 119, inciso 12), solicito dar tratamiento al proyecto 38468/L/23.

Sra. Presidenta (Prunotto).- En consideración la moción del legislador Siciliano.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobada.

Tiene la palabra el legislador Siciliano.

Sr. Siciliano.- Solicito la aprobación del proyecto en tratamiento.

Sra. Presidenta (Prunotto).- En consideración la moción del legislador Siciliano.

No hay quórum, vamos a esperar que se conforme el mismo.

-Así se hace.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Tiene la palabra el legislador Torres Lima.

Sr. Torres Lima.- Señora presidenta: solicito que pasemos a un cuarto intermedio de 30 minutos para ver si podemos avanzar con el desarrollo de la sesión y buscar, lógicamente, el quórum necesario.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Pasamos a cuarto intermedio.

-Es la hora 20 y 46.

CUARTO INTERMEDIO

-Siendo la hora 21 y 22:

Sra. Presidenta (Prunotto).- Continúa la sesión.

Tiene la palabra el legislador Siciliano.

Sr. Siciliano.- Gracias, presidenta.

Voy a solicitar poder volver al tratamiento establecido originalmente en Orden del Día, retirar la moción de poder -de acuerdo al artículo 119- saltarme el Orden del Día, en función de eso, pido la consideración de esta moción que estoy realizando.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Se pone en consideración la moción del legislador Siciliano.

Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobada.

-11-

RECTOR NORMALIZADOR DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA, MGTER. JORGE OMAR ABEL JAIMEZ. RENUNCIA AL CARGO. ACUERDO Y DESIGNACIÓN DE LA ESPECIALISTA LIC. MARÍA JULIA OLIVA CUNEO.

Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión

Sra. Presidenta (Prunotto).- Tiene la palabra el legislador Siciliano.

Sr. Siciliano.- Gracias, presidenta.

Se encuentra reservado el proyecto 38434/L/23. Perdón, presidenta, le pido disculpas.

Voy a solicitar, si es posible, el tratamiento del proyecto, entiendo que está reservado, 38434/L/23, proyecto por el que se acepta la renuncia al cargo del Rector Normalizador de la Universidad Provincial, licenciado Jorge Jaimez, designando en su reemplazo a la licenciada María Julia Oliva Cuneo.

Le pido, presidenta, que me disculpe, porque no he sido del todo claro en el planteo.

En definitiva lo que pido es el tratamiento de dicha ley.

Sra. Presidenta (Prunotto).- En consideración la moción formulada por el legislador Siciliano.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobada.

Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidenta (Prunotto).- Aprobado.

Tiene la palabra la legisladora Julieta Rinaldi.

Sra. Rinaldi.- Gracias, señora presidenta.

Como bien decía, tenemos en tratamiento este proyecto en que está constituida la Cámara en Comisión, que es el proyecto 38434/L/23, por el que se propone la aceptación de la renuncia al magister Jorge Omar Abel Jaimez, del cargo de rector normalizador de la Universidad Provincial de Córdoba, y la designación a la especialista licenciada María Julia Oliva Cuneo, en el cargo antes mencionado.

En el 1º artículo de este proyecto, además de aceptar la renuncia indeclinable del magister Jorge Omar Abel Jaimez, por supuesto que se efectúe un profundo agradecimiento por los servicios prestados por este destacado profesional en el ejercicio de sus funciones, y como 2º artículo, se designa a la especialista licenciada

María Julia Oliva Cuneo en el cargo de rectora normalizadora de la Universidad Provincial de Córdoba.

Como dije antes, señora presidenta, quiero detenerme un momento a repasar la trayectoria de la persona a la cual estoy mencionando. La licenciada María Julia Oliva Cuneo, doctoranda en arte por la Universidad Nacional de Córdoba, maestranda en crítica y difusión de las artes por la Universidad Nacional de las Artes, es especialista en producción de textos críticos y de difusión mediática de las artes, es licenciada en escultura por la Universidad Nacional de Córdoba, además, de contar con una profusa formación académica en Ciencias de la Educación y Artes, y de ser partícipe activa de una formación continua e ininterrumpida a lo largo de los años, como lo demostró en su extenso currículum vitae.

Además de contar con la formación que brevemente he querido resumir - porque es larguísimo y muy extenso su currículum- ha ocupado cargos de gestión institucional y educativa de importancia, destacándose la circunstancia que fue decana normalizadora de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba desde febrero de 2017 hasta diciembre de 2019, vicedecana normalizadora de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba, con asignación de las funciones de coordinadora académica y de investigación, entre otros cargos de importancia vinculada a la docencia y a la investigación.

Señora presidenta, está claro que la persona que hoy se propone para desempeñar el cargo de rectora normalizadora, cumplimenta acabadamente con los requisitos establecidos en el Estatuto provisorio y en la Ley de la Creación de la Universidad para tal fin. Por cuanto a los títulos con los que cuenta María Julia Oliva Cuneo, reconocen acabadamente los méritos intelectuales y culturales que poseen, además de contar con una vasta trayectoria académica en conducción y gestión de gobierno en materia educativa.

María Julia Oliva Cuneo, quien es a la fecha secretaria académica de la Universidad Provincial de Córdoba, me permito decir, que cumple holgadamente con los requisitos que dispone el Estatuto de la Universidad Provincial de Córdoba en su artículo 131 y el artículo 14, de la Ley 9375 y sus modificatorias.

También entiendo que es valioso, y no quiero dejar pasar la oportunidad para destacar, nuestra Universidad Provincial de Córdoba, creada en el año 2007 a raíz de la necesidad de una institución universitaria desde Córdoba y para la región. Fiel a nuestra historia, porque siempre hemos sido cuna de conocimiento, -por algo nos dicen La Docta-, territorio donde se fundó la primera universidad argentina en 1613.

Nuestra universidad, desde su nacimiento, ha impartido diferentes carreras desde las facultades que las conforman, que son la Facultad de Arte y Diseño, la Facultad de Educación y Salud, la Facultad de Educación Física, la Facultad de Turismo y Ambiente, contando con más de 4328 egresados y alrededor de 13812 estudiantes.

La Universidad Provincial de Córdoba imparte una formación académica integral y de calidad que impulsa la cooperación con otros niveles de los sistemas educativos provinciales y nacionales, como asimismo con el sector productivo.

Me enorgullece tener en nuestra Provincia, una institución académica pública, abierta, inclusiva y sustentable, que posee entre sus principales características la formación continua para todas las edades, incluso con modalidades flexibles para ampliar oportunidades de acceso a la educación, por mirar la obtención de empleo, tener un programa integral de accesibilidad para personas en situación de discapacidad y cuenta hasta con un molino de papel de fibras naturales instalado en un edificio ecosustentable, y todo eso lo tenemos acá, al alcance de los cordobeses.

Puedo decir que esta Universidad cuenta con una política de Estado sólida, que ha sido encarada por los anteriores gobiernos y que continuará con nuestro actual gobernador, Martín Llaryora, aportando la perspectiva constructiva y transformadora que sea necesaria con el profundo compromiso de fortalecer nuestros valores institucionales y culturales adquiridos.

Somos una región que produce y mucho, que se forma y mucho; somos un gran motor que no es casualidad, señora presidenta, esto viene de la mano de un trabajo político en tal sentido y que continuará firmemente.

Finalmente, quiero poner de resalto que la designación de autoridades es fundamental y no admite mayores dilaciones, tenemos que dotar a la universidad de un rector, quien continuará trabajando en la excelencia académica que se ofrece y como se viene haciendo de manera ininterrumpida, con la prosecución de objetivos principales que es la normalización de esta Universidad Provincial de Córdoba.

Señora presidenta, señores legisladores, entiendo que son suficientes las razones que he expuesto, que justifican darle aprobación al texto en tratamiento.

Por supuesto, adelanto el voto positivo de nuestro bloque designando a la licenciada María Julia Oliva Cuneo en el cargo de rectora normalizadora de la Universidad Provincial de Córdoba.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Prunotto).- Muchas gracias, legisladora Rinaldi.

Antes de darle la palabra al legislador Galo, quiero agradecer la presencia del personal docente, no docente y decanos de la Universidad Provincial de Córdoba; es un orgullo para nosotros que estén acá acompañándonos.

Tiene la palabra el legislador Galo.

Sr. Galo.- Gracias, señora presidenta.

Antes que nada, quiero pedirles disculpas a todos los cordobeses por la falta de respeto de algunos legisladores. Y en esto quiero ser claro, quienes no tienen ganas de trabajar, tampoco deben cobrar sus sueldos.

Hoy es un día significativo para la Universidad Provincial, es un día muy importante para las mujeres del interior de nuestra Provincia. Tengo la dicha de conocer a Julia, quien va a ser la futura rectora, si los legisladores acompañan, es una persona del interior con una mirada plenamente federal.

Tenemos la suerte de que los cordobeses eligieran a Martín Llaryora, una persona que entiende que la educación pública gratuita debe llegar a cada rincón de Córdoba.

En esta nueva era que va a empezar a transitar la Universidad Provincial, debe llegar a cada rincón de la provincia de Córdoba, y Julia es la persona indicada para conducir esta nueva etapa que comenzamos. Sus antecedentes han sido claramente expuestos por quien me anticipó en la palabra. Y la verdad que, en este contexto de crisis nacional que estamos atravesando, nosotros que venimos del interior del interior entendemos lo difícil que se les hace todos los días a los padres traer a sus hijos para que accedan a la educación en las grandes urbes como San Francisco, Villa María, Río Cuarto y la Ciudad de Córdoba. Por lo tanto, necesitamos una mirada más federal, una impronta más federal -así lo marca nuestro gobernador Martín Llaryora- y a esa impronta se la va a dar Julia.

Y, por último, no quiero ni puedo dejar pasar la ausencia del legislador Carlos Briner; me duele muchísimo porque Carlos Briner ha sido intendente de la ciudad de Bell Ville y me gustaría que esté acá acompañando a una bellvillense que va a dar un paso significativo en la historia de la Universidad de Córdoba y un paso significativo en la historia de la educación para el interior de la provincia de Córdoba.

Gracias, señora presidenta, adelanto mi voto positivo y realmente me siento orgulloso como bellvillense. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Prunotto).- Muchas gracias, legislador Galo.

Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.

Sra. Fernández.- Gracias, señora presidenta.

Usted sabe, como muchas que estamos aquí sentadas que, además de que la licenciada Julia Oliva Cuneo está altamente capacitada para conducir nuestra querida y respetada Universidad Provincial, que aunque muy joven en términos de Universidad pública, allá cuando De la Sota definió que era necesario que tuviésemos una Universidad Provincial, esta universidad cuenta con institutos de muchos años, de más de 50 años, muchos de ellos de acabadísima trayectoria académica, en donde muchos argentinos vienen a estudiar a nuestra Universidad Provincial.

Creo que la querida Julia esté al frente de esta Universidad, la pone bien arriba y tiene que ver también, más que con sus trayectoria individual, con la voluntad política de nuestro gobernador Martín Llaryora, de poner en la Universidad en lo más alto de toda la historia y la trayectoria académica que tiene la República Argentina.

Creo que con la presencia de Julia se inicia una nueva etapa, que es parte de la continuidad, de todo lo bien, de todo lo bueno que se viene haciendo en la Universidad, pero también de colocar a la Universidad en un proyecto de producción, de trabajo, de incentivo a nuestros artistas; a nuestros profesionales de la salud, por ejemplo, hace muy poco sacamos la Ley de Regulación de la Actividad Profesional de los Psicomotricistas, que tiene ese instituto tan querido por nosotros, como es el Cabred; la Figueroa Alcorta, la Roberto Arlt, el IPEF, todo eso tiene que estar y está en la agenda del gobernador Martín Llaryora y a nosotros nos pone muy contentos. Pero también me pone muy contenta que sea Julia, porque es una mujer comprometida con todas las mujeres que están en la actividad académica, que hacen

todo bien, que tienen un currículum dilatado, respetado y que muy pocas veces asumen puestos de conducción. Por eso me alegra, creo que la presencia de Julia continúa dotando a la Universidad Provincial de calidad y de respeto, en términos académicos, y sigue de algún modo equilibrando la cancha, que es lo que necesitamos para acortar la brecha de género.

Así que, para nosotras, en esta fuerza política y las mujeres de este Cuerpo, las trabajadoras, las que tenemos responsabilidades en nuestras bancas y usted, como vicegobernadora, estoy segura que vamos a acompañar a Julia asumiendo en muy pocas horas el Rectorado de nuestra querida Universidad.

Sencillamente, como ya dijeron mis compañeros, acompañamos desde el bloque de la mayoría esta moción, de que la licenciada Julia Oliva Cuneo sea la rectora de nuestra querida Universidad Provincial.

Gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Prunotto).- Gracias, legisladora.

Dejando consignada la abstención que adelantara el bloque de la Libertad Avanza, vamos a poner en consideración la adopción como despacho de Cámara en Comisión del proyecto tal cual fue presentado.

Los que estén por las afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobado.

Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobado.

Ponemos ahora en consideración, en general, el proyecto tal como fuera despachado por la Cámara en estado de comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobado en general.

A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.

-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sra. Presidenta (Prunotto).- El artículo 3º es de forma.

Queda aprobado el proyecto en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Felicitaciones, licenciada. (Aplausos).

Córdoba, 19 de diciembre de 2023.

AL SR.

PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL

Myrian Prunotto

S.//D.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el cual se designa Rectora Normalizadora de la Universidad Provincial de Córdoba.

Martín Llaryora, Gobernador de la Provincia de Córdoba - Jorge Córdoba, Fiscal de Estado - Horacio Ferreyra, Ministro de Educación

FUNDAMENTO

La Universidad Provincial de Córdoba transita en la actualidad su etapa de normalización que tiene como fin realizar todas las acciones necesarias tendientes a la realización efectiva de la vida plena democrática.

Esta institución, constituida sobre la base de los ocho institutos fundantes, Escuela Superior Integral de Teatro "Roberto Arlt", Escuela Superior de Artes Visuales "Dr. José Figueroa Alcorta", Escuela Superior de Artes Aplicadas "Lino E. Spilimbergo", Escuela Superior de Cerámica Fernando Arranz, Conservatorio Superior de Música "Félix T. Garzón", Instituto Provincial de Educación Física, Escuela Superior de Turismo "Montes Pacheco" e Instituto de Educación Superior "Dr. Domingo Cabred", se compone en la actualidad de cuatro Facultades, a saber: Facultad de Arte y Diseño, Facultad de Educación Física, Facultad de Turismo y Ambiente y Facultad de Educación y Salud.

A lo largo de todo este proceso normalizador, son numerosas las acciones académicas e institucionales que se fueron llevando adelante. En ese sentido, se crearon nuevas carreras de

grado y pregrado, se transformaron las carreras de nivel superior no universitario en nuevas carreras universitarias a través de la conformación de comisiones académicas que trabajaron intensamente en la transformación de los planes de estudio, se ha obtenido, asimismo, la validez nacional de los títulos correspondientes a todas las nuevas propuestas académicas universitarias en virtud de la resolución aprobatoria expedida por parte del Ministerio de Educación de la Nación, entre otros hechos académicos destacados.

Por otra parte, se reglamentó y se está llevando adelante la regularización de la planta docente a través de la implementación de concursos académicos de regularización, a los y las docentes que se desempeñan en las diversas unidades curriculares que se dictan en las diferentes carreras universitarias. Esto, permite que se ingrese a la carrera docente por evaluación de desempeño y se adquiera además la categoría de docente ordinario de la universidad.

A la fecha han adquirido esta categoría casi el 70% de la planta docente.

Este arduo trabajo, aún tiene un recorrido por hacer.

Para el año 2024, la normalización tiene el desafío por delante de constituir el estamento no docente definiendo la manera de ingresar al mismo y la carrera que dentro de dicho claustro las y los trabajadores podrán realizar.

También será necesario comenzar a desarrollar la equiparación de la contratación de los docentes universitarios convirtiendo las horas cátedras de nivel superior que traen en su mayoría los docentes de la institución en contratos de dedicación mediante los cuales se impulse el desarrollo de la extensión universitaria y la producción de conocimiento a través de la investigación, activos medulares de toda Casa de Altos Estudios.

Por su parte, se torna pertinente comenzar a construir el estamento de egresados, promoviendo a todos aquellos que transitaron la institución a organizarse y empadronarse para ser parte activa de la vida democrática decisoria de la Universidad.

Asimismo, para el ciclo que se inicia, la Universidad Provincial, desde su consolidación académica en la Ciudad de Córdoba, se encuentra ante un nuevo objetivo esencial, que es, comenzar a transitar un camino de Federalización de sus propuestas académicas con el fin de potenciar las posibilidades productivas de las diversas regiones de la Provincia de Córdoba. La Provincia necesita de su Universidad para promover la igualdad de oportunidades de sus ciudadanos, fortalecer el capital humano y propiciar al desarrollo cultural, social y productivo de manera integral.

Finalmente, en esta finalización del año 2023, la Universidad Provincial de Córdoba se encuentra cumpliendo la segunda evaluación institucional de la CONEAU de donde surgirán nuevas recomendaciones que la institución debe considerar para hacer efectivo los objetivos trazados en su proyecto institucional.

Asimismo, ante la renuncia del último Rector Normalizador, Mgter. Jorge Omar Abel Jaimez, se torna necesario designar a una persona de destacada formación, idoneidad y trayectoria que pueda continuar de manera eficaz la gestión de la Universidad Provincial asumiendo la responsabilidad sobre los desafíos que se tienen por delante.

Que conforme lo prevé el Art. 14 de la Ley 9.375 corresponde a éste Poder Ejecutivo proponer a la honorable Legislatura de la Provincia de Córdoba a una persona de reconocida trayectoria y experiencia en el ámbito universitario a los fines de su designación como Rector/a Normalizador/a de la Universidad Provincial de Córdoba.

Que en ese sentido, se destaca la trayectoria de la Rectora propuesta por este Poder Ejecutivo, para asumir las responsabilidades y desafíos en el proceso de normalización, **María Julia Oliva Cúneo** quien es LICENCIADA EN ESCULTURA, recibida en la Escuela de Artes de la Facultad de Filosofía y Humanidades, de la Universidad Nacional de Córdoba, - ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓN DE TEXTOS CRÍTICOS Y DE DIFUSIÓN MEDIÁTICA DE LAS ARTES (Dictamen CONEAU N°425/15) Área Trans-departamental de Crítica de Artes, Universidad Nacional de las Artes (UNA).

Que entre sus ANTECEDENTES, se destacan el haber cumplimentado los siguientes CARGOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, a saber:

- DIRECTORA GENERAL DE COOPERATIVAS Y MUTUALES (Dec-190/22) de la Secretaría de Coordinación de la Municipalidad de Córdoba desde 01/09/2022 y sigue.

- DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN CULTURAL (Dec-101/19) de la Subsecretaría de Cultura, de la Secretaría de Educación, Cultura e Innovación, de la Municipalidad de Córdoba, desde diciembre de 2019 a septiembre de 2022.

- DECANA NORMALIZADORA de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba (RR 025/17) desde febrero de 2017 hasta diciembre de 2019.

- VICEDECANA NORMALIZADORA de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba, (RR 127/16), con asignación de funciones de

- COORDINADORA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN (RR. 131/16) desde agosto de 2016 hasta febrero de 2017.

- DIRECTORA DE LA LIC. EN ARTE Y GESTIÓN CULTURAL, de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba, (RR 110/15) desde junio de 2015 hasta agosto de 2017

- REFERENTE DE INVESTIGACIÓN DE LA LIC. EN ARTE Y GESTIÓN CULTURAL ante SeCyT UPC, desde febrero de 2015 hasta julio de 2015

- ASISTENTE DE DIRECCIÓN en el Museo Provincial Emilio Caraffa, desde septiembre de 2007 a diciembre del mismo año. Cargo 45025 ASISTENTE TECNICO de la administración pública provincial

- Miembro del AREA DE INVESTIGACIÓN Museo Provincial Emilio Caraffa, desde diciembre de 2007 a agosto de 2016. Cargo TECNICO General T3 de la administración pública provincial

-DOCENTE ORDINARIA de la Universidad Provincial de Córdoba, investigadora de organismos públicos (MinCyT Córdoba, CePIA UNC) evaluadora y miembro de comisiones institucionales (Comisión ejecutiva y Comisión estratégica de Evaluación Institucional UPC ante CONEAU, etc.) entre otros antecedentes institucionales y profesionales que acompañan la presente.

- Actualmente, Secretaria Académica de la Universidad Provincial de Córdoba

Por todo lo expresado supra, es que se considera la aprobación de la designación de la rectora Normalizadora a fines de poder afrontar sus últimos desafíos y así ya llegar a la vida plena universitaria.

Por las razones expuestas y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 144 de la Constitución Provincial solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial para que ésta le preste aprobación si así lo estima oportuno.

Sin otro particular, saludo a la Sra. Presidenta con distinguida consideración.

Martín Llaryora, Gobernador de la Provincia de Córdoba - Jorge Córdoba, Fiscal de Estado - Horacio Ferreyra, Ministro de Educación

**LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY**

Artículo 1º.- Aceptase la renuncia al cargo de Rector Normalizador de la Universidad Provincial de Córdoba al Mgr. Jorge Omar Abel Jaimez, D.N.I. N° 14.292.447, para el que fuera designado por Ley N° 10877, agradeciendo los servicios prestados para el desempeño de la función.

Artículo 2º.- Designase a la Especialista Lic. María Julia Oliva Cuneo D.N.I 27.075.751, Rectora Normalizadora de la Universidad Provincial de Córdoba, con los alcances establecidos en el artículo 14 de la Ley N° 9375 y su modificatoria.

Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Martín Llaryora, Gobernador de la Provincia de Córdoba - Jorge Córdoba, Fiscal de Estado - Horacio Ferreyra, Ministro de Educación

-12-

A) LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CONVIVENCIA CIUDADANA. ESTABLECIMIENTO. LEYES NÚMEROS 9400, ADHESIÓN PROVINCIAL AL PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO; 10571, RÉGIMEN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA; 9475, CREACIÓN DEL COPEC Y 9235, POLICÍA DE CÓRDOBA. MODIFICACIÓN.

B) FISCALÍAS DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADOS DE CONTROL EN LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA; Y FISCALÍAS DE INSTRUCCIÓN EN LAS CIUDADES DE VILLA CARLOS PAZ, RÍO CUARTO Y COSQUÍN. CREACIÓN.

C) FISCALÍAS MÓVILES DE INSTRUCCIÓN DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN LAS CIUDADES DE CÓRDOBA, RÍO CUARTO, VILLA CARLOS PAZ, CRUZ DEL EJE, MARCOS JUÁREZ, BELL VILLE, Y VILLA DOLORES; Y JUZGADO DE CONTROL CON COMPETENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CREACIÓN.

D) PERSONAS QUE DESEMPEÑEN FUNCIONES POR ELECCIÓN POPULAR EN LA PROVINCIA. PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO NEGATIVO DE PRESENCIA DE METABOLITOS DE DROGAS PSICOTRÓPICAS ILEGALES. OBLIGATORIEDAD. ESTABLECIMIENTO.

Proyectos con despacho compatibilizado

Sra. Presidenta (Prunotto).- Corresponde el tratamiento del punto 24 del Orden del Día, proyecto de ley 38407/L/23, por el que se establece la Ley de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, y otros proyectos que se compatibilizan.

Antes de darle la palabra al miembro informante de la comisión, dejo consignado que la comisión ad hoc ha emitido un despacho de mayoría y dos

despachos en disidencia, todos los cuales serán íntegramente reproducidos en el Diario de Sesiones.

Ahora sí, tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.

Sra. Fernández.- Gracias presidenta, vengo a informar el proyecto 38407, que fue iniciado por el Poder Ejecutivo, estableciendo la Ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, modificando las leyes 9400, que es la adhesión provincial del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego; 10.571, Régimen de Prestadores de Servicio de Seguridad Privada; la 9475, que crea el COPEC; la 9235 de la Policía de la provincia de Córdoba, compatibilizando con el proyecto 38413, iniciado por el Poder Ejecutivo, que crea once Fiscalías de Instrucción y tres Juzgados de Control de Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba y cuatro Fiscalías de Instrucción en las ciudades de Villa Carlos Paz, de Río Cuarto, Cosquín, y el proyecto 38415, iniciado por el Poder Ejecutivo, creando también Fiscalías móviles de Instrucción de Lucha Contra el Narcotráfico en la ciudad de Córdoba, en Río Cuarto, en Villa Carlos Paz, en Cruz el Eje, Marcos Juárez, Bell Ville y Villa Dolores, así como un Juzgado de Control con competencia en la lucha contra el narcotráfico en la Primera Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Córdoba. El mismo cuenta con despacho favorable de la comisión ad hoc, integrada por los once presidentes de bloques parlamentarios que componen este Cuerpo.

El proyecto establece una política de Estado en cuanto a la seguridad pública y la seguridad ciudadana, creando en materia de prevención y lucha contra los delitos y contravenciones el sistema integrado de seguridad pública y de seguridad ciudadana de nuestra provincia con el objeto de promover la paz y la tranquilidad social, en un marco de diseño participativo y de gestión asociada con los municipios y con las comunas.

Cabe destacar, que luego de un amplio debate dentro de la comisión ad hoc, la iniciativa llega a este recinto y hay que decir que es en gran medida fruto de todo el consenso del que fuimos capaces de construir porque en materia de seguridad pública nosotros queremos dejar claro que se trata de una política de Estado, pretendemos que se trate al momento del abordaje, tanto en la comisión como en este recinto de una política de Estado en el marco de la pluralidad y del compromiso para garantizarle a todos los cordobeses y cordobesas este derecho que es el de la seguridad, el acceso y la posibilidad de gozar y de vivir en un ambiente seguro.

Por eso también han intervenido y convocamos desde la comisión ad hoc a más de 10 expertos en la materia, pertenecientes a distintas universidades y organismos, representantes de asociaciones vinculadas con la problemática e integrantes de la fuerza policial, quienes expusieron y evacuaron preguntas de los legisladores que integraron ésta comisión, conformada para dar el tratamiento a esta iniciativa, y los voy a nombrar presidenta, porque me parece justo, porque además le dedicaron muchísimas horas al tratamiento de este proyecto enviado por el Ejecutivo. Participó el doctor Jorge Jofré, que es director de las Diplomaturas de Seguridad de la Blas Pascal y de Ciencias Forenses e Investigación Criminal, docente de la Escuela de Policía; Martín Angerosa exdelegado del RENAR/ANMaC Córdoba, ex coordinador nacional del plan de entrega voluntaria de armas; Mariana Carbajo, que es especialista en Criminología y docente de la Universidad Nacional de Córdoba y de Villa María; Pedro Soda, también especialista de la misma Universidad de Villa María y miembro del Observatorio de Criminología de la Universidad; Ricardo Martínez y Hugo Schiarano, representantes de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación; Sergio Job, que es doctor en Ciencias Políticas, es coordinador de la Regional Centro de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el acceso a la Justicia, coordinador también de la asistencia técnica de fortalecimiento del Observatorio de los estudios sobre convivencia y seguridad ciudadana; Javier Sosa, exsecretario de Seguridad, exasesor del Senado en temas de Justicia, seguridad y narcotráfico; Cristian Valquinta, que es el presidente del Círculo de Oficiales de la Policía de la provincia de Córdoba; Jorge López, excomisario que está a cargo actualmente del sector operativo del programa de Prevención y de Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Córdoba.

También quiero decir, sin perjuicio de las limitaciones legales de competencias jurisdiccionales que en el tema de seguridad condicionan cotidianamente el accionar de los gobiernos locales, es para nosotros incuestionable el nuevo rol que los municipios asumen en la materia ante un reclamo incesante de sus comunidades y ante la magnitud de la problemática, situación que se encuentra además potenciada en zonas de mayor concentración urbana, el crecimiento de la demanda ciudadana

por más seguridad hace sentir que los municipios, por ser la primera persona jurídica de carácter pública más inmediata en los individuos y en los grupos sociales de carácter local, son los primeros receptores y son los catalizadores de necesidades sociales y asumen dentro y en algunos casos fuera de las posibilidades jurídicas y fácticas, la necesidad de dar respuesta a esas demandas de seguridad, por eso la creciente existencia de planes de programas municipales de seguridad ciudadana que incorporan una noción del término mucho más amplio, una noción que entiende a la seguridad como un elemento ineludible para el desarrollo comunitario, que no solo tiene que ver con la realidad preventiva o defensiva ante el delito, sino con un sentimiento que hace a la plenitud del individuo en su vida de relación con la comunidad y a las posibilidades ciertas del desarrollo personal y comunal.

Entendemos por eso, señora presidenta, que una sociedad, si una sociedad es insegura no tiene garantizadas las oportunidades para desarrollarse.

Por eso, para nosotros, es imprescindible que el Estado asuma la responsabilidad de otorgarles seguridad a los ciudadanos, que es una tarea que va más allá de evitar delitos y erradicar violencias.

Entrando a los fundamentos de este proyecto que nos convoca, presidenta, hay que decir que este proyecto se dispone por nuestra Constitución provincial, la cual en su artículo 19, inciso 1), consagra el derecho a la seguridad personal, y el artículo 144, inciso 16), dispone claramente que el gobernador es la máxima autoridad de las fuerzas de seguridad provinciales y que tienen bajo su custodia e inspección, de acuerdo con las leyes, todos los objetos de la policía de seguridad y vigilancia y todos los establecimientos públicos de la provincia, Y que la 9235 y sus modificatorias, además de la 9728; además de la 8231, del servicio penitenciario; además del Estatuto del Personal de la Administración Pública; además de la ley que prevé el Régimen de Empresas Prestadoras de Servicios de Seguridad Privada, como la del régimen aplicable a la utilización de videocámaras destinadas al mantenimiento y preservación de la seguridad ciudadana; así como la Ley de Defensoría de las Fuerzas de Seguridad, todo eso ya conforma una arquitectura jurídica en materia de seguridad que le da cuerpo a cualquier profundización e innovación en materia de políticas de seguridad en esta provincia.

En líneas generales, señora presidenta, la iniciativa que venimos a tratar aquí, se enfoca en tres cuestiones, primero, el fortalecimiento del vínculo del sistema de seguridad con la ciudadanía; segundo, el nuevo rol que la política tiene que asumir con liderazgo en materia de seguridad, porque durante muchos años muchas veces se nos dijo que lo mejor era no hablar de seguridad, y nosotros venimos a decir que hay que hablar de seguridad de manera integral y holística, porque es lo que en definitiva garantiza los entornos seguros de las ciudades, garantiza el desarrollo integral de las personas y, tercero, un diseño innovador prevé como eje un diseño innovador de las instituciones de seguridad.

De esta forma, es que se diseña la ley, un sistema integrado planteando algunas cuestiones innovadoras, como son, primero, los guardias locales de prevención y convivencia; segundo, la obligación de la realización del narcotest para los funcionarios; tercero, la incorporación dentro del sistema integrado de seguridad a las empresas de seguridad privada; cuarto, la creación de nuevas Fiscalías Antinarcotráfico, especialmente en el interior; quinto, un plan de desarme para los vecinos; sexto, el uso de armas no letales o de letalidad reducida; séptimo, la incorporación del nuevo programa de utilización de videocámaras.

Es decir, estamos en presencia de un cambio de paradigma en materia de seguridad pública, de algún modo, profundizando esta idea de gobernanza basada en la coordinación de entre los poderes por un lado y la concertación de políticas entre el sector público y los sectores privados por el otro.

Hay que destacar también, presidenta, que dentro del impulso de estrategias de posicionamiento territorial que han asumido los municipios a nivel mundial en Latinoamérica, adquiere un papel trascendental e ineludible, la denominada seguridad ciudadana, una base no siempre cierta como presupuesto para centrar el análisis del desarrollo económico de las comunidades que hacen que nos preguntemos si es factible esto que decíamos el desarrollo local sin seguridad.

Todos y todas sabemos, presidenta, que el encontrar seguridad en un determinado territorio implica al menos en la región, al menos en los países menos desarrollados o en vías de desarrollo una ventaja competitiva considerable frente a otros municipios o regiones y un punto de partida primordial para hablar de un plan de desarrollo local.

Recuerdo, señora presidenta, porque usted tiene una trayectoria municipalista, lo fundamental y cómo se ha profundizado en la agenda de los gobiernos locales la necesidad de generar entornos más seguros que logren erradicar las violencias, las contravenciones y la prevención de los delitos.

En tal sentido la problemática de la seguridad es, como generalmente escuchamos a lo largo del tratamiento de la comisión ad hoc, un fenómeno multicausal, es un fenómeno plurisocial y, además, de ser universal y sabemos muy bien que no existe una única solución sino múltiples soluciones para cada uno de los aspectos del problema y muchas veces exceden la competencia y el margen de la gobernabilidad de los gobiernos locales quienes, sin embargo, por diversos motivos están tomando cada vez más protagonismo mayor en el diseño de las políticas de seguridad y al hacerlo también advierten que sólo se puede construir una política que aumente el nivel de efectividad si se cuenta con la participación y con el involucramiento real de todos los actores sociales.

En virtud de ello es que el proyecto que hoy estamos tratando necesariamente deroga una parte o algunos artículos de la 9235 y también deja muchos otros.

Así es que, adentrándonos al texto de la ley, en el artículo 1º, se establece que esta ley es una ley de orden público, es decir, tal como señaló en algún momento la Corte Suprema de Justicia, los legisladores definieron a la ley como contenedora de un conjunto de principios de orden superior, estrictamente vinculados a la existencia y a la conservación de la organización social establecida y limitadora de la autonomía de la voluntad, puesto que las leyes de orden público son aquellas que receptan los principios sociales, políticos, económicos, morales de cada comunidad jurídica cuya existencia, en definitiva, está por sobre los intereses individuales y sectoriales.

Por eso, cuando algunos legisladores opositores planteaban la necesidad -ahí lo veo al legislador Spaccesi- en la comisión de que esta ley sea de orden público nos pareció atinado incorporar con claridad este concepto arrancando la ley no más.

En el artículo 2º, se establece la composición del sistema integrado de seguridad pública ciudadana, demostrando el abordaje multisectorial, multiagencial, integral, contextualizado en la materia, y por eso no solamente intervienen los tres poderes del Estado -el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial-, también las fuerzas de seguridad de la provincia sumando además el Instituto de Planificación y Formación por la Seguridad y la Convivencia, los guardias locales de prevención y convivencia ciudadana, los consejos departamentales, municipales y barriales de prevención y convivencia creados por la Ley 9235, el Observatorio de Seguridad y Convivencia y también las prestadoras privadas de seguridad.

El artículo 3º, concordante con lo dispuesto por la Constitución provincial, disponemos los legisladores que el Estado provincial es el responsable, primero, de las políticas públicas de seguridad y de seguridad ciudadana, además, establecemos la competencia del Poder Ejecutivo en materia de seguridad pública en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144, inciso 16) de la Constitución provincial.

Además, en el artículo 5º, establecemos con claridad el objeto de la ley que, como ya dijimos, es la prevención y la lucha de contravenciones y delitos y el mantenimiento del orden de la tranquilidad social en el marco de lo establecido en el Estado de derecho y respetando, por supuesto, las garantías constitucionales.

También se realiza una definición teleológica de la seguridad ciudadana, ya que tiene como finalidad promover la convivencia ciudadana garantizando la integridad, el legítimo disfrute y la posesión de sus bienes en efectivo ejercicio de sus derechos y libertades.

En el artículo 6º, se promueve la participación ciudadana de las personas destinatarias de las políticas de seguridad pública y seguridad ciudadana, en particular, de los referentes de los sectores empresariales y de las organizaciones de la sociedad civil.

En el artículo 7º, lo que hacemos es ratificar la plena vigencia de la Ley 9235, en cuanto al Instituto de Planificación y Formación por la Seguridad y Convivencia, los guardias locales de prevención y convivencia, las fuerzas provinciales de seguridad dependientes del Estado provincial, tanto de la Policía como del Servicio Penitenciario.

En el artículo 8º, se establece que las Leyes 10.200 y 10.571 rigen a la Fuerza Policial, que es creada por la 10.200, y de las empresas prestadoras de la seguridad privada respectivamente; posteriormente, se establece que en el Poder Ejecutivo está la misión de comunicar las políticas de seguridad mediante campañas que así lo

transparenten, formando al mismo tiempo la ciudadanía en valores y en el ejercicio de sus responsabilidades.

Los artículos 10 al 16, se refieren a la creación y al funcionamiento del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, esto fue tremendamente discutido en la Comisión, que elabora, que controla ese instituto, y evalúa la implementación de los programas de formación y de capacitación de las Fuerzas Provinciales de Seguridad, de guardias locales y de empresas prestadoras de servicios de seguridad, integrándolo al Consejo de Planificación Estratégica de Córdoba.

Los artículos 17 al 27, se refieren, puntualmente, a los guardias locales de prevención y convivencia, permitiéndose la incorporación de agentes locales capacitados y certificados para el uso de armas menos letales o de letalidad reducida, como auxiliares de la Policía, en el marco de estrategias comunitarias de aproximación a los vecinos.

Es imperativo, presidenta, tener presente que el artículo 144, inciso 16), de la Constitución provincial, establece que el gobernador ostenta la máxima autoridad sobre las Fuerzas de Seguridad, y en caso de requerimiento está obligado a prestar auxilio a las municipalidades de conformidad con la legislación vigente y, paralelamente, en el artículo 187, se señala que las municipalidades tienen la facultad de solicitar la asistencia de la Fuerza Pública subrayando que dichas municipalidades no ejercen jurisdicción sobre estas fuerzas; pero, no obstante, esta disposición no impide que las municipalidades desarrollen o implementen estrategias institucionales que, sin replicar la estructura policial provincial, busquen establecer un enfoque preventivo. Este enfoque pretende fomentar el desarrollo de sistemas de prevención y de competencias propias de las Fuerzas de Seguridad provincial.

Es fundamental también comprender, presidenta, que la iniciativa municipal en este ámbito no menoscaba la autoridad y las funciones asignadas constitucionalmente al gobernador y de las Fuerzas de Seguridad provinciales; por el contrario, busca complementar y fortalecer los esfuerzos en pro de la seguridad ciudadana contribuyendo a la construcción de un entorno más seguro y más resiliente.

En este contexto, es crucial que las acciones emprendidas por las municipalidades se desarrollen de manera coordinada y armónicas con las disposiciones legales y constitucionales, garantizando la integridad del sistema de seguridad en su conjunto y promoviendo, por supuesto, la participación activa de la comunidad en la construcción de un entorno más seguro.

Cabe aclarar, presidenta, que dichos agentes locales tan solo tienen facultades de disuadir, de prevenir y de hacer cesar la comisión de todo tipo de faltas, infracciones o contravenciones, pero en ningún caso pueden actuar en tareas de investigación y/o persecución delictiva, las cuales son un resorte exclusivo de la Policía y del Ministerio Público Fiscal, atento a lo dispuesto por el Código Procesal Penal y el artículo 171 de la Constitución provincial. Este fue un tema muy discutido también con colegas legisladores que fueron intendentes.

En cuanto al uso de las armas no letales o de letalidad reducida, queremos aclarar, presidenta, que no se establece la obligatoriedad de su uso, esto fue también muy preguntado, muchas veces preguntado a los especialistas, y también muy discutido entre los legisladores, por eso hago hincapié en esto. La ley no establece la obligatoriedad del uso de las armas de letalidad reducida, tan solo se prevé la posibilidad de una coordinación intergubernamental –provincia, gobiernos locales– para su utilización, previa capacitación y previa certificación expedida por la autoridad competente.

Además, señora presidenta, su uso será siempre conforme a los criterios de oportunidad y conveniencia fijados por el Ministerio de Seguridad, en el artículo 26 de la ley, y únicamente dentro del marco que ese Ministerio establezca en los protocolos de actuación, de acuerdo al artículo 37.

Los artículos 28 al 38, se refieren ya, específicamente, a otro eje del Sistema de Seguridad Integrada, que tiene que ver con la participación de la gestión privada de seguridad. Lo que hacemos aquí es incorporar a las empresas privadas de seguridad como nuevos actores del sistema, permitiendo que su personal pueda usar armas no letales, previa capacitación, previa certificación, en la prestación de servicios al sector público, a las empresas y a las organizaciones de la sociedad civil.

La incorporación de las empresas privadas permite concentrar los recursos disponibles en las fuerzas de seguridad, como así también en el Ministerio Público

Fiscal o en el Poder Judicial, en las tareas propias que sus misiones y sus finalidades importan, entre otras, la prevención del delito, de las contravenciones y el mantenimiento de la tranquilidad y la paz pública.

Por eso, resulta estratégicamente necesario disponer del personal adecuado que lleve adelante, en dichos ámbitos, una serie de actividades y de tareas conexas, complementarias, de apoyo, a fin de no distraer la tarea, la asignación de tareas que el Estado le hace a los recursos especializados que, en este caso, sería nuestra Policía de la provincia de Córdoba.

La Ley 7236, del Estatuto del Personal de la Administración de la Provincia permite en su artículo 7º, además, presidenta, la contratación del personal para llevar adelante una serie de tareas bajo modalidad de contrato de servicio, razón por la cual, además, resulta adecuado, para la satisfacción de esa porción del servicio público, utilizar un mecanismo previsto en la normativa señalada en el marco de ser necesario habilitar esta herramienta que propone este proyecto.

En el artículo 37, por su parte, se dispone que la contratación de las empresas privadas es únicamente para la custodia y la vigilancia de edificios públicos, en espacios públicos, en establecimientos educativos o sanitarios y otros, pero que sirvan para la prestación de servicios provinciales.

Lo propuesto importa también, para nosotros, presidenta, un esfuerzo común y compartido por todos los poderes del Estado, en pos de garantizar la seguridad pública, respetando las incumbencias que a cada uno se les asigna en la Constitución provincial.

En cuanto al uso de armas no letales, me remito a lo expresado por los agentes, al referirme a los agentes locales y a lo dispuesto en el artículo 31, el que establece que la autorización para el uso de armas menos letales debe darse ante el pedido expreso de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada, debidamente justificado y de acuerdo con las formalidades que establezca la reglamentación de la ley.

La Ley 10.571 autoriza a las prestadoras de servicios de seguridad privada a la utilización de medios tecnológicos para el desarrollo de sus tareas, en especial la vigilancia, todo con debidas autorizaciones por parte de la autoridad competente.

En el artículo 42, nos referimos a las cámaras de videovigilancia, tanto de los prestadores de servicios de seguridad, de los establecimientos que desarrollen actividades económicas, que dispongan de ellas y que estén instaladas en espacios privados, pero de acceso público, que se puedan captar en aquellos establecimientos privados de acceso público, imágenes, sonidos en los espacios y lugares públicos.

En este sentido también, presidenta, destacar que los numerosos especialistas en la temática destacan la relación entre la cuestión tecnológica en seguridad y su utilización está ligada a la eficiencia en la medida de la necesidad que surja del diagnóstico previo y de la información que contemos en materia de delitos y de violencias.

En los artículos 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, hasta el 56, 57 incluido, se modifica la Ley 9235, esto en gran medida para corregir la elaboración del viejo artículo 43 del proyecto que envió el Ejecutivo -esto también a sugerencia del legislador Spaccesi.

El artículo 51, se refiere también a la obligatoriedad por parte de las personas que desempeñan funciones, y esto es uno de los ejes principales de este proyecto. Se refiere a la obligatoriedad por parte de las personas que desempeñan funciones por elección popular, ya sea gobernador, vicegobernador, legisladores, tribunales de cuentas, los ministros, los secretarios, directores, subdirectores y asesores, deberán realizarse, deberemos realizarnos el examen toxicológico y presentar el pertinente certificado médico negativo expedido por una institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos y de drogas psicotrópicas ilegales, a quienes, además, se les garantiza por supuesto, el derecho a la intimidad, y el incumplidor será pasible de un procedimiento que disponga la reglamentación y se dispondrá, por supuesto, de asistencia integral como a las personas con consumo problemático de drogas psicotrópicas ilegales implementados por el área competente, en este caso el Ministerio de Salud, a fin de brindar contención y asistencia.

En esto quiero aclarar que lo que nosotros estamos haciendo aquí es compatibilizar con un proyecto presentado por el bloque PRO, concretamente por el legislador Tamis, que presentó un proyecto de ley específico en relación a la

realización del narcotest, del conocido narcotest para todos los funcionarios electos y designados por el gobernador.

Luego en el artículo 52 y 57 ya se crean, como dijimos, las Fiscalías de Instrucción, Fiscalías Móviles, no me voy a detener en esto porque, seguramente, la legisladora Rinaldi, que conoce mejor, que quien les habla, la disposición del Poder Judicial, va a poder dar cuenta de esto.

Por otro lado, señora presidenta, para nosotros ha sido fundamental el proceso, el intenso proceso, acelerado, pero no por eso intenso y profundo, de debate, de discusión entre todos los presidentes del bloque, pero, además, de los legisladores de distintos bloques que acompañaron, que aportaron; ha sido fundamental también el trabajo de nuestros relatores en esta cuestión, de la Secretaría de Comisiones y, por supuesto, de todos aquellos que entendemos que la seguridad en la provincia no es una cuestión partidaria, no tiene que ver con las camisetas, sino que se trata de coincidir en aspectos fundamentales para avanzar en garantizar que los cordobeses y cordobesas tengamos un sistema innovador, eficiente, que le permita a los cordobeses y cordobesas vivir en paz. Por supuesto, que en esto no hay soluciones mágicas, sino que se trata de poder implementar políticas públicas lo suficientemente dinámicas y efectivas, siempre en articulación con los municipios y las comunas, para poder efficientizar todos los recursos disponibles que garanticen que podamos sentirnos seguros.

Es decir, estamos muy satisfechos con este trabajo, no decimos que sea una ley perfecta, decimos que hicimos todo lo posible entre todos aquellos que participamos en el tratamiento de esta ley y queremos llevarle a los cordobeses y cordobesas la tranquilidad de que esta ley se discutió con la suficiente seriedad en todas las horas dedicadas en las comisiones para llegar a un buen producto legislativo.

Con esto, señora presidenta, termino aquí y, por supuesto, independientemente de la participación de colegas del bloque oficialista y opositores, avanzo y mociono a que nos acompañen con esta ley.

Muchas gracias.

Sr. Presidenta (Prunotto).- Muchísimas gracias, legisladora Fernández.

Le corresponde la palabra al legislador Spaccesi.

Sr. Spaccesi.- Señora presidenta, antes que nada, pedir disculpas por algún error que pudiera llegar a cometer, fruto de la inexperiencia en el recinto.

En lo que nunca me van a ver caer es en la cobardía y en la falta de contracción al trabajo frente a los dos temas principales que atañen y sufren, de manera cotidiana, los habitantes de la provincia.

No puedo creer que haya gente que no se haya prestado al debate de la problemática de seguridad y de la profunda crisis económica que nos atañe.

En esta Legislatura tenemos la potestad de abordar profundamente los dos, pero sobre todo uno, que es el de seguridad; y la verdad que ver que gran parte del electorado de la provincia de Córdoba no está representado en el recinto me da hasta vergüenza ajena, me suena inconcebible.

Desde esta banca hicimos un esfuerzo muy importante, estamos agradecidos al bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, porque los hemos visto trabajar al lado nuestro y receptar cada una de las propuestas que fuimos acercando, sin dogmatismos, sin sectarismos, hasta decidiendo en muchas cosas y diciendo “no, che Agus no hay forma, no va a haber armas letales para brindar seguridad”, pero siempre en torno al respeto y la construcción del mejor proyecto posible.

Me parece inconcebible ver gente que cobre por no trabajar, pero mucho más inconcebible me parece ver a cientos de miles o millones de cordobeses sin representación hoy en esta Casa, es algo increíble, no sé cómo van a mirar a sus votantes. Uno por ahí los escucha hablar de manera elocuente, que son los representantes del pueblo, y en uno de los dos temas, hoy no están. Eso la verdad que irá por su cuenta y orden, cuando juramos ahí adelante, Dios y la Patria que nos lo demanden.

Con respecto a esta ley, que creo que es la primera de varias que debemos dar para brindar seguridad a nuestros habitantes, y hablo de la primera de varias porque creo que vamos a tener que trabajar en la reforma del Código Procesal Penal de la Provincia, debemos dotar de juicio ágiles y certeros a nuestros conciudadanos, no puede ser el nivel de prescripción que hay en las causas penales, tenemos que reformar el Código de Convivencia de la provincia de Córdoba. Los hombres en quienes, hasta el día de la fecha, confiábamos prácticamente en exclusividad en la

seguridad de la provincia, la Policía de Córdoba, se ve impedida de trabajar muchas veces en las tareas de prevención por falta de figuras como la posibilidad de pedir a una persona que se identifique o la figura del merodeo, que son cuestiones que tienen que volver.

Tenemos que discutir el régimen de servicio de la Policía la Provincia de Córdoba, de admisión, de formación y terminar de una vez con el bendito 24 por 48; debemos brindarle sueldos de calidad, debemos darle un trabajo de calidad. El nivel de suicidios que tenemos hoy en la fuerza de la Policía de la Provincia de Córdoba es algo vergonzoso y no puede ser que como sociedad abandonemos a esos hombres, los de azul, los de gorra, que son los buenos -no lo que estuvieron cortando las calles de la provincia de Córdoba- que no les estemos brindando la atención psicológica necesaria, una solución de vivienda, un servicio de salud de calidad, hombres a quienes les entregamos la enorme responsabilidad de portar un arma letal y decidir, muchas veces, sobre la libertad, cuando hace su propia vida, teniendo una familia que lo espera.

Tenemos que reformular de manera muy profunda nuestro Servicio Penitenciario; no puede ser que tengamos los casos de corrupción que han pasado, no puede ser que sigamos tratando a los delincuentes como víctimas que nadie sabe explicar bien de qué y no como los criminales que son. Basta de esa visión, de esa doctrina Zaffaroni que ven en los delincuentes una víctima, porque no lo son; víctimas somos cada uno de los cordobeses que los sufrimos.

Otro de los temas muy importantes que tiene esta ley, o uno de los temas más importantes, es la responsabilidad a los intendentes. Los intendentes conocen mejor que nadie la problemática y la criminalidad en su territorio y hoy tiene la posibilidad de hacerse cargo y corresponsable de la seguridad ciudadana. El responsable principal, en última instancia, sigue siendo el gobernador de provincia de Córdoba, pero hoy los intendentes tienen la posibilidad de transformarse en protagonistas y aportar a la solución. Hay ciudades que lo vienen haciendo y que lo vienen haciendo bien. Hoy les estamos otorgando un instituto para que les brinde capacitación, un observatorio para que conozcan en detalle la problemática de su ciudad -si así no lo fuera- pero lo que ya no van a poder hacer es mirar para el costado. Los ciudadanos les exigen a los intendentes respuesta en materia de seguridad y desde esta Casa hoy se les está brindando la herramienta para que lo hagan.

Por otro lado, también les estamos brindando a los privados un claro marco normativo para brindar un servicio de calidad a quienes los contraten. Por ahí me ha tocado escuchar en comisión algunas posturas de la Izquierda y algunos actores de Juntos por el Cambio que hablaban absurdamente de la privatización del servicio de seguridad, algo que ya está pasando en la realidad y que pasa en otros campos, como es natural y deseable que se dé. Hoy en la provincia de Córdoba el 60 por ciento de la salud la presta el sector privado y nadie se horroriza, y pasa en la educación también. Basta de tenerle miedo al sector privado, hoy le estamos entregando una excelente herramienta para que empiecen a brindar un servicio a sus clientes, con mejores prestaciones que el anterior.

Es todo por la banca de la Libertad Avanza.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Prunotto).- Muchas gracias, legislador Spaccesi.

Tiene la palabra la legisladora Julieta Rinaldi.

Sra. Rinaldi.- Gracias, señora presidenta.

Mi intervención se va a circunscribir a realizar aportes en relación al proyecto que estamos debatiendo en lo relativo al Título Tercero, de la Creación de Fiscalías de Instrucción, Fiscalías de Instrucciones Móviles de Lucha contra el Narcotráfico y Juzgados de Control en diversas ciudades de nuestra Provincia, tal como lo mencionaba la legisladora informante.

La cantidad de fiscalías, entre las de números y las de móviles, que se crean mediante el presente proyecto son en total veintidós, que van a estar distribuido a lo largo de la Provincia, conforme una estrategia territorial de abordaje al delito, a lo que se le suma a la creación de cuatro Juzgados de Control en la Ciudad Capital.

Somos conscientes de que, si bien el fenómeno del delito depende de una multiplicidad de factores y con causas en contextos históricos de crisis económicas, como la que atravesamos hoy en día, los índices delictivos suelen incrementarse.

Por estas razones, y con el objeto de reforzar la persecución e investigación del delito, se torna necesario ampliar los recursos destinados a esta tarea.

En el mismo sentido, es importante recordar que el Estado provincial ha asumido, desde el año 2012, el desafío de luchar contra el narcotráfico a través de una política activa que incluyó la creación de un fuero judicial especializado, como también de una fuerza policial específica, hablamos de la FPA.

En relación a este último, como sabemos, existe en el seno de la Legislatura una Comisión de Seguimiento y Control de las luchas contra el narcotráfico, cuyo trabajo seguramente retomaremos en febrero próximo, y que he tenido la posibilidad de integrar y, lógicamente, esta Comisión está integrada por miembros de las distintas fuerzas políticas, con quienes hemos realizado numerosas visitas a la FPA, por eso yo y los miembros de otros bloques podemos dar fe del valioso trabajo que viene realizando esta fuerza.

En el mismo sentido, y en atención a las particularidades que demanda la lucha contra el narcotráfico, el proyecto prevé la creación de siete nuevas Fiscalías Móviles especializadas en la materia, con sedes en las ciudades, de Córdoba, Río Cuarto, Villa Carlos Paz, Cruz del Eje, Marcos Juárez, Bell Ville y Villa Dolores, procurando reforzar de este modo la cobertura de toda la extensión del territorio provincial.

Sobre este punto quiero destacar y recordar, señora presidenta, que otras grandes ciudades, como para poner un ejemplo, como Cosquín, Jesús María y Villa María, ya cuentan con Fiscalías Móviles que tienen un ámbito de competencia territorial bastante extenso, y es por eso que, teniendo en cuenta el análisis del mapa del delito, se ha determinado la creación de estas nuevas fiscalías con sedes en aquellas locaciones y corredores, que por sus características demandan mayor eficacia en la intervención del Estado y, especialmente, en aquellos sectores que colindan con territorios de otras provincias vecinas.

La creación de las fiscalías tiene el objeto de poder llevar a la práctica una política de persecución penal focalizada, está dotada no sólo de recursos materiales, sino también de recursos humanos especialmente calificados y abocados a la investigación de este tipo de delitos.

La realidad indica que el avance del delito y, en particular, del narcotráfico y sus ramificaciones en todo el país es creciente, es por ello que genera una legítima preocupación en la ciudadanía por las nefastas consecuencias que trae aparejado en términos de incremento de la violencia, alteración de la convivencia, degradación por supuesto del tejido social. A ello se le suma la creación de cuatro Juzgados de Control, con sede en la Ciudad de Córdoba, de la Primera Circunscripción Judicial, uno de ellos con competencia especial en Lucha contra el Narcotráfico, en los términos del artículo 34, de la Ley Nacional 23.737, de conformidad a la adhesión dispuesta por la Ley 10.067.

Por eso, señora presidenta, como uno de los poderes del Estado no podemos permanecer indiferentes a este tipo de fenómenos, y es por ello que, a la par de la implementación de políticas públicas orientadas a reforzar la educación, el empleo y la inclusión social, debemos también dotar a los otros poderes y órganos estatales encargados de la persecución penal, de las herramientas y estructuras necesarias para poder llevar adelante su labor en forma eficaz a lo largo y a lo ancho de todo nuestro territorio provincial.

Y esto es particularmente relevante cuando se trate de perseguir los delitos vinculados al narcotráfico, los que por definición son de alcance nacional y transfronterizos.

Este es el espíritu que informa la iniciativa que estamos tratando puntualmente en lo relativo, como mencionaba en el Título III, referido a la creación de estas nuevas estructuras en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial y es, por supuesto, lo que quería poner resalto para reforzar lo anterior dicho por mi colega, legisladora Fernández.

Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Muchas gracias legisladora.

Tiene la palabra la legisladora Karina Bruno.

Sra. Bruno.- Señora presidenta: sin duda que la seguridad es el principal reclamo de la ciudadanía en el orden nacional, provincial y municipal, por eso estamos hoy acá, en el lugar que debemos estar dando las discusiones sobre los temas que hay que dar, cumpliendo nuestra función a la que llegamos no solo porque muchos ciudadanos nos votaron sino porque, básicamente, son los ciudadanos los que nos pagan el sueldo, entonces, es aquí y no en los medios donde las discusiones deben darse.

Creo que con esta ley, o este proyecto de ley, que se somete a consideración lo que se intenta -y lo que hemos trabajado de manera muy interesante en esta comisión ad hoc- es dar una respuesta distinta e innovadora a lo que ha sido la normativa vigente, que claramente fracasó, pero que no es que fracasa la literalidad o la taxatividad de la norma sino que es la dirigencia, y el mismo ministro lo reconoció acá, uno de los cooptados de la oposición, lo celebro.

Entonces, entender que cada vecino sienta que, por alguna razón, por algún motivo ve limitada su libertad de tomar su helado en una vereda, de andar con su celular en la calle, de tener que esconder el bolso en el auto, el solo hecho de considerar que esa circunstancia te está restringiendo tu libertad, es lo que grafica el fracaso de la política en materia de seguridad, y es nuestro deber no solo intentar alternativas de modificación, que en nuestro caso es a través de la ley, de generar leyes, sino que además lleven un mensaje generar y restablecer la confianza en las instituciones y poder tener una recuperación de la paz y el orden social, me parece que eso es clave y por eso que estén involucrados actores públicos, los municipios, las comunas, los del sector privado, puede generar y dar una mayor contribución a que se vuelva a restablecer esa cuestión; el otro día lo hablamos en las comisiones, que a veces es mayor la sensación que los índices, pero mientras tengamos la sensación la inseguridad va a existir.

Yo celebro que el primer gran proyecto que el gobernador entrante manda a la Legislatura tenga que ver con intentar resolver esta problemática, hacerse cargo, tomar una decisión en un tema candente y mandarlo a su discusión. Me acuerdo que el día de su asunción él dijo algo que me quedó grabado, legisladores esta ley que ustedes van a tener la posibilidad de reformar tiene 20 años, la 9235, y sí, efectivamente, no 20 pero casi, mayo del 2005, hubo modificaciones en el medio pero quedaron cortas evidentemente, yo tampoco puedo obviar decir, usted hace más de 24 años que gobierna y tuvieron mayoría que podría haber no reformado, darlo vuelta al sistema y quizás no hubieran pasado algunas cosas que han pasado hoy aquí, incluso había proyectos, me puse a ver lo que se venía trabajando, proyectos de legisladores de la oposición, del oficialismo, que hablaban de guardias de prevención, que hablaban del tema del observatorio.

Lamento que el legislador Dante Rossi no esté acá porque él tenía muchos de esos proyectos, incluso se receptan en esta ley, y lo que faltó claramente fue una voluntad política de hacer las reformas necesarias. Por eso yo celebro que la primera decisión del gobernador sea enviar este proyecto de ley.

Uno podría enumerar tantísimas causas judiciales de trascendencia pública en materia de seguridad, con hechos gravísimos, con consecuencias lamentables irreparables; no quiero hacer nombre de las víctimas por respeto a sus familiares y para que no se interprete como una utilización de eso, pero eso es el reflejo de lo que ha fallado, si a eso le sumamos las causas de corrupción en la cúpula del servicio penitenciario, las causas también que se dieron en las cúpulas policiales de distinto tipo en varios de los Departamentos, como en Colón, Punilla, San Justo, Villa María, por solo nombrar algunos de los tantos lugares donde hubo irregularidades gravísimas en las cúpulas policiales. Sin embargo, sostuvieron a un jefe de servicio penitenciario 15 años y tienen que hacerse cargo de eso. A lo que podríamos agregar también lo del ex ministro Mosquera, que no hablo de su situación personal, que eso será una cuestión ética, pero no podemos dejar de mencionar su actuación funcional.

Ni la situación social, ni la crisis económica, ni ninguna otra circunstancia puede correr el velo que la principal responsabilidad estuvo en quien llevó adelante el gobierno de la Provincia en todos estos años y no sería honesta intelectualmente si no lo dijera, más allá de que uno ha trabajado y ha acompañado y ha hecho aportes para tener una ley como la que va a ser sancionada hoy.

Por eso el principio, cuando uno recibió el proyecto tenía muchísimas dudas, porque había que cambiar la cabeza para entender de lo que estábamos hablando, teníamos que salir de lo tradicional para entrar a entender que íbamos hacia una territorialidad, hacia un involucramiento de otras figuras. Y para mí fue revelador el trabajo en la Comisión cuando vinieron los expertos, me parece que ahí se empezó a abrir aquellas dudas que teníamos de hacia dónde iba esta ley y por qué se habían marcado determinadas pautas, más allá de que además se enriqueció y se receptó todas las inquietudes que tuvimos o casi todas las inquietudes.

Yo también quiero agradecer, como a la legisladora Fernández, a Jofré, Valquinta, López, Angerosa, Carbajo, Soda, Job y Graglia; quiero agradecer porque es de destacar, los tuvimos más de cinco horas en la Comisión y expusieron, les

hicimos preguntas y se quedaron. Y la verdad que, con un proyecto que vino de una manera, se enriqueció y fue el final claramente superador a lo que en un principio vino. Y cada expositor con sus matices o con su forma de ver las cosas, casi que por unanimidad, avalaban la situación de ir en esa dirección, con algunos detalles que tienen que ver con alguna perspectiva de involucrar más la faceta también de la causa de la inseguridad, las causas sociales o alguna mirada más ideológica en el tema de utilización de las armas, pero en realidad, en su totalidad coincidían con aspectos sustanciales.

Y se ha detallado, aquí yo no quiero sobreabundar las modificaciones específicas de la norma; pero sí me parece que hay algunos conceptos que los que los expertos destacaron, como la revalorización de la 9235, como que la doctrina es pacífica en la consideración de tener un sistema integrado de seguridad; con insistir que quizás la mayor inteligencia que tenía el proyecto era incluir a la seguridad privada con una perspectiva de cumplimentación del sector público; el tema de incluir a los consejos barriales a las juntas. En nuestra ciudad, la semana pasada, se avanzó en una normativa por unanimidad en ese sentido, es más, destacaron y quiero leer textualmente, dice: "Lo que me parece novedoso y un avance significativo de esta normativa es que plantea el reconocimiento de los gobiernos locales y la articulación de la seguridad privada con el sistema público, desde estrategias bien concretas y que tienen impacto operativo en lo que se hace en el territorio para la prevención de los conflictos, contravenciones y delitos". ¿Y, por qué esto? Porque cuando uno de los miembros, Graglia, que participó en la elaboración del texto nos decía, ¿por qué esto? ¿Cuál fue la estrategia? Y tenía que ver con lo que Soda también dijo: "Córdoba tiene un alto índice en robo y hurto". Entonces debía irse hacia la territorialidad.

Por eso, las guardias de prevención y por eso el uso de armas no letales y por eso la necesidad que el municipio que quiera, porque esto hay que dejarlo aclarado, acá nadie le tira por la cabeza a nadie, acá adhieren en uso de su autonomía municipal, el municipio que considere que es una herramienta válida. Y yo lo llevo a mi territorio, a mi ciudad, donde tenemos un grave problema del uso del espacio público en un sector por la desidia de la gestión anterior que se está abordando en la actual gestión. Y pienso, qué herramienta realmente interesante le estamos brindando a nuestros ciudadanos para tener una alternativa más para ver si podemos ordenar el espacio público.

Entonces, me parece que esto más el hecho de tener la complementación con la creación de más fiscalías de instrucción, las fiscalías móviles, juzgado de control, me parece que es un marco general que da herramientas integrales para una solución que necesitamos ya. Y no es verdad como se dijo públicamente -lamento que no lo vengán a decir acá- que estamos privatizando la seguridad, lo curioso es que muchos de lo que dicen esto viven en barrios cerrados y country, donde tienen altísimas expensas por los costos de la seguridad privada, entonces, para ellos que pueden tener esa calidad de vida la seguridad privada es válida, pero para cualquier vecino de Córdoba, no. Estaría bueno que lo venga a decir acá, porque yo creo que es indispensable tomar medidas, aunque fracasemos. Lo que no podemos es ser indiferentes o quedarnos en la comodidad que sean otros los que resuelvan. Por eso la importancia que los intendentes se involucren, porque conocen el territorio más que nadie.

Y miren, más allá de la particularidad que se da hoy porque no están sentados acá, yo estoy convencida de que más allá de aquellos que hicieron el aporte concreto como Rossi o Tamis, ninguno de los otros iba hacer un aporte o iban a acompañar esta ley. Y lo digo desde que leí una nota en La Voz del Interior, el 11 de diciembre a las 7 y 59, no había ingresado el proyecto, no lo sabíamos, no lo conocíamos. "No habrá ninguna concesión al gobierno de Llarrosa, no nos pidan que le demos una luna de miel". Puso en duda el apoyo legislativo con los cambios de seguridad, ya les marcaron la cancha de los diarios, ¿qué íbamos a esperar?

En definitiva, señora presidenta, uno hace una apuesta en tener una normativa de avanzada, de intentar dar una solución de comprometernos a estudiar a fondo los temas y, seguramente, tenemos cosas pendientes en que debemos trabajar, me quedo con lo dijo Angerosa con el tema del desarme, creo que es un desafío que esta Legislatura debe abordar. Me quedo con el tema de las violencias y las cuestiones de género y algunos datos que Job dio muy interesante. Creo que de acá hay muchas legisladoras que conocen bien el sistema judicial, hay que trabajar mucho en el fuero para que el tema de los casos de violencia de género tengan otro tipo de

tratamiento, más efectivo, más preventivo, no llegar tarde, cada cosa que llegamos tarde es una víctima. Entonces creo que nuestro trabajo no está, no termina acá.

Y como contrapartida y para concluir no quiero extenderme, cuando uno dice que no algo o por lo menos mi forma de trabajar siempre trae una alternativa que ofrece para decir mirá lo que pienso y fíjate si te parece. Todavía estoy esperando las alternativas a este proyecto por parte de los legisladores que no hicieron ni un solo aporte, pero tampoco trajeron su propio proyecto para ponerlo.

Nada más, señora presidenta. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Prunotto).- Muchísimas gracias, legisladora Bruno.

Tiene la palabra el legislador Galo.

Sr. Galo.- Gracias, señora presidenta.

Una vez más le quiero pedir disculpa a los cordobeses, cuando un albañil, un jardinero no trabaja, sabe qué pasa, no cobra. Y les digo a los cordobeses que los legisladores no vienen a trabajar y sí cobran. Y en esto quiero ser absolutamente claro, hay algunos dirigentes políticos que trabajan para los titulares de los diarios, para la prensa, nosotros una vez más, como siempre, trabajamos para la gente.

Se llenaron la boca hablando de inseguridad en la campaña, la gente nos eligió a nosotros y nosotros nos estamos haciendo cargo. Debatimos una ley de avanzada, trabajamos con todos los bloques una ley de avanzada y a la hora de exponer sus ideas no están, a la hora de hacer sus objeciones no están, no están como no estuvieron cuando les tocó gobernar Córdoba, cuando les tocó llevarle el agua potable a los cordobeses tampoco estuvieron, cuando les tocó arreglar las calles tampoco estuvieron, cuando les tocó arreglar las plazas tampoco estuvieron, cuando les tocó llevar las cloacas, solucionar los problemas graves que atravesaban los cordobeses, tampoco estuvieron.

Hay dos clases de dirigentes, aquellos que se hacen cargo de los problemas, aquellos que aceptan los desafíos de los nuevos tiempos y aquellos que echan culpa. Nosotros, una vez más, somos los dirigentes que hacemos, somos los dirigentes comprometidos con la gente, somos los dirigentes a los cuales los problemas de la gente nos duelen, somos parte de esta sociedad, vivimos en Córdoba y, una vez más, nosotros nos hacemos cargo. Cada día que dilatamos esta ley, cada día que dilatamos este debate, cada día que no nos hacemos cargo o no se hacen cargo porque sí nosotros nos hacemos cargo porque nuestro gobernador se hace cargo de los nuevos desafíos, de los nuevos tiempos, es un día que gana el narcotráfico, es un día que gana la delincuencia, es un día que ganan los delincuentes en la calle y nosotros debemos dar esa batalla.

Nosotros decimos una vez más que somos los dirigentes que hacemos y vamos a seguir haciendo por todos los cordobeses.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Prunotto).- Muchísimas gracias, legislador Galo.

Tiene la palabra el legislador Torres.

Sr. Torres Lima.- Gracias, señora presidenta.

Simplemente y para comenzar primero decirles que tengo tristeza, estoy apesadumbrado porque realmente no era la Cámara que imaginaba antes de tener el honor y el privilegio de ser legislador de la provincia de Córdoba, y no lo digo solamente por lo de hoy, a nosotros nos tocó comenzar estas sesiones desde la preparatoria y a la fecha y hemos visto constantemente incumplidos acuerdos de convivencia necesarios para el buen funcionamiento de esta Casa de la democracia, faltas de cumplimiento del Reglamento Interno, acusaciones cuando se conocía la verdad, no dar ni siquiera el tiempo previsto para la discusión de cuestiones importantes para la vida de los ciudadanos de Córdoba.

En este caso, señora presidenta, me voy a detener en lo que ocurrió hoy, la concurrencia de los legisladores a la Cámara es una obligación primaria y fundamental de cada legislador, tanto es así que en el Senado, en la Cámara de Diputados hay medios para compeler a los legisladores que no concurren y que la minoría puede utilizar. Pero, más allá de las disposiciones constitucionales y reglamentarias, este legislador entiende que es una obligación ética y moral porque nos debemos a la democracia.

La verdad que tengo que decir que la naturaleza misma de la representación que cada uno de nosotros tenemos en virtud del voto y de los -como recién mencionaba el legisladores Spaccesi-, cientos y cientos de miles de cordobeses que el 25 de junio decidieron que los partidos en los cuales nosotros participamos, que las extracciones partidarias de las cuales somos parte, sean elegidas y en nuestro

caso Hacemos Unidos por Córdoba para gobernar a todos los cordobeses por cuatro años y que nos debemos a esa elección de los cordobeses y cordobesas, creo, y a modo personal lo digo, que es una lamentable herramienta de extorsión el no dar el quórum. La democracia establece que tenemos que discutir las ideas, no ponernos de acuerdo si ideológicamente o paradigmáticamente no tenemos puntos en común ni común denominadores, pero la discusión hay que darla pero, por supuesto -y acá quiero desembocar- es una herramienta de la democracia también el no asistir a la sesión. Lamentablemente, esto ocurre aquí en Córdoba por una sencilla razón -y aquí quiero detenerme-, estamos en un proceso de crisis, de crisis social, de crisis económica, en un proceso hiperinflacionario que a todos nos preocupa muchísimo y hoy, en esta Legislatura, teníamos dos proyectos importantísimos para el futuro de Córdoba, de los cuales no pretendíamos que los bloques opositores tomen partido y nos acompañen, pero sí que participen en el debate, pero sí que le den la cara al electorado cordobés y les digan: “estamos peleando por las ideas que tenemos con respecto a estos temas”; uno, es el proyecto de la Ley Integral de Seguridad, que viene a paliar una necesidad de nuestra Provincia, que viene a cambiar un paradigma, un modo de enfrentar al delito; y el otro, un difícil proyecto con medidas económicas para paliar una crisis que hoy nos abraza en la República Argentina.

El presidente electo por los argentinos, previamente a las elecciones manifestó que iba a llevar adelante un ajuste, y la gente votó el ajuste; el no darse cuenta de eso es no leer la agenda de la gente.

Nuestro gobernador, Martín Llyorya, en el día de ayer, junto a otros gobernadores, mantuvo una reunión con el presidente, y los gobernadores de todas las provincias están tomando medidas para ajustar las finanzas públicas, para ajustar el gasto público y para intentar paliar una crisis, que como recién decía, nos abraza a todos.

Yo creo, señora presidenta, y no les quiero caer a las bancas unipersonales por esto de no dar quórum, porque por sobre todo hay bancadas con casi 20 legisladores, con 7 o con 3, que no están representadas en esta Cámara, y yo creo que esas bancadas no están acá porque hay una doble cara, hay dos caras en esa misma moneda en donde los representantes del Frente Cívico, los representantes de la Unión Cívica Radical y los representantes de PRO tienen a sus dirigentes nacionales diciendo que le van a dar gobernabilidad al presidente para que pueda enfrentar una crisis que es realmente preocupante e histórica en nuestro país, pero ellos acá no quieren hacer lo mismo, y no por una cuestión ideológica de convicciones, no quieren hacer lo mismo, señora presidenta, porque quieren que fracasemos en esto, en que nos hemos comprometido a darle la cara a los cordobeses y tratar de enfrentar esta crisis en Córdoba con las mejores decisiones, y, por supuesto, muchas veces las mejores decisiones son tristes y no son las más fáciles.

Hacer un ajuste no es algo que le guste a un dirigente político, pero muchas veces, en momentos determinados, tiene que tener la entereza y la valentía para llevarlo adelante porque la gente nos votó y nos puso en este lugar.

Dicho esto, señora presidenta, quiero hablar sobre esta Ley Integral de Seguridad, que creo que fue tratada de una manera ejemplar, constituimos una comisión ad hoc donde los once bloques que participan de esta Cámara tuvieron representación; pero no sólo eso, señora presidenta, si había legisladores de otro bloque, más allá del presidente, que quería estar, permitimos, fuimos absolutamente aperturistas para que todos puedan ser parte; pero no solamente eso, señora presidenta; además, la comisión ad hoc, tuvo modalidad híbrida, y muchos legisladores pudieron estar conectados mientras desarrollábamos largas horas de discusión.

Después, señora presidenta, tuvimos la visita del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, que se juntó con todos los legisladores y de alguna manera les manifestó cuáles eran los principios básicos que habían motivado este cambio paradigmático en la manera de enfrentar el delito.

Posteriormente, tuvimos también la visita de más de diez expositores, especialistas en la temática que nos fueron narrando cuáles eran sus apreciaciones con respecto al proyecto de ley que tratábamos, en muchos casos confrontándola, pero en muchísimos casos, también, estando de acuerdo con el texto del proyecto de ley que estábamos tratando.

Después, señora presidenta, pudimos avanzar en despachos y muchos de ellos, hoy, en la Comisión de Labor Parlamentaria, eran acompañando esta iniciativa

del Ejecutivo. ¿Y saben por qué? ¿Sabe por qué, señora presidenta? Porque, dentro del texto de la ley, enriquecimos las ideas de este cambio paradigmático en seguridad con muchas propuestas que los distintos bloques pudieron hacernos.

Trabajamos a destajo en el día de ayer -y le consta, porque vi al relator ad hoc junto a todos los miembros de la Secretaría de Comisiones- para llegar al día de la fecha con un proyecto de ley que enmarque lo que todos pensaban, lo que pudieron enriquecer y lo que el Ejecutivo pensaba que era fundamental para poder abordar la temática de la inseguridad.

El delito es absolutamente multicausal, y todos sabemos que la pobreza, que la indigencia son el factor fundamental que genera que alguien pase a ser un delincuente, pero, además, también, por supuesto, podemos encontrar a la educación, a la marginalidad y a muchos otros aspectos que van generando que el delito prolifere en una Argentina que hoy se debate en una crisis económica, pero también en una crisis social.

Es una verdad de Perogrullo decir que no hacen falta más policías, sino menos delincuentes; pero a esto hay que construirlo y, el mientras tanto es lo que hoy nos ocupa.

Esta proliferación coyuntural que tenemos del delito en nuestro país y, por consiguiente, también en nuestra provincia, puede generar en el Ejecutivo, en el gobierno provincial elegido por los cordobeses, dos actitudes diferentes, pensar en la omnipresencia, en la autosuficiencia del Estado para resolver todas las problemáticas, o seguir fortaleciendo, seguir transformando, a través de capacitación, de dotación de recursos humanos, de dotación de recursos tecnológicos y, por supuesto, de inversión a la verdadera columna vertebral de lucha contra el delito en nuestra provincia, que es la Policía de Córdoba; pero además, también, sin dejar de hacer ello, trabajar en una ley integral que genere el marco de gobernabilidad para de manera novedosa, innovadora y multisectorial, abordar la proliferación del delito.

Este proyecto de ley, señora presidenta, no es ni más ni menos que una actitud sumamente valiosa de este gobierno provincial, es una actitud sumamente valiente del gobernador Martín Llaryora, que sabe que la seguridad es la principal preocupación de los cordobeses en el día de hoy; y su primer proyecto de ley es para mitigar el delito. Este proyecto de ley propone un conjunto de ideas, de conceptos, de acciones que redefinen totalmente la estrategia de abordaje de las políticas de seguridad en nuestra provincia de Córdoba.

Para nosotros, hablar de coordinación, de articulación entre las distintas esferas del poder o con el sector privado es algo fácil, está en el ADN de este Gobierno provincial porque hace muchísimos años que venimos enfrentando las problemáticas y buscando soluciones conjuntas de manera mancomunada con el sector privado.

Con estos conceptos que recién trataba de transparentar es que este proyecto de ley crea un instituto de planificación y formación para la seguridad de la convivencia. Este proyecto de ley, señora presidenta, busca, de alguna manera, crear ese instituto para brindar primero una estrategia de lectura e información de los índices delictivos de manera actualizada, a través del observatorio que también crea en la esfera de este instituto.

También se busca redefinir la estrategia de abordaje y planificación para mitigar el delito, pero por sobre todo también la estrategia de formación de los recursos humanos que será brindada a través de las universidades y de la escuela de la Policía. Son cosas no menores que replantean la forma de atacar el delito que el gobierno provincial tuvo hasta ahora.

Además, señora presidenta, busca implementarse un programa de desarme para nuestra provincia; al igual que buscan crearse fiscalías móviles en el interior de la provincia, fiscalías antinarcóticos, juzgados de control, donde lógicamente hay una inversión del Estado, pero hay una inversión del Estado en un gasto, entendiendo que si la problemática es la inseguridad, los recursos, que en un momento complejo de la economía argentina no sobran, deben ponerse, deben invertirse para darle respuesta a la problemática, a la agenda de la gente.

Este proyecto busca implementar el narcotest para todos aquellos que somos funcionarios políticos y tiene dos elementos fundamentales en los que me quiero detener brevemente; el primero, faculta a las empresas privadas de seguridad, aquellas que cumplan con los requisitos y los estándares que deben tener para ser consideradas por el gobierno provincial posibles empresas prestadoras o que formen

parte de este sistema integral. Les da como facultad a esas empresas la posibilidad de formar parte de este sistema integral de seguridad y, por sobre todas las cosas, señora presidenta y usted que fue intendenta al igual que yo, y que muchos de los que estamos acá, y que muchos de los que lamentablemente no están para acompañar esta normativa, sabe que en los municipios, sobre todo en los medianos y grandes, hablando demográficamente, conviven muchos sistemas, conviven las inspectorías municipales, que están controlando faltas, contravenciones; conviven los cuerpos de seguridad ciudadana, que es un programa que puso la provincia a disposición de aquellos municipios que estimaban ser parte, y les da un móvil y el personal lo pone cada municipio y tiene una herramienta más para colaborar con las fuerzas de seguridad policial, pero también con los equipos de inspectoría que cada municipio tiene; también tienen policías urbanas, conviven muchos sistemas, y esta ley le da la posibilidad a estos municipios de armonizar, de coordinar y que estos sistemas trabajen de manera conjunta. Aquellos municipios que quieran pueden adherirse a la ley, y el Estado provincial les dará la capacitación a los recursos humanos de manera absolutamente gratuita, los móviles para llevar adelante el control preventivo y las armas menos letales o de letalidad reducida que entendemos, son necesarias. Aquellos municipios que quieran pueden adherirse, y aquellos municipios que quieran no recibir armas menos letales también podrán no recibirlas.

Es una mentira, señora presidenta, lo que dice la ausente oposición, que estamos trasladando la seguridad en manos de los municipios y comunas. Una flagrante mentira, estamos poniendo a disposición, de manera facultativa y optativa, un programa que le permite armonizar los sistemas que cada municipio y comuna tiene y no solo eso, dotándolo de recursos de capacitación para el personal, de móviles cuando así lo desean y de armas menos letales cuando los municipios y comunas que quieran participar del programa lo requieran.

Es por ello, señora presidenta, que estoy absolutamente convencido que es un paso en firme de este gobierno provincial, que es un paso en firme de nuestro flamante gobernador Martín Llaryora, para solucionar un problema que hoy está en la agenda de la gente y que creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias para tratarlo.

Muchas gracias, señora presidenta.

Sr. Presidenta (Prunotto).- Muchas gracias, legislador Torres.

Tiene la palabra el legislador Tévez.

Sr. Tévez.- Buenas noches a todos, gracias señora presidenta.

Después de todo lo que dijeron quienes me precedieron en la palabra, los legisladores Fernández, Rinaldi, Spaccesi, Bruno, Galo, Torres, es poco lo que puedo decir.

Pero sí resaltar y revalorizar que hoy estemos tratando, en nuestra segunda sesión, este proyecto de ley; proyecto de ley que trata de abordar la seguridad pública y seguridad ciudadana, y que aborda uno de los temas que más le preocupan a la sociedad cordobesa y que nosotros que hemos sido elegidos por el pueblo, hemos recogido durante la campaña electoral, pero además de la vivencia cotidiana, la preocupación por esta temática.

Este proyecto de ley, que es dable reconocerle a la comisión ad hoc que ha trabajado en el mismo, el empeño que le ha puesto y la manera en cómo ha enriquecido el proyecto que hoy llega a este tratamiento.

Habiendo participado todos los bloques legislativos, fue enriquecido por los distintos actores sociales que participaron a lo largo de los debates de la comisión ad hoc, entidades civiles, entidades académicas, representantes de las fuerzas del orden y de la seguridad y, además, los expertos en materia de seguridad. Siempre digo que todos tenemos que desburrarnos porque no todos sabemos todo de todos los temas y la presencia de los expertos en el seno de la comisión ad hoc fue fundamental para esclarecer distintas temáticas que muchos de los legisladores desconocemos.

Esta ley, que se va a sancionar hoy, digo que es complementaria y superadora de la Ley y contenidos de la 9235 que, como bien lo decía la legisladora Bruno, tiene casi 20 años, 18 años de supervivencia, en una sociedad que está en permanentes cambios, pero que, además, el problema de los delitos, de la inseguridad, se va agravando con el paso del tiempo, no porque los gobiernos no se ocupen del tema. Esta ley ha sido reformada en distintas oportunidades y puedo dar fe, como intendente municipal de una pequeña ciudad, de un pueblo grande como es Brinkmann, del permanente acompañamiento, por parte de los distintos

gobernadores y ministros de seguridad, a los pueblos y comunidades del interior y el trabajo que hacen en la Capital también, mediante la provisión de móviles, mediante la provisión de personal.

Y hay algo que quiero destacar, a partir del año 2020, a partir del 31 del 10 de 2020, cuando se cambia la cúpula policial y luego de los casos de Blas Correa y Joaquín Paredes, uno ocurrido acá en la Capital y otro en el Departamento Cruz del Eje, en donde en uno de ellos se comprobó que hubo violencia institucional, se toma la decisión de profesionalizar y capacitar al personal, ese personal que está las 24 horas a disposición de los ciudadanos de cada lugar y el cual, por lo general, es motivo de críticas. Pero el Gobierno tomó la decisión y apostó mediante un trabajo interministerial, entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad y la Provincia tomó la decisión y, también el costo político, de no ingresar nuevos agentes durante 3 años -pues la carrera dura 3 años- y, recién este año, hemos tenido la incorporación de los nuevos agentes a través de la Escuela de Agentes y Suboficiales General Manuel Belgrano y a través de la Escuela de Oficiales General San Martín, con lo cual hemos dado un salto en calidad, razón por la cual habla a las claras que el gobierno de la Provincia de Córdoba se ocupa de manera permanente y continuada de esta temática.

Y también tiene que ver con el modelo de seguridad de Córdoba, más allá de las críticas que pueda recibir, es ejemplo en las distintas provincias de nuestro país y en distintos países de Latinoamérica, razón por la cual vienen a capacitarse acá fuerzas de seguridad de otros lugares.

Pero quiero agregar también que este proyecto de ley da un salto cualitativo, ¿por qué? Porque de la 9235, teníamos un concepto de seguridad con un Estado céntrico, un Estado que se hacía cargo de todo y parecía que nadie podía coadyuvar en la tarea de la seguridad, cosa que se fue reformando y mejorando con las distintas modificaciones y las distintas leyes que mejoraron la 9235. Pero ésta incorpora el concepto de gobernanza, al que aludían los que me precedieron en el uso de la palabra, un concepto de gobernanza basado en la coordinación entre los poderes del Estado, la concertación de políticas entre el sector público y los sectores privados, pero, sobre todo, una interacción con los ciudadanos en general y con las distintas entidades civiles de la sociedad. Interacción que en la práctica ya se viene dando, tal como lo decía recién el legislador Torres y como lo decía el legislador Spaccesi también, porque los municipios y comunas ya vienen trabajando y coadyuvando con la tarea policial, a través de la seguridad ciudadana, que es acompañada desde el gobierno de la provincia; estos municipios y comunas colaboran con la policía permanentemente. Por eso la incorporación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, vienen a reforzar y a plasmar en la ley lo que en la práctica se viene dando.

Y acá hay algo que es importante, porque la ley incorpora el concepto de prevención situacional que nuestros catedráticos enseñan en las facultades. Esa prevención situacional está dada por el trabajo que realizan los municipios incorporando cámaras, haciendo patrullajes por parte de los inspectores municipales, iluminando y recuperando espacios públicos con cartelería apropiada. Fíjese usted que no es lo mismo que en Córdoba el Parque Sarmiento, el Parque Las Heras, la plaza de barrio General Paz, el ingreso de la Ruta 19 -los nombro porque los veo cuando vengo desde el interior- estén acomodados e iluminados, porque eso disuade la comisión de delitos, disuade que se vayan a juntar quienes tienen malas intenciones, a que ese espacio esté oscuro, esté abandonado y sea un lugar para que vayan a hacer cosas desagradables y, por supuesto, cometer delitos.

Eso que pasa en Córdoba pasa también en distintos puntos del interior, porque los municipios ya se hicieron cargo de ello. Pero además también incorpora el concepto de la prevención comunitaria, prevención comunitaria que se da con la participación de los ciudadanos a través de las distintas juntas barriales y comunales, a través de la creación de grupos de WhatsApp, a través de la creación de sistemas de cámaras de seguridad. Y en esto también me quiero detener porque la incorporación de las cámaras de seguridad al sistema provincial, interactuar lo privado y lo público a través de un patrón único tecnológico va a facilitar la persecución y, principalmente, la disuasión de los delitos.

En esto quiero poner como ejemplo a la localidad de Alicia, del Departamento San Justo, en donde entre el municipio y los privados han logrado poner en marcha 180 cámaras de seguridad y han reducido el índice delictual en un 50 por ciento en el término de un año.

Por ello, no creo que ataque a la libertad individual, a la privacidad, el hecho de que las cámaras que poseen los comercios, las instituciones, los particulares y que apuntan al sector público, sean en contra de estos derechos de los individuos, todo lo contrario, hoy vivimos en un mundo totalmente tecnificado y digitalizado y tenemos cámaras por todos lados. Ahora debemos tener en claro que se deben usar de manera racional y en ellos los municipios han sido precursores, porque en cada municipio en donde hay un sistema de cámaras hay una ordenanza que la reglamenta y, principalmente, se encarga de preservar la privacidad y la libertad de las personas.

Por ello, señora presidenta, creo que estamos ante una ley que va a acompañar un proyecto de gobierno que votó mayoritariamente el pueblo de Córdoba y que necesita el señor gobernador para, desde el primer día o desde los primeros días de su gestión, poner en marcha y reforzar el sistema de seguridad de la provincia de Córdoba.

Quiero agradecer a todos quienes han colaborado con este proyecto de ley, y quiero agradecer también a la comisión ad hoc por haber permitido que varios legisladores, que no éramos presidentes de bloques, pudiéramos participar aún de manera remota.

Con esto, señora presidenta, termino y adelanto el voto positivo mío y de la bancada en este proyecto.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Prunotto).- Muchas gracias, legislador Tévez.

Tiene la palabra el legislador Siciliano.

Sr. Siciliano.- Gracias, señora presidenta.

Mire, señora presidente, voy a leer algunas frases: "No podemos andar con medias tintas, ni ser una traba para lo que el Gobierno Nacional necesite, aunque no seamos de su partido", a esto lo dijo el senador Luis Juez, el 29 de noviembre de 2023; "No sé si me interesa cruzar palabras con Milei, pero sí tener una actitud que acompañe", a esto también lo dijo Luis Juez. "Nosotros tenemos que entender que la gente lo eligió para gobernar a él, es el gobierno de él, acompañarlo parlamentariamente en lo que lo podamos acompañar es nuestra obligación", a esto también lo dijo Luis Juez; "El radicalismo está para ayudar, cooperar y no para obstruir, el radicalismo siempre está para ayudar, porque no apoyamos personas, pero apoyamos ideas, el bloqueo parlamentario no le sirvió a la Argentina", todas estas últimas frases son del diputado nacional De Loredó; "tenemos que salir de ese lugar, del bloqueo parlamentario porque esto no le sirvió a la Argentina", De Loredó; "Ojalá, que le encontremos la vuelta a la Argentina, ojalá que se la encuentre Javier Milei, habrá un desafío para lograr una mayor estabilidad institucional y nosotros, desde nuestro lugar, lo haremos", a esto también lo dijo De Loredó.

La verdad, quiero felicitar, desde este humilde lugar, al diputado De Loredó y al senador Luis Juez, porque más allá de que uno coincida o no con las ideas de un presidente, es un presidente que eligió la gente, y las trabas parlamentarias, la oposición destructiva, la oposición del "me opongo, pero no propongo", a las claras demostraron que ponen a la gente en una situación de crisis, y es claramente lo que está pasando en esta Legislatura, presidenta.

Por eso yo agradezco profundamente, primero, a todos mis compañeros de bancada, porque entienden con claridad lo que es tener responsabilidad institucional a la hora de tratar una legislación, cualquiera fuere, ni hablar donde esa legislación tiene la importancia que tiene, la Ley de Seguridad para combatir la inseguridad y para combatir el narcotráfico en la provincia de Córdoba.

Ni hablar el agradecimiento al legislador Spaccesi, al legislador Alesandri, a la legisladora Bruno, porque podemos o no estar de acuerdo con la posición frente a una ley, lo que no podemos hacer es no ser democrático y permitir que se discuten los temas y mucho menos si eso lo hacemos con una doble vara, porque en un lado tenemos la vara de la institucionalidad, en un lado tenemos la vara de dejar gobernar al presidente independientemente los partidos que fueren pero, en otro lado, pareciera que no miden con la misma vara porque desde que se sentaron algunos miembros -y lo aclaro, algunos miembros-, de la oposición en esta Legislatura, lo único que hicieron fue obstruir, lo único que hicieron fue decir no, lo único que hicieron fue poner palos en la rueda, porque claramente hay algunos legisladores a los que no les importa la gente, solo están acá para tratar de que al gobierno provincial le vaya mal y lo digo con claridad, quieren que al gobierno del gobernador Llaryora le vaya mal, porque especulan políticamente y plantean que si a lo mejor le

va mal podemos tener nosotros la oportunidad electoral. Esto es político pensando en política, esto no es dirigente pensando en gente y esto es lo que nosotros apelamos a reconstruir. Ojalá, nosotros, los miembros del oficialismo, podamos tener la apertura que creo que hemos tenido con el tratamiento de esta ley que está en discusión, que es la ley de seguridad.

Escuchaba a mi compañero de bloque preopinante cuando decía, sin tener la obligación reglamentaria de discutir esto con todos los bloques, creamos una comisión especial ad hoc y uno de las reglas que impusimos como mayoría con los votos fue que todos los bloques, los once bloques de esta Legislatura participaran de la discusión.

¿Sabe una cosa? Nosotros teníamos los votos para aprobar esta ley quizás en la última sesión y, la verdad, es que entendimos que lo que había que hacer era abrir la discusión, porque hay temas que no tienen color partidario, hay temas que no importa si sos de la oposición o del oficialismo, hay temas que tenés que discutir, después votá como quieras, después tomá la decisión que tengas que tomar, pero participá de la discusión, abrí la discusión. No hagas que una Legislatura que está acá para legislar y para tomar decisiones no pueda llevar adelante la toma de decisiones.

¿Qué le van a decir a la gente cuando le pregunten qué opinan del tratamiento de la ley de Seguridad, si no estuvieron? ¿Y sabe por qué pedí la palabra?, porque quiero que esto quede registrado, porque la verdad es que dicen una cosa y hacen otra, y el que dice una cosa y hace otra, miente y esto hay que dejarlo claro.

Vos podés no estar de acuerdo con la creación de fiscales, de fiscalías para tratar la problemática en narcotráfico, podemos no estar de acuerdo –se ve- con la creación de juzgados para tratar de combatir más efectivamente al narcotráfico. Podes no estar de acuerdo con darle a nuestra Policía, una herramienta intermedia entre el uso de la fuerza física y el uso del arma letal; que la tiene la Policía más avanzada del mundo, que son las armas no letales; vos podés estar o no de acuerdo, lo que no podes es impedir el debate, es impedir democráticamente que el partido que el pueblo de Córdoba eligió para gobernar, porque al gobernador Llaryora lo eligió el pueblo de Córdoba para que gobierne esta provincia. Y el gobernador Llaryora mandó como primera ley a tratar en esta Legislatura en su mandato, la Ley de Seguridad y lucha contra el narcotráfico, lo que no podés hacer, si de verdad respetás como decís respetar a la gente, es tratar de impedir su tratamiento. Eso no podés hacer, porque eso no es aceptar las reglas de la democracia.

Presidenta, no tratar la Ley de Seguridad o pretender no tratarla, no estar presente en la discusión de la lucha contra el narcotráfico, intentar bloquear parlamentariamente a un gobierno, porque les hago una pregunta, a quienes nos están mirando, a quienes nos están escuchando a los aquí presentes, si lograban su cometido y aquí no había quórum para tratar la ley de lucha contra el narcotráfico y de lucha contra la inseguridad, ¿a quién jodían?, ¿al oficialismo?, ¿al gobernador?, ¿a estos legisladores?, ¿o jodían a la gente? Que tiene en su agenda de vida como uno de los principales problemas la inseguridad, que votó al gobernador Llaryora para que solucione sus problemas y, por lo tanto, ese gobernador al que la gente votó, nos dijo “esta es la idea que tengo, acompañenme, denme las herramientas necesarias para combatir el delito, para combatir al narcotráfico”. En la nación dan las herramientas necesarias, acá no.

Entonces, vuelvo a preguntar, si lograban el cometido que no lograron que era impedir el tratamiento de la ley de lucha contra el narcotráfico y de la ley de lucha contra la inseguridad, ¿jorobaban al gobernador Llaryora?, ¿jorobaban a este Cuerpo Legislativo? o ¿jorobaban a la gente? La respuesta es, jorobaban a la gente. Estos son, porque no estar sentado ahí, además de cobrar el sueldo para no trabajar, significa impedir el tratamiento democrático que todo Cuerpo Legislativo tiene que tener.

Presidenta, vuelvo a agradecer a nuestro bloque, por supuesto, por estar a la altura de las circunstancias; vuelvo a agradecer al legislador Alesandri por estar aquí, haciendo lo que un hombre de la democracia debe hacer, al igual que al legislador Spaccesi que, con todas nuestras diferencias, estamos dispuestos siempre a sentarnos en la misma mesa, cuando se trate de pelear contra el narcotráfico y de pelear contra la seguridad.

Gracias queridos legisladores por permitirnos ver esta discusión y, por supuesto, gracias Karina, porque además de estar sentada acá dando esta discusión, fuiste una de las personas que hizo enormes aportes, al igual que el legislador

Alesandri y el legislador Agustín Spaccesi, para que esta ley hoy sea mucho mejor de lo que era cuando ingresó.

Gracias presidenta, no tengo más palabras. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Prunotto).- Muchas gracias, legislador Siciliano.

Si no hay objeciones, vamos a poner el proyecto en consideración en general, tal como fuera despachado en mayoría por la comisión ad hoc, creada por Resolución 3876/23.

Los estén por la afirmativa, por favor sírvanse de expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobado en general.

A los efectos de la votación en particular, lo haremos a mano alzada y por títulos y capítulos.

Antes de pasar la votación, cuando estemos tratando un título o capítulo que incluye el artículo, al cual algún legislador se abstiene o vota en particular en contra, lo haga saber así se realiza correctamente el sufragio de los votos y se consigna en el acta de la sesión.

-Se votan y aprueban en particular el Título I, Capítulo Primero, artículos 1º al 9º; Capítulo Segundo, artículos 10 al 16; Capítulo Tercero, artículos 17 al 27; Capítulo Cuarto, artículos 28 al 38; Capítulo Quinto, artículos 39 al 65; Título II, Capítulo único, artículos 66; Título III, Capítulo único, artículos 67 al 74.

Sra. Presidenta (Prunotto).- El artículo 75 es de forma.

Queda aprobado el proyecto en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).

38407/L/23

Córdoba, 12 de diciembre de 2023

**A la señora Presidente
de la Legislatura Provincial
Myrian Beatriz PRUNOTTO
S _____ / _____ D**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio, a los integrantes del Cuerpo que preside, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144, inciso 3º, de la Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el cual se propicia la creación del Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, modificando la Ley Nº 9235.

Esta iniciativa brinda el marco jurídico necesario para la implementación de un nuevo modelo de seguridad y convivencia, que parte de los conocimientos desarrollados en nuestras universidades, a la luz de las políticas gestionadas en Córdoba durante 40 años de democracia, más la comparación con políticas de otras provincias y otros países.

Luego de un exhaustivo análisis de la legislación vigente y, sobre todo, de los resultados de su aplicación real y efectiva, el proyecto sustituye diversas previsiones de la Ley Nº 9235, próxima a cumplir 20 años de su sanción, y sus modificatorias, procurando un marco legal que sea aplicable, controlable y evaluable, en la búsqueda de efectividad y transparencia, evitando la superposición de organismos y procedimientos.

De esa manera, se deroga la parte primera de la Ley Nº 9235 y sus modificatorias, tanto lo relativo al "Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito" y los "Consejos Departamentales, Municipales y Barriales de Prevención y Convivencia" (Ley Nº 10.437 de 2017), como el "Consejo de Política Criminal y de Gestión de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana" (Ley Nº 10.732 de 2020).

En cuanto a las partes segunda y tercera, sin perjuicio de las atribuciones legislativas previstas en el inciso 20 del artículo 104 de la Constitución Provincial, se prevé que el Poder Ejecutivo reglamente la organización institucional y administrativa concerniente a la Policía de la Provincia y al Servicio Penitenciario; es decir, la estructura de cargos y sus responsabilidades, manteniéndose la vigencia de leyes del personal policial y penitenciario, Nros. 9728 y 8231, respectivamente.

La ley incluye cuatro grandes innovaciones que, en conjunto, plantean una reestructuración integral:

1. Se pasa de un régimen estado-céntrico, previsto en la Ley Nº 9235 y sus modificatorias, a un enfoque de gobernanza, basado en la coordinación entre los poderes del Estado, por un lado, y la concertación de las políticas entre el sector público y los sectores privados, por el otro.

2. Se crea un Instituto que asiste en la planificación de las políticas de seguridad, elabora, controla y evalúa la implementación de los programas de formación o capacitación de las fuerzas provinciales de seguridad, guardias locales y empresas prestadoras de servicios de seguridad, integrándolo al Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba – COPEC, creado en 2008.

3. Se crean las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, previendo la incorporación de Agentes Locales capacitados y certificados para el uso de armas menos letales, como auxiliares de la Policía de Córdoba y en el marco de estrategias comunitarias de aproximación a los vecinos.

4. Se incorporan las empresas privadas de seguridad al sistema, permitiendo que su personal pueda usar armas menos letales, previa capacitación y certificación, en la prestación de servicios al sector público, a las empresas y las organizaciones de la sociedad civil.

Que a los efectos de concentrar los recursos humanos disponibles en las fuerzas de seguridad, como así también en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, en las tareas propias que su misiones y finalidades importan, entre otras la prevención del delito y las contravenciones y el mantenimiento de la tranquilidad y la paz pública, resulta necesario disponer de personal que lleve adelante en dichos ámbitos de una serie de actividades y tareas conexas, complementarias o de apoyo, a fin de no distraer sus recursos especializados.

Que muchas de dichas tareas, por el especial ámbito en que se desarrollan y por el contenido particular que las mismas importan, a juicio de la autoridad, no conviene o no pueden ser ejecutadas por personal de la planta permanente, sumado a que las mismas, dependiendo de las circunstancias, resultan variables, con necesidades de capacitación cambiantes, y en casos solo necesarias en determinados lapsos, lo que también atenta con su cobertura efectiva y eficiente por personal permanente.

Que la Ley N° 7233, en su artículo 7° permite la contratación de personal para llevar adelante este tipo de tareas bajo la modalidad de contrato de servicio, razón por la cual resulta adecuado para la satisfacción de esa porción del servicio público utilizar el mecanismo previsto en la normativa señalada; siendo en ese marco necesario habilitarlo en la manera en que se propone en el presente proyecto.

Que lo propuesto importa un esfuerzo común y compartido por todos los poderes del Estado, en pos de la seguridad pública, respetando las incumbencias que a cada uno les asigna la Constitución Provincial.

Que por otra la Ley N° 10571 autoriza a las prestadoras de servicios de seguridad privada a la utilización de medios tecnológicos para el desarrollo de sus tareas, en especial la vigilancia, todo con las debidas autorizaciones de la autoridad de aplicación, v.g. artículos 6 inc. e) y f), 7 inc. f) , 33, 36, entre otros.

Que de igual modo muchos particulares instalan en sus propiedades este tipo de mecanismos que tienen la particularidad de captar imágenes y/o sonidos de espacios privados de acceso público o directamente del espacio público.

Que por otra parte la Ley N° 9380 regula el tratamiento de estas imágenes obtenidas por las fuerzas de seguridad provinciales.

Que resulta necesario que para la ejecución de políticas de seguridad para las que son necesarias este tipo de imágenes, estas respondan a un patrón tecnológico único y común, a fin de su aprovechamiento efectivo cuando los requerimientos de las autoridades competentes los precisen.

Que corresponde tener en consideración los medios que utilizan las Fuerzas de Seguridad, por lo que es preciso que aquellos que utilicen este tipo de tecnología, las adecuen o compatibilicen a esos medios, todo de acuerdo a los parámetros, condiciones y términos que se prevean reglamentariamente, aspecto reglamentario cuya proyección estará a cargo del Ministerio de Seguridad, para su posterior consideración por este Poder Ejecutivo.

Por todo lo expuesto, entonces, se remite adjunto el proyecto de Ley en cuestión, para su aprobación por dicho Cuerpo, si así lo estima conveniente.

Sin otro particular, saludo a Usted con la más distinguida consideración.

MARTÍN MIGUEL LLARYORA, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

JUAN PABLO QUINTEROS, MINISTRO DE SEGURIDAD

JULIÁN MARÍA LÓPEZ, MINISTRO DE JUSTICIA Y TRABAJO

JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.

**LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CONVIVENCIA CIUDADANA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA**

PARTE I: SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Artículo 1º.- SISTEMA INTEGRADO. A los fines del diseño participativo y la gestión asociada de las políticas públicas de prevención y lucha contra el delito y las contravenciones, de promoción de la paz y la tranquilidad, constitúyese el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba.

Artículo 2º.- COMPOSICIÓN. Son partes integrantes del Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana:

- a) El Poder Ejecutivo, a través de los ministerios, secretarías y direcciones competentes.
- b) La Legislatura provincial.

- c) El Ministerio Público Fiscal.
- d) El Instituto de Planificación y Formación.
- e) Las Guardias Locales de Prevención y Convivencia (GLP).
- f) Las Fuerzas provinciales de Seguridad: Policía de Córdoba, Servicio Penitenciario y Fuerza Policial Antinarcotráfico.
- g) Las prestadoras privadas de seguridad.

Artículo 3º.- ESTADO RESPONSABLE. El Estado provincial es el responsable principal de las políticas públicas de seguridad y convivencia ciudadana.

Artículo 4º.- GOBIERNO. En el marco de sus respectivas competencias constitucionales, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad o el organismo que en el futuro lo reemplace, decide los planes, programas o proyectos a gestionar en las materias de seguridad y convivencia.

Artículo 5º.- SOCIEDAD DESTINATARIA. Las políticas de seguridad y convivencia tienen como objeto contribuir al desarrollo del capital social, mediante la prevención y lucha contra todas las conductas que configuran tipos contravencionales y delictuales, el mantenimiento del orden y la promoción de la tranquilidad, en el marco de los derechos y las garantías constitucionales.

Artículo 6º.- SOCIEDAD PARTÍCIPE. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio competente, propicia la participación de las personas destinatarias de las políticas de seguridad y convivencia; en particular, de los referentes de los sectores empresariales y de las organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 7º.- MARCO JURÍDICO. El Instituto de Planificación y Formación, las Guardias Locales de Prevención y Convivencia (GLP) y las Fuerzas provinciales de Seguridad, dependientes del Poder Ejecutivo, tanto la Policía de Córdoba como el Servicio Penitenciario, se rigen por las disposiciones de esta Ley y sus reglamentaciones.

Artículo 8º.- LEYES COMPLEMENTARIAS. La Fuerza Provincial Antinarcotráfico y las empresas prestadoras de seguridad se rigen, respectivamente y sin perjuicio de las disposiciones pertinentes de la presente Ley, por las Leyes Nros. 10.200 y 10.571 y sus modificatorias.

Artículo 9º.- COMUNICACIÓN. El Poder Ejecutivo diseña y gestiona campañas de información y divulgación tendientes a:

- a) Transparentar las políticas de prevención y lucha contra las contravenciones y los delitos, empoderando a los ciudadanos y referentes sociales en su control y evaluación.
- b) Promover la formación cívica en valores, el ejercicio responsable de los derechos y el debido cumplimiento de las obligaciones.

PARTE II: INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y FORMACIÓN

Artículo 10.- CREACIÓN. Créase el Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, de acuerdo con las misiones y funciones previstas en esta Ley.

Artículo 11.- MISIÓN. El Instituto asiste en la planificación, control y evaluación de las políticas de prevención y lucha contra las contravenciones y los delitos; particularmente, en relación a los programas de capacitación de los integrantes de todas las Fuerzas provinciales de Seguridad, las Guardias Locales de Prevención y Convivencia y las empresas prestadoras de servicios de seguridad.

Artículo 12.- FUNCIONES. Corresponde al Instituto:

- a) Elaborar los programas de capacitación de los integrantes de las Fuerzas provinciales de Seguridad, de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia y de las empresas prestadoras de servicios de seguridad.
- b) Controlar y evaluar la implementación de las referidas capacitaciones.
- c) Elaborar y actualizar un Registro de instituciones habilitadas para dictar las capacitaciones a las que se refiere este artículo, incluyendo los Institutos y Escuelas de las Fuerzas de Seguridad existentes.
- d) Establecer los criterios y categorizar a las empresas de seguridad privada que presten servicios en el ámbito de la Provincia de Córdoba.

Artículo 13.- IMPLEMENTACIÓN DE LAS CAPACITACIONES. Las capacitaciones a las que se refieren los incisos a) y b) del artículo precedente pueden ser prestadas:

- a) Directamente por las Fuerzas provinciales de Seguridad, por las municipalidades o comunas, y por las empresas prestadoras, a través de sus Institutos, Escuelas u otros Centros educativos.
- b) Mediante la contratación de universidades, asociaciones civiles o fundaciones, debidamente acreditadas por el Instituto de Planificación y Formación.

Artículo 14.- DEPENDENCIA. El Instituto depende orgánica y funcionalmente del Consejo para la Planificación Estratégica (COPEC), creado por Ley N° 9475.

Artículo 15.- CONSEJOS LOCALES O REGIONALES. A los fines operativos, el Instituto puede convocar y poner en marcha Consejos Locales o Regionales, con la participación de representantes territoriales de Foros Sectoriales, intendentes municipales y presidentes comunales, de acuerdo con la regulación y organización que establezca el COPEC a dichos fines.

Artículo 16.- OBSERVATORIO. El Instituto diseña y gestiona el Observatorio de Seguridad y Convivencia. Periódicamente, el Observatorio elabora estudios e informes sobre la

evolución de las contravenciones y los delitos en la Provincia, desagregados por Departamento. Los estudios e informes del Observatorio son públicos.

PARTE III: GUARDIAS LOCALES DE PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA

Artículo 17.- PROGRAMA PROVINCIAL. Créase el Programa Provincial "Guardias Locales de Prevención y Convivencia (GLP)".

Artículo 18.- AUTONOMÍAS LOCALES. En el marco de las autonomías establecidas por la Constitución de la Provincia de Córdoba, las municipalidades y comunas pueden adherir a la presente Ley y, sobre esa base, constituir sus respectivas Guardias Locales de Prevención y Convivencia.

Artículo 19.- MISIÓN. Cada Guardia Local de Prevención y Convivencia tiene como misión contribuir al desarrollo del capital social de cada localidad, municipalidad o comuna, colaborando en el marco de sus funciones en la prevención del delito y las contravenciones como auxiliar de la Policía de Córdoba.

Artículo 20.- FUNCIONES. Corresponde a las Guardias Locales de Prevención y Convivencia:

- a) Disuadir, prevenir y, en su defecto, hacer cesar la comisión de todo tipo de faltas, infracciones o contravenciones, provinciales, municipales o comunales, en el marco de sus competencias materiales y territoriales.
- b) Auxiliar a la Policía de Córdoba en la disuasión y prevención de todo tipo de delitos y contravenciones.
- c) Coadyuvar al mantenimiento del orden público y la tranquilidad entre los vecinos de las respectivas localidades, municipalidades o comunas.
- d) Colaborar en la detección temprana de conflictos entre vecinos y en su resolución pacífica.
- e) Participar en la gestión de riesgo climático, catástrofes y protección civil.
- f) Prestar ayuda y socorro a todos los vecinos y visitantes de la localidad.
- g) Labrar actas de infracción, realizar clausuras, secuestros y decomisos, de acuerdo con las normativas vigentes y siguiendo los procedimientos, establecidos por los Tribunales de Faltas competentes por la materia y el territorio.
- h) Aprender a quien sea sorprendido "in fraganti" en la comisión de un delito, en el momento de disponerse a cometerlo o de fugarse después de haberlo cometido, en los términos del Código Procesal Penal, comunicando la aprehensión inmediatamente a la Policía de Córdoba y cumplimentando el informe sobre lo acaecido, de acuerdo con los protocolos a dictar por la autoridad competente.

Artículo 21.- PROHIBICIONES. Las Guardias Locales de Prevención y Convivencia no pueden:

- a) Desarrollar investigaciones criminales.
- b) Albergar detenidos en sus instalaciones.
- c) Realizar citaciones o notificaciones judiciales.
- d) Realizar tareas administrativas ajenas a sus funciones.
- e) Portar armas menos letales sin su correspondiente certificación.

Artículo 22.- COORDINACIÓN OPERATIVA. En su carácter de auxiliares de la Policía de Córdoba, las Guardias Locales de Prevención y Convivencia de cada municipalidad o comuna coordinan sus tareas con el Director de la Departamental correspondiente.

Artículo 23.- ASISTENCIA PROVINCIAL. El Poder Ejecutivo Provincial, mediante el Ministerio de Seguridad o el organismo que lo reemplace en el futuro, puede proveer a las municipalidades y comunas que adhieran a este Programa de:

- a) Vehículos equipados para tareas de vigilancia y patrullaje.
- b) Armamento no letal para el uso de sus integrantes.
- c) Asistencia técnica para la elaboración de sistemas locales de prevención y convivencia.

A los fines de la implementación de esta disposición, las municipalidades o comunas deben suscribir un convenio específico de asistencia, obligándose a informar sobre el uso de los aportes provinciales y los resultados alcanzados.

Artículo 24.- DIRECCIÓN Y PERSONAL. Cada municipalidad o comuna organiza su propia Guardia Local y designa al funcionario a cargo.

Los Guardias Locales de Prevención y Convivencia están integradas por "Agentes Locales de Prevención y Convivencia", quienes dependen de sus respectivas municipalidades o comunas.

Artículo 25.- FORMACIÓN. Los programas de formación de los integrantes de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia son elaborados, controlados y evaluados por el Instituto de Planificación y Formación, previsto en el artículo 10 de esta Ley.

La implementación de dichos programas está a cargo de las respectivas municipalidades o comunas, directamente o mediante la contratación de universidades, asociaciones civiles o fundaciones, debidamente acreditadas por el Instituto de referencia.

Artículo 26.- USO DE ARMAS MENOS LETALES. El personal de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia puede usar armas menos letales en el ejercicio de sus tareas.

La reglamentación de la presente Ley determinará los elementos incluidos en el concepto de 'armas menos letales'.

Artículo 27.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. El personal de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, autorizado al uso de armas menos letales, debe ajustar su conducta a los protocolos de uso de la fuerza que, a ese fin, dicta la Policía de Córdoba.

PARTE IV: GESTIÓN PRIVADA DE LA SEGURIDAD

Artículo 28.- FORMACIÓN. Los programas de formación de los integrantes de las empresas prestadoras de servicios de seguridad son elaborados, controlados y evaluados por el Instituto de Planificación y Formación, previsto en el artículo 10 de esta Ley.

La implementación de dichos programas se encuentra a cargo de las respectivas empresas prestadoras, directamente o mediante la contratación de universidades, asociaciones civiles o fundaciones, debidamente acreditadas por el Instituto de referencia.

Artículo 29.- USO DE ARMAS MENOS LETALES. En los casos previstos en la reglamentación de esta Ley, el Ministerio competente puede autorizar, a las empresas prestadoras de servicios de seguridad que así lo requieran, el uso de armas menos letales en el ejercicio de las tareas a cargo del personal de su dependencia, conforme a los términos de la presente Ley.

Artículo 30.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. El personal de las empresas prestadoras de servicios de seguridad, autorizado al uso de armas menos letales, debe ajustar su conducta a los protocolos de uso de la fuerza y otros específicos sobre la materia, dictados o a dictar a tales fines.

Artículo 31.- SOLICITUD. La autorización para el uso de armas menos letales debe darse ante el pedido expreso de la empresa en cuestión, debidamente justificado y de acuerdo con las formalidades que establezca la reglamentación de esta Ley.

Artículo 32.- REQUISITOS. La empresa solicitante debe estar legalmente constituida, con toda su documentación en orden y acreditar los antecedentes y demás requisitos que establezca la reglamentación de esta Ley.

Al momento de requerir la autorización, la empresa solicitante debe adjuntar el listado del personal que haría uso de las armas menos letales, así como los lugares donde se prestarán los servicios.

Artículo 33.- PROHIBICIONES. Las empresas prestadoras de servicios de seguridad que no estén expresamente autorizadas por la autoridad competente, no pueden usar armas menos letales.

Tampoco puede usar armas menos letales el personal de las empresas autorizadas que no esté debidamente certificado.

En ningún caso, los prestadores unipersonales pueden ser autorizados al uso de armas menos letales.

Artículo 34.- RENOVACIÓN Y REVOCATORIA. La capacitación y certificación para el uso de armas menos letales debe renovarse anualmente, de acuerdo al procedimiento que establezca la reglamentación.

La autoridad competente puede revocar la autorización para el uso de armas menos letales por incumplimiento de las obligaciones que reglamentariamente se establezcan.

Artículo 35.- IDENTIFICACIÓN. El personal de las empresas prestadoras de servicios de seguridad autorizadas para el uso de armas menos letales debe estar debidamente identificado. El incumplimiento de esta obligación es causal de revocatoria de la autorización.

Artículo 36.- PUBLICIDAD. La autoridad competente debe llevar y publicar en la web del Ministerio de Seguridad, o el que en el futuro lo reemplace, la nómina de las empresas prestadoras de servicios de seguridad autorizadas al uso de armas menos letales y del personal debidamente certificado a dicho fin.

Artículo 37.- SERVICIOS AL SECTOR PÚBLICO. Se podrán contratar los servicios de empresas prestadoras de seguridad para la custodia o vigilancia de edificios o espacios públicos, dependencias oficiales, establecimientos educativos o sanitarios y cualquier otra infraestructura edilicia que sirva para la prestación de servicios provinciales.

Las empresas prestadoras de seguridad autorizadas para que su personal use armas menos letales pueden ser contratadas para la prestación de sus servicios por las municipalidades y comunas que adhieran al Programa de Guardias Locales de Prevención y Convivencia.

Artículo 38.- SERVICIOS A LOS SECTORES PRIVADOS. Las empresas privadas y las organizaciones de la sociedad civil, como clubes, sindicatos o gremios, que realicen eventos públicos, espectáculos deportivos, recreativos o afines, podrán contratar los servicios de seguridad de las empresas prestadoras debidamente autorizadas a dichos fines por la reglamentación y categorizadas por el Instituto de Planificación y Formación.

El Ministerio de Seguridad, o el organismo que en el futuro lo reemplace, determina la cantidad de personal que se necesita contratar para que el evento o espectáculo sea autorizado, según las pautas que se establezcan en la reglamentación de esta Ley.

PARTE V: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

Artículo 39.- DEFENSORÍA DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD. La promoción y protección de los derechos del personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana, amparados en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, la Constitución de la

Provincia de Córdoba y las leyes y reglamentos vigentes, constituye una función primordial de la Defensoría de las Fuerzas de Seguridad, creada por Ley Nº 10.732.

Artículo 40.- Corresponde al Poder Ejecutivo dictar los decretos de organización institucional y administrativa de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario de Córdoba, previendo la estructura orgánica de cargos y sus responsabilidades, de acuerdo con las funciones establecidas en las leyes del personal policial y penitenciario.

Deróganse, a partir de la entrada en vigencia de los decretos referidos en el párrafo precedente, el Título II de la Parte Segunda y el Título II de la Parte Tercera de la Ley Nº 9235.

Artículo 41.- MODIFÍCASE el artículo 5º de la Ley Nº 9400, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 5º.- Incentivos. Toda persona que realice la entrega voluntaria de armas de fuego y municiones, se hará acreedora del incentivo que establezca la Autoridad de Aplicación por vía reglamentaria, además del previsto en la Ley Nacional Nº 26.216.”.

Artículo 42.- Las personas que desempeñen funciones por elección popular, Gobernador, Vicegobernador, Legisladores y Tribunales, los Ministros, Secretarios, Directores y Subdirectores, Asesores y toda persona que, por disposición legal o reglamentaria, ejerza funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados, están obligados a presentar ante la autoridad competente, certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, guardando debida reserva todo aquél que tenga acceso al contenido de los mismos.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará el procedimiento que disponga la reglamentación y, según corresponda, los mecanismos para el abordaje integral a personas con consumo problemático de drogas psicotrópicas ilegales, implementados por el área competente del Poder Ejecutivo Provincial, a fin de brindar contención y asistencia.

Artículo 43.- DERÓGASE la Parte Primera de la Ley Nº 9235, sus modificatorias y toda legislación que se oponga a la presente Ley.

Artículo 44.- MODIFÍCASE el artículo 20 de la Ley Nº 10.571, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 20.- Prohibición de uso de armas. Queda expresamente prohibido para los prestadores de los servicios enumerados en la presente Ley el uso de cualquier tipo de armas, con las excepciones previstas en la Ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana Nº Las habilitaciones que en virtud de esta norma conceda la Autoridad de Aplicación a los prestadores de servicios de seguridad privada serán otorgadas con la mención expresa ‘Sin autorización para el uso de armas’ o ‘Con autorización para el uso de armas menos letales’.”.

Artículo 45.- INCORPÓRASE como artículo 32 bis a la Ley Nº 10.571, el siguiente:

“Artículo 32 bis.- Las disposiciones de los artículos 30, 31 y 32 se ejecutarán de conformidad a las previsiones de la Ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana Nº.....”.

Artículo 46.- INCORPÓRASE como inciso h) del artículo 3º de la Ley Nº 9475 al siguiente:

“h) Desarrollar a través del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, creado por la Ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana Nº....., las tareas de planificación, control, evaluación y capacitación establecidas en dicha norma, como así también el diseño y la gestión del Observatorio de Seguridad y Convivencia.”.

Artículo 47.- INCORPÓRASE como inciso e) del artículo 4º de la Ley Nº 9475 al siguiente:

“e) El Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, creado por la Ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana Nº.....”.

Artículo 48.- MODIFÍCASE el artículo 5º de la Ley Nº 9475, el que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 5º.- LA designación del Presidente del Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (CoPEC), de los integrantes del Comité Ejecutivo y de los miembros del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia será facultad del Poder Ejecutivo Provincial y contemplará la consulta a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, empresario, académico, sindical, social y político, a través de un mecanismo de recepción de opiniones y observaciones, expresas y fundadas, que ciudadanos y entidades deseen manifestar al respecto.”.

Artículo 49.- INCORPÓRASE como apartado 5) del artículo 7º de la Ley Nº 9475 al siguiente:

“5) La organización, estructuras y demás aspectos de funcionamiento del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia -cuyas funciones determina la Ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana Nº.....-, serán establecidos por vía reglamentaria.”.

Artículo 50.- EL Poder Ejecutivo, podrá disponer la contratación de agentes en carácter de personal civil, o bajo la modalidad de contrato de servicios y/o servicios a cargo de terceros, o la forma contractual que al efecto se establezca, para la realización de actividades y tareas en dependencias de las Fuerzas de Seguridad, del Ministerio Público Fiscal y/o del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, de acuerdo con las características de prestación, y demás términos y condiciones que se establezcan por vía reglamentaria.

Artículo 51.- LOS prestadores de servicios de seguridad privada, y quienes sin serlo posean, manejen o de cualquier modo dispongan de cámaras de video vigilancia, cámaras de seguridad u otro medio técnico o sistema similar, instalados en espacios privados de acceso público, o en establecimientos privados que capten imágenes y/o sonidos del espacio o lugares públicos deben compatibilizar sus sistemas técnicos y/o tecnológicos con los utilizados por las Fuerzas de Seguridad de la Provincia, de acuerdo a los términos, modalidades y condiciones que se establezcan por vía reglamentaria.

El Ministerio de Seguridad, con la intervención y/o participación de los organismos que éste disponga, elaborará la reglamentación de la presente disposición, la que será puesta a consideración del Poder Ejecutivo.

Artículo 52.- De forma.

MARTÍN MIGUEL LLARYORA, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
JUAN PABLO QUINTEROS, MINISTRO DE SEGURIDAD
JULIÁN MARÍA LÓPEZ, MINISTRO DE JUSTICIA Y TRABAJO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.

38413/L/23

Córdoba, 12 de diciembre de 2023

AL SR.

PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL

Myrian Beatriz PRUNOTTO

S.//D.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia la creación de once (11) Fiscalías de Instrucción y tres (3) Juzgados de Control en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, así como cuatro (4) Fiscalías de Instrucción en las ciudades de Carlos Paz, Río Cuarto y Cosquín.

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba es un actor institucional relevante en la definición de la política criminal y de la política integral de gestión de conflictividad; en ese marco, es el titular de la persecución penal y con ello una pieza clave para la gestión de la seguridad en la Provincia.

El crecimiento demográfico de nuestra Provincia, el sensible aumento de casos penales y la complejización de las modalidades y entramados delictivos exigen en este momento un refuerzo en la estructura del Ministerio Público Fiscal. No es posible mejorar las condiciones de seguridad de la Provincia, si no aumentamos la eficacia de la persecución penal y ello requiere mejorar la cantidad de fiscales por habitantes. Para la Capital de la Provincia las nuevas fiscalías propuestas por la presente iniciativa representan un 40% de aumento de la capacidad del Ministerio Público Fiscal. Adicionalmente, Río Cuarto, la segunda ciudad y capital alternativa de la Provincia, es tenida en cuenta en el análisis que se realiza. Se considera imprescindible reforzar el actuar del Ministerio Público Fiscal en dicha ciudad y en su vasto ámbito de actuación territorial, creando allí dos nuevas fiscalías de instrucción que implican también un crecimiento del 40% del equipo de fiscales.

En cuanto al corredor Sierras Chicas, si bien corresponde territorialmente a la Primera Circunscripción Judicial, se hace necesario mencionarla en este punto para instar al Ministerio Público Fiscal a generar un nuevo esquema de abordaje del fenómeno criminal en esta región, que tenga en especial consideración a las localidades de Villa Allende, La Calera, Saldán, Mendiola y Unquillo, bajo un esquema coordinado que refuerce la presencia institucional del MPF y la coordinación con las Fuerzas de Seguridad.

De acuerdo a los datos del censo 2022 el Departamento Punilla presenta un crecimiento demográfico de 8 puntos porcentuales por encima del promedio provincial. Esto junto a las variables de afluencia de personas, motivada por la actividad turística, la cantidad de casos penales y las particularidades que con relación al fenómeno criminal presenta el corredor de la ruta 38. Para contener la demanda de atención y tratamiento de casos penales es necesario incrementar las dependencias del MPF en el ámbito territorial de actuación de Villa Carlos Paz y de Cosquín.

El funcionamiento de estas nuevas dependencias se orienta a generar las condiciones necesarias para mejorar los niveles de coordinación con las Fuerzas de Seguridad y aumentar los recursos destinados a la investigación y la persecución penal, especialmente en casos críticos como los procesos de flagrancia iniciados por la intervención policial, aquéllos en los que la seguridad ciudadana se encuentren más comprometidas y los que impliquen una afectación directa y diferencial de la convivencia en comunidad.

Además, resulta necesario crear tres (3) Juzgados de Control en la Primera Circunscripción Judicial, atento al aumento de las causas que esta nueva disposición de recursos generará.

Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.

Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.

MARTÍN MIGUEL LLARYORA, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
JULIÁN MARÍA LÓPEZ, MINISTRO DE JUSTICIA Y TRABAJO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.

**LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY**

Artículo 1º.- CRÉANSE en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, once (11) Fiscalías de Instrucción que serán designadas como de Cuadragésimo Primera, Cuadragésimo Segunda, Cuadragésimo Tercera, Cuadragésimo Cuarta, Cuadragésimo Quinta, Cuadragésimo Sexta, Cuadragésimo Séptima, Cuadragésimo Octava, Cuadragésimo Novena, Quincuagésima Nominación, Quincuagésima Primera Nominación, respectivamente.

Artículo 2º.- CRÉANSE una (1) Fiscalía de Instrucción en la Primera Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Carlos Paz, Departamento Punilla, que será designada como Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple del Cuarto Turno; dos (2) Fiscalías de Instrucción en la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Río Cuarto, Departamento Río Cuarto, que serán designadas como Fiscalías de Instrucción de Competencia Múltiple del Cuarto y Quinto Turno, respectivamente; y una (1) Fiscalía de Instrucción en la Séptima Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Cosquín, Departamento Punilla, que será designada como Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple del Segundo Turno.

Artículo 3º.- CRÉANSE tres (3) Juzgados de Control y Faltas, que se denominarán Juzgados de Control y Faltas de Décimo Segunda, Décimo Tercera y Décimo Cuarta Nominación en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.

Artículo 4º.- FACÚLTASE al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba, conforme a sus funciones y atribuciones, a dictar las normas que aseguren el cumplimiento de la presente Ley y a adoptar las medidas adecuadas que permitan la eficaz operatividad funcional y organizacional de las Fiscalías de Instrucción creadas en esta norma, respectivamente. La estructura, ámbito de actuación y demás aspectos de organización de las Fiscalías creadas en la presente Ley serán establecidas por la Fiscalía General de la Provincia y podrá hacerlo bajo el formato de Unidad Fiscal.

Artículo 5º.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo Provincial a realizar los ajustes presupuestarios necesarios a los efectos del cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 6º.- De forma.

MARTÍN MIGUEL LLARYORA, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
JULIÁN MARÍA LÓPEZ, MINISTRO DE JUSTICIA Y TRABAJO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.

38415/L/23

Córdoba, 12 de diciembre de 2023

**AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Myrian Beatriz PRUNOTTO
S.//D.**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia la creación de Fiscalías Móviles de Instrucción de Lucha contra el Narcotráfico en diversas ciudades de la Provincia, así como un Juzgado de Control con competencia en la Lucha contra el Narcotráfico.

La Provincia de Córdoba ha asumido desde el año 2012 el desafío de luchar contra el narcotráfico a través de una política activa que incluyó la creación de un fuero judicial especializado y una fuerza policial específica para el desarrollo de esta política de persecución penal focalizada.

Hoy todos sabemos que la preocupación por el avance del narcotráfico en distintos sectores del país es una realidad insoslayable, y que este fenómeno, transfronterizo por definición, requiere, por un lado, acciones concretas y coordinadas del gobierno nacional y, por otro lado, el refuerzo de la estructura provincial destinada a la investigación y persecución de los delitos que corresponden a la jurisdicción provincial en materia de narcotráfico.

En el camino trazado de aumentar los recursos para la lucha contra el narcotráfico, este proyecto de ley viene a cumplir el compromiso de duplicar la cantidad de fiscalías de lucha contra el narcotráfico en toda la Provincia. Las nuevas fiscalías especializadas se distribuyen a lo largo y ancho del territorio provincial, tomando en consideración características, locaciones y

corredores específicos que demandan mayor eficacia en la intervención del Estado, procurando reforzar la cobertura de toda la extensión de la Provincia.

De este modo, Córdoba ratifica el compromiso asumido hace más de diez años de luchar contra el flagelo del narcotráfico.

Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.

Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.

MARTÍN MIGUEL LLARYORA, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

JULIÁN MARÍA LÓPEZ, MINISTRO DE JUSTICIA Y TRABAJO

JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.

**LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY**

Artículo 1º.- CRÉASE una Fiscalía Móvil de Instrucción de Lucha contra el Narcotráfico en cada una de las sedes que en cada caso se consigna:

- a) En la ciudad de Córdoba.
- b) En la ciudad de Río Cuarto.
- c) En la ciudad de Villa Carlos Paz.
- d) En la ciudad de Cruz del Eje.
- e) En la ciudad de Marcos Juárez.
- f) En la ciudad de Bell Ville.
- g) En la ciudad de Villa Dolores.

Artículo 2º.- CRÉASE un Juzgado de Control, con sede en la ciudad de Córdoba, de la Primera Circunscripción Judicial, cuya numeración será establecida por el Ministerio Público Fiscal, y que tendrá asignada -además de las competencias que por ley le corresponden- la de Lucha contra el Narcotráfico en los términos del artículo 34 de la Ley Nacional Nº 23.737, de conformidad a la adhesión dispuesta por Ley Nº 10.067.

Artículo 3º.- ESTABLÉCESE que las Fiscalías Móviles de Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia de Córdoba, tendrán jurisdicción en el ámbito territorial y en la modalidad que en cada caso establezca el Ministerio Público Fiscal.

Artículo 4º.- FACÚLTASE al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba, conforme a sus funciones y atribuciones, a dictar las normas que aseguren el cumplimiento de la presente Ley y a adoptar las medidas adecuadas que permitan la eficaz operatividad funcional y organizacional de las Fiscalías de Instrucción creadas en esta norma, respectivamente. La estructura, ámbito de actuación y demás aspectos de organización de las Fiscalías creadas en la presente Ley serán establecidas por la Fiscalía General de la Provincia y podrá hacerlo bajo el formato de Unidad Fiscal.

Artículo 5º.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo Provincial a realizar los ajustes presupuestarios necesarios a los efectos del cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 6º.- De forma.

MARTÍN MIGUEL LLARYORA, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

JULIÁN MARÍA LÓPEZ, MINISTRO DE JUSTICIA Y TRABAJO

JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.

38435/L/23

**LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY**

Artículo 1º: Las personas que desempeñen funciones por elección popular, Gobernador, Vicegobernador, Legisladores y Tribunales, los Ministros, Secretarios, Directores y Subdirectores, Asesores y toda persona que, por disposición legal o reglamentaria, ejerza funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados, están obligados a presentar ante la autoridad competente, certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales.

Artículo 2º: El examen de detección de metabólicos de drogas ilegales en orina deberá realizarse al menos una (1) vez al año y de manera aleatoria, según el procedimiento que se establezca en su reglamentación.

Artículo 3º: Toda persona que tenga acceso al contenido de los mismos, tiene la obligación de guardar reserva de su contenido. Los resultados del examen (positivo/negativo) serán considerados "datos sensibles" en los términos de la Ley Nº 25.326 la que será aplicable en todo cuanto sea compatible con la presente norma.

Artículo 4º: En caso de incumplimiento de lo dispuesto en los art. 1º y 2º, o de examen de resultado positivo, se aplicará el procedimiento que disponga la reglamentación y, según corresponda, los mecanismos para el abordaje integral a personas con consumo problemático de drogas psicotrópicas ilegales, implementados por el área competente del Poder Ejecutivo Provincial, a fin de brindar contención y asistencia.

Artículo 5º. De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Leg. Oscar Tamis

FUNDAMENTOS

La obligación de funcionarios públicos de realizar exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, tiene los siguientes antecedentes legislativos: Proyecto Diputado Miguel Ángel Toma (1997), Proyecto de la Diputada Nacional por Córdoba Sra. Leonor María Martínez Villada (2019), Ley provincial N° 1233 de Tierra de Fuego, Proyecto de legislaturas provinciales de Tucumán (2001), Río Negro (2016 y 2018), Salta (2022), Catamarca (2016).

En el ámbito de esta provincia, contamos con el antecedente más reciente: la Ordenanza N° 13366, (Modificatoria de O.M. N° 10.754- Código de Ética) sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba el 18/05/2023.

Todas estas iniciativas y textos normativos tienen como finalidad, reforzar la coherencia entre el ejercicio de la función pública y la vida privada, de quienes están llamados a llevar adelante las políticas necesarias para la lucha contra el narcotráfico, nuestra sociedad y ordenamiento jurídico lo consideran hoy un flagelo social.

Procurar enaltecer las virtudes políticas entendiendo que un funcionario público no debe consumir drogas ilegales, no puede hacernos perder la noción de la persona adicta como un enfermo.

La Ley Nacional N° 26.657 de Salud Mental, en su artículo 4º dispone: " Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud."

En primer lugar y a los efectos de poner en evidencia el alcance de la norma cabe destacar que la Ley nacional es de orden público (art. 45), es decir que no precisa de la decisión explícita por parte de las provincias a los efectos de su inmediata entrada en vigencia en los territorios provinciales sin perjuicio de la normativa legal vigente en la materia. De esta forma la ley establece un estándar mínimo de derechos y garantías como piso nacional que no puede ser desoído por la normativa provincial en caso de incongruencia entre legislación nacional y provincial se aplica el principio pro homine.

El segundo elemento de relevancia, es que la ley encarna la concreción de principios internacionales de Derechos Humanos por medio de los cuales la dignidad humana se impone como el eje axiomático a partir del cual se construye un paradigma de Derechos Humanos con atención en la comunidad.

En su artículo 2º, ratifica la naturaleza de la ley como parte integrante de la perspectiva internacional de los derechos humanos la suma de la temática de la salud mental así el texto de la ley explícita como parte integrante de la misma a: a) La declaración de Caracas (OEA 1990), b) Los principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental (ONU 1991) y los c) Principios de Brasilia rectoriales para el desarrollo de la atención en salud mental en las Américas (OEA 2005), d) Convención sobre los derechos de personas con discapacidad (ONU 2006)

Aceptado que el adicto es un enfermo en clave de derechos humanos, es importante el resguardo de toda información relativa a su salud.

Así, la Ley Nacional N° 25.326 de Protección de los Datos Personales dispone: artículo 2º: (...) Datos sensibles: Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e **información referente a la salud** o a la vida sexual.

En consecuencia cualquier obligación que se imponga al funcionario público, en aras a robustecer su integridad en el cumplimiento de sus funciones, debe resguardar su dignidad como persona, so pena de incurrir en actos de discriminación y estigmatización.

Por todas las consideraciones expuestas, es que solicito a mis pares Sres. Legisladores, acompañen en el tratamiento y aprobación del presente proyecto ley.

Leg. Oscar Tamis

DESPACHO DE COMISIÓN EN MAYORÍA

Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones 20 de Diciembre de 2023

A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:

La Comisión Ad Hoc creada por Resolución R-3876/23, al dictaminar acerca del **Proyecto de Ley N° 38407/L/23**, iniciado por el Poder Ejecutivo, estableciendo la Ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, modificando las Leyes N° 9400, Adhesión provincial al Programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego N° 10571, Régimen de los Prestadores de Servicio de Seguridad Privada; N° 9475, creación del COPEC y N° 9235, Policía de Córdoba, **COMPATIBILIZADO** con el **Proyecto de Ley N° 38413/L/23**, iniciado por el Poder Ejecutivo, creando 11 Fiscalías de Instrucción y 3 Juzgados de Control en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba; y 4 Fiscalías de Instrucción en las ciudades de Villa Carlos Paz, Río Cuarto y Cosquín, con el **Proyecto de Ley N° 38415/L/23**, iniciado por el Poder Ejecutivo, creando Fiscalías Móviles de Instrucción de Lucha contra el

Narcotráfico en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Villa Carlos Paz, Cruz del Eje, Marcos Juárez, Bell Ville, y Villa Dolores; así como un Juzgado de Control con competencia en la Lucha contra el Narcotráfico en la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba, y con el **Proyecto de Ley Nº 38435/L/23**, iniciado por el Legislador el Legislador Tamis, estableciendo la obligatoriedad de presentar ante la autoridad competente, certificado negativo expedido por institución médica, acreditando la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, a todas las personas que desempeñen funciones por elección popular en la provincia., **ACONSEJA**, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, **PRESTARLE APROBACIÓN** de la siguiente manera:

**LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
TÍTULO I
SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA**

Capítulo Primero

Sistema Integrado de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana

Artículo 1º.- Orden Público. Creación. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto crear el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana de la Provincia de Córdoba a los fines del diseño participativo y la gestión asociada de las políticas públicas de prevención y lucha contra las violencias, las contravenciones y el delito, de promoción de la paz y la tranquilidad social.

Artículo 2º.- Composición. El Sistema Integrado de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana está compuesto por:

- a) El Poder Ejecutivo Provincial, a través de los ministerios, secretarías y direcciones competentes;
- b) El Poder Legislativo de la provincia de Córdoba;
- c) El Poder Judicial de la provincia de Córdoba;
- d) El Ministerio Público Fiscal;
- e) Las Fuerzas Provinciales de Seguridad:
 - 1) Policía de la provincia de Córdoba;
 - 2) Servicio Penitenciario de Córdoba, y
 - 3) Fuerza Policial Antinarcotráfico;
- f) Municipios y comunas;
- g) El Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia;
- h) Las Guardias Locales de Prevención y Convivencia Ciudadana (GLP);
- i) Los Consejos Departamentales, Municipales y Barriales de Prevención y Convivencia creados por la Ley Nº 9235;
- j) El Observatorio de Seguridad y Convivencia, y
- k) Las empresas prestadoras privadas de seguridad.

Artículo 3º.- Responsabilidad Estatal. El Estado provincial es el responsable principal de las políticas públicas de seguridad pública y seguridad ciudadana.

Artículo 4º.-Competencias. El Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de sus respectivas competencias constitucionales por intermedio del Ministerio de Seguridad o el organismo que lo reemplace, define la planificación, programación y gestión en materia de seguridad pública y seguridad ciudadana. La Cartera Ministerial, a través de sus órganos dependientes, debe informar anualmente ante la Legislatura de la Provincia, estado de situación del Sistema Integrado de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana.

Artículo 5º.- Objeto. Las políticas de seguridad pública y seguridad ciudadana tienen por objeto contribuir al desarrollo del capital social, mediante la prevención y lucha contra las conductas que configuran violencias, contravenciones o delitos, el mantenimiento del orden y la promoción de la tranquilidad, en el marco de los derechos, las garantías constitucionales y los derechos humanos.

La seguridad ciudadana tiene por finalidad promover la convivencia de la ciudadanía garantizando la integridad, el legítimo disfrute y posesión de sus bienes y el efectivo ejercicio de sus derechos y libertades, asegurando la participación ciudadana en el desarrollo de las políticas de seguridad provincial.

Artículo 6º.- Participación Ciudadana. El Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del ministerio competente, propicia la participación de las personas destinatarias de las políticas de seguridad pública y seguridad ciudadana; en particular, de los referentes de los sectores empresariales y de las organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 7º.- Marco Jurídico. El Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, las Guardias Locales de Prevención y Convivencia (GLP) y las Fuerzas Provinciales de Seguridad, dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, tanto la Policía de la provincia de Córdoba como el Servicio Penitenciario de Córdoba, se rigen por la Ley Nº 9235, las disposiciones de esta norma y sus reglamentaciones.

Artículo 8º.- Leyes Complementarias. La Fuerza Provincial Antinarcotráfico y las empresas prestadoras de seguridad privada se rigen por las Leyes Nros. 10200 y 10571 y sus modificatorias, respectivamente, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la presente Ley.

Artículo 9º.- Comunicación. El Poder Ejecutivo Provincial diseña y gestiona campañas de información y divulgación tendientes a:

a) Transparentar las políticas de prevención y lucha contra las violencias, contravenciones y los delitos, empoderando a los ciudadanos y referentes sociales en su control y evaluación, y

b) Promover la formación cívica en valores, el ejercicio responsable de los derechos y el debido cumplimiento de las obligaciones.

Capítulo Segundo

Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia

Artículo 10.- Creación. Créase el Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, de acuerdo con las misiones y funciones previstas en esta Ley.

Artículo 11.- Misión. El Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia asiste en la planificación, control y evaluación de las políticas de prevención y lucha contra las violencias, contravenciones y los delitos; particularmente, en relación a los programas de capacitación de los integrantes de todas las Fuerzas Provinciales de Seguridad, las Guardias Locales de Prevención y Convivencia y las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada.

Artículo 12.- Funciones. Corresponde al Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia las siguientes funciones:

a) Proponer programas de capacitación de los integrantes de las Fuerzas Provinciales de Seguridad, de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia y de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada, sin perjuicio de las disposiciones que otras leyes específicas establezcan en la materia. Asimismo, proponer protocolos de actuación a partir de la participación de los distintos miembros del Sistema;

b) Controlar y evaluar la implementación de las referidas capacitaciones, y

c) Elaborar y actualizar un Registro de instituciones habilitadas para dictar las capacitaciones a las que se refiere este artículo, incluyendo los institutos y escuelas de las Fuerzas Provinciales de Seguridad.

Artículo 13.- Capacitaciones. Las capacitaciones a las que se refieren los incisos a) y b) del artículo 12 de la presente Ley pueden ser prestadas:

a) Por las Fuerzas Provinciales de Seguridad;

b) Por los municipios o comunas, y

c) Por universidades nacionales o provinciales, de gestión pública o privada - debidamente reconocidas- cuyos planes de estudio en materia de formación en seguridad estén debidamente certificados por el Ministerio de Educación de la Nación o de la Provincia, según corresponda.

Artículo 14.- Dependencia. El Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia depende orgánicamente del Consejo para la Planificación Estratégica (CoPEC), creado por Ley Nº 9475.

Artículo 15.- Consejos Locales o Regionales. A los fines operativos, el Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia puede convocar y poner en marcha Consejos Locales o Regionales, con la participación de representantes territoriales de foros sectoriales, intendentes municipales y presidentes comunales, de acuerdo con la regulación y organización que establezca el Consejo para la Planificación Estratégica (CoPEC) a dichos fines.

Artículo 16.- Observatorio. El Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia diseña y gestiona el Observatorio de Seguridad y Convivencia. Periódicamente, el Observatorio elabora estudios e informes sobre la evolución de las violencias, contravenciones y los delitos en la Provincia, desagregados por Departamento. Los estudios e informes del Observatorio son públicos y de libre acceso a la ciudadanía.

Capítulo Tercero

Guardias Locales de Prevención y Convivencia

Artículo 17.- Programa. Creación. Créase el Programa Provincial "Guardias Locales de Prevención y Convivencia (GLP)".

Artículo 18.- Adhesión. En el marco de las autonomías establecidas por la Constitución de la Provincia de Córdoba, los municipios o comunas pueden adherir a la presente Ley y, sobre esa base, constituir sus respectivas Guardias Locales de Prevención y Convivencia.

Artículo 19.- Misión. Cada Guardia Local de Prevención y Convivencia tiene como misión contribuir al desarrollo del capital social de cada municipio o comuna, colaborando en el marco de sus funciones en la prevención de violencias, contravenciones y delitos como auxiliar de la Policía de la provincia de Córdoba.

Artículo 20.- Funciones. Corresponde a las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, las siguientes funciones:

a) Disuadir, prevenir y hacer cesar la comisión de todo tipo de faltas, infracciones o contravenciones provinciales, municipales o comunales, en el marco de sus competencias materiales y territoriales;

- b) Auxiliar a la Policía de la provincia de Córdoba en la disuasión y prevención de todo tipo de violencias, contravenciones y delitos;
- c) Coadyuvar al mantenimiento del orden público y la tranquilidad entre los vecinos de los respectivos municipios o comunas;
- d) Colaborar en la detección temprana de conflictos entre vecinos y en su resolución pacífica;
- e) Auxiliar a los organismos competentes en la gestión de riesgo climático, catástrofes y protección civil;
- f) Prestar ayuda y socorro a todos los vecinos y visitantes de la localidad, y
- g) Labrar actas de infracción, realizar clausuras, secuestros y decomisos, siguiendo los procedimientos, establecidos por los Tribunales de Faltas competentes en la materia y el territorio.

Artículo 21.- Prohibiciones. Las Guardias Locales de Prevención y Convivencia tienen prohibido:

- a) Desarrollar investigaciones criminales;
- b) Realizar citaciones o notificaciones judiciales;
- c) Realizar tareas administrativas ajenas a sus funciones, y
- d) Portar armas menos letales sin su correspondiente certificación vigente

Artículo 22.- Coordinación Operativa. En su carácter de auxiliares de la Policía de la provincia de Córdoba, las Guardias Locales de Prevención y Convivencia de cada municipio o comuna coordinan sus tareas con la autoridad policial competente.

Artículo 23.- Asistencia Provincial. El Poder Ejecutivo Provincial, mediante el Ministerio de Seguridad o el organismo que lo reemplace en sus competencias, puede proveer a los municipios y comunas que adhieran a este Programa de:

- a) Vehículos equipados para tareas de vigilancia y patrullaje;
- b) Armamento menos letal para el uso de los Agentes Locales de Prevención y Convivencia, y
- c) Asistencia técnica para la elaboración de sistemas locales de prevención y convivencia.

A los efectos de la implementación de esta disposición, el Ministerio de Seguridad o el organismo que lo reemplace en sus competencias, fijará criterios de oportunidad y conveniencia, en función de los requerimientos de municipios o comunas que suscriban Convenio específico de asistencia. Obligándose cada municipio o comuna a informar sobre el uso de lo suministrado por el Estado Provincial y los resultados alcanzados.

Artículo 24.- Dirección y Personal. Cada municipio o comuna organiza su propia Guardia Local de Prevención y Convivencia y designa al funcionario a cargo.

Las Guardias Locales de Prevención y Convivencia están integradas por "Agentes Locales de Prevención y Convivencia", quienes dependen de sus respectivos municipios o comunas.

Artículo 25.- Formación. Los programas de formación de los agentes de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia son propuestos, controlados y evaluados por el Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, creado en el artículo 10 de esta Ley.

Artículo 26.- Uso de Armas Menos Letales. Los Agentes de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia pueden usar armas menos letales en el ejercicio de sus tareas, conforme criterios de oportunidad y conveniencia fijados por el Ministerio de Seguridad o el organismo que lo reemplace en sus competencias.

La reglamentación de la presente Ley determinará los elementos incluidos en el concepto de "armas menos letales".

Artículo 27.- Protocolos de Actuación. Los protocolos de uso de armas menos letales para los Agentes de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia son establecidos por el Ministerio de Seguridad o el organismo que lo reemplace en sus competencias.

Capítulo Cuarto **Gestión Privada de Seguridad**

Artículo 28.- Formación. Los programas de formación de los integrantes de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada son propuestos, controlados y evaluados por el Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, creado en el artículo 10 de esta Ley.

Artículo 29.- Uso de Armas Menos Letales. El personal de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada que así lo requieran, pueden utilizar armas menos letales en el ejercicio de sus tareas, previa autorización y conforme criterios de oportunidad y conveniencia fijados por el Ministerio de Seguridad o el organismo que lo reemplace en sus competencias.

Artículo 30.- Protocolos de Actuación. Los protocolos de uso de armas menos letales para el personal de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada, son establecidos por el Ministerio de Seguridad o el organismo que lo reemplace en sus competencias.

Artículo 31.- Autorización. La autorización para el uso de armas menos letales debe darse ante el pedido expreso de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada debidamente justificado y de acuerdo con las formalidades que establezca la reglamentación de esta Ley.

Artículo 32.- Requisitos. Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada que soliciten autorización para el uso de armas menos letales deben estar legalmente constituidas y cumplir los demás requisitos que establezca la reglamentación de esta Ley.

Al momento de requerir la autorización, la empresa solicitante debe adjuntar el listado del personal que utilizará las armas menos letales, así como los lugares en los que se prestarán los servicios.

Artículo 33.- Prohibiciones. Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada que no estén expresamente autorizadas por el Ministerio de Seguridad o el organismo que lo reemplace en sus competencias, no pueden usar armas menos letales.

Tampoco puede usar armas menos letales el personal de las empresas autorizadas que no esté debidamente capacitado con certificación vigente.

En ningún caso, los prestadores unipersonales pueden ser autorizados al uso de armas menos letales.

Artículo 34.- Renovación y Revocatoria. La capacitación y certificación para el uso de armas menos letales debe renovarse anualmente, de acuerdo al procedimiento que establezca la reglamentación de la presente Ley.

El Ministerio de Seguridad o el organismo que lo reemplace en sus competencias puede revocar la autorización para el uso de armas menos letales por incumplimiento de las obligaciones dispuestas en la presente Ley y las que por vía reglamentaria se establezcan.

Artículo 35.- Identificación. El personal de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada autorizadas para el uso de armas menos letales debe estar debidamente identificado en la forma que se determine por vía reglamentaria. El incumplimiento de esta obligación es causal de revocatoria de la autorización.

Artículo 36.- Publicidad. El Ministerio de Seguridad, o el organismo que lo reemplace en sus competencias, debe publicar en su página web la nómina de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada autorizadas al uso de armas menos letales y de su personal debidamente capacitado con certificación vigente para ello.

Artículo 37.- Servicios al Sector Público. El Sector Público puede contratar los servicios de empresas prestadoras de seguridad privada para la custodia o vigilancia de edificios o espacios públicos, dependencias oficiales, establecimientos educativos o sanitarios y cualquier otra infraestructura edilicia que sirva para la prestación de servicios públicos provinciales, municipales o comunales.

Los municipios o comunas que adhieran al Programa de Guardias Locales de Prevención y Convivencia pueden contratar empresas prestadoras de seguridad privada autorizadas para la utilización de armas menos letales.

Artículo 38.- Servicios al Sector Privado. Las empresas privadas y las organizaciones de la sociedad civil como clubes, sindicatos o gremios, que realicen eventos públicos, espectáculos deportivos, recreativos o afines, pueden contratar los servicios de seguridad privada de las empresas prestadoras debidamente autorizadas a dichos fines por la presente Ley y la Ley Nº 10571 y sus respectivas reglamentaciones.

El Ministerio de Seguridad, o el organismo que lo reemplace en sus competencias, determinan la cantidad de personal que se necesita contratar para que el evento o espectáculo sea autorizado, según la reglamentación de esta Ley.

Capítulo Quinto

Disposiciones Complementarias

Artículo 39.- Defensoría de las Fuerzas de Seguridad. La promoción y protección de los derechos del personal de las Fuerzas Provinciales de Seguridad, amparados en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, la Constitución de la Provincia de Córdoba y las leyes y reglamentos vigentes, constituye una función primordial de la Defensoría de las Fuerzas de Seguridad, creada por Ley Nº 10732.

Artículo 40.- Contratación de Agentes. El Poder Ejecutivo Provincial puede disponer la contratación de agentes en carácter de personal civil, o bajo la modalidad de contrato de servicios o servicios a cargo de terceros, o la forma contractual que al efecto se establezca para la realización de actividades y tareas en dependencias de las Fuerzas Provinciales de Seguridad, del Ministerio Público Fiscal o del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, de acuerdo con las características de prestación, y demás términos y condiciones que se establezcan por vía reglamentaria.

Artículo 41.- Cámaras de Video Vigilancia. Los prestadores de servicios de seguridad privada y los establecimientos que desarrollen actividades económicas que dispongan de cámaras de video vigilancia, cámaras de seguridad u otro medio técnico o sistema similar, instalados en espacios privados de acceso público, o en establecimientos privados que capten imágenes y/o sonidos del espacio o lugares públicos, deben poner a disposición de la autoridad el contenido almacenado en sus sistemas tecnológicos, en auxilio de los utilizados por las Fuerzas Provinciales de Seguridad, en un todo de acuerdo a lo que se disponga por vía reglamentaria.

Artículo 42.- Modifícase el artículo 5º de la Ley Nº 9400 -de Adhesión a la Ley Nacional Nº 26216-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 5º.- Incentivos. Toda persona que realice la entrega voluntaria de armas de fuego y municiones, se hará acreedora del incentivo que establezca la Autoridad de Aplicación por vía reglamentaria, además del previsto en la Ley Nacional Nº 26216.”

Artículo 43.- Modifícase el inciso b) del artículo 26 de la Ley Nº 9235 -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“b) Subjefaturas;”

Artículo 44.- Modifícase el artículo 33 de la Ley Nº 9235 -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“**Artículo 33.-** PARA el cumplimiento de sus funciones, el Jefe de Policía de la Provincia de Córdoba cuenta con la cooperación de los Subjefes de Policía, es asesorado por el Estado Mayor Policial y, en los aspectos técnicos-jurídicos, por la Dirección de Asesoría Letrada.”

Artículo 45.- Modifícase el artículo 34 de la Ley Nº 9235 -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“**Artículo 34.-** LOS cargos de Subjefes de Policía son ejercidos por un Comisario General del cuerpo de seguridad en actividad, designados por el poder ejecutivo.

Tienen su asiento en la ciudad de Córdoba y son sus funciones:

a) Colaborar con el jefe de policía y reemplazarlo en caso de ausencia o impedimento transitorio;

b) Ejercer la jefatura del estado mayor policial con las facultades y alcances establecidos en la presente ley;

c) Participar en la fiscalización e intervenir en el funcionamiento operativo y administrativo de las dependencias que les están subordinadas, y

d) Cooperar y proponer las modificaciones que estimen convenientes para la mejora o actualización de los servicios.”

Artículo 46.- Modifícase el artículo 41 de la Ley Nº 9235 -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“**Artículo 41.-** LAS Direcciones Generales dependen de los Subjefes de Policía y están a cargo de un Comisario General en actividad designado por el Poder Ejecutivo.

El Jefe de Policía puede proponer un orden de mérito no vinculante.

La Dirección General de Control de Conducta Policial depende del Jefe de Policía, no integra el Estado Mayor Policial y está a cargo de un Oficial Superior designado por el Poder Ejecutivo.

La Dirección General de Control de Conducta Policial tiene plena autonomía técnica de gestión en materia de prevención e investigación en el ámbito de su competencia.

El titular de la Dirección General de Control de Conducta Policial debe concurrir al menos una vez al año ante las comisiones parlamentarias correspondientes de la Legislatura Provincial a fin de brindar un informe detallado de gestión.”

Artículo 47.- Modifícase el artículo 42 de la Ley Nº 9235 -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“**Artículo 42.-** LA Policía de la Provincia de Córdoba contará con las siguientes Direcciones Generales:

a) Dirección General de Seguridad Capital;

b) Dirección General de Investigaciones Criminales;

c) Dirección General Departamentales Norte;

d) Dirección General Departamentales Sur;

e) Dirección General de Recursos Humanos;

f) Dirección General de Policía Caminera;

g) Dirección General de Control de Conducta Policial;

h) Dirección General de Gestión Administrativa;

i) Dirección General de Tecnología de Información y Análisis Estadísticos;

j) Dirección General de Patrulla Rural;

k) Dirección General de Policía Territorial y de Proximidad, y

l) Toda otra Dirección General que sea necesaria para el cumplimiento de su misión en el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública en el territorio de la Provincia de Córdoba.”

Artículo 48.- Modifícase el artículo 56 de la Ley Nº 9235 -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“**Artículo 56.-** LA estructura orgánica del Servicio Penitenciario de Córdoba está compuesta según el orden de prelación que se determina en los siguientes niveles:

a) Jefatura;

b) Subjefaturas;

c) Direcciones Generales;

d) Subdirecciones Generales;

e) Direcciones, Unidades Especiales y Direcciones de Establecimientos Penitenciarios;

f) Subdirecciones;

g) Departamentos;

h) Divisiones, e

i) Secciones.

La Jefatura y las Subjefaturas del Servicio Penitenciario de Córdoba, tendrán sueldos, bonificaciones y compensaciones iguales a las que perciban la Jefatura y las Subjefaturas de la Policía de la Provincia de Córdoba.”

Artículo 49.- Modifícase la denominación del Capítulo Tercero, del Título II de la Parte III de la Ley Nº 9235 -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:

**“Capítulo Tercero
Subjefaturas”**

Artículo 50.- Modifícase el artículo 61 de la Ley Nº 9235 -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 61.- LAS Subjefaturas de la Institución son ejercidas por funcionarios designados por el Poder Ejecutivo. Las designaciones recaerán en un Oficial Superior del grado máximo del Servicio Penitenciario de Córdoba, en actividad.”

Artículo 51.- Modifícase el artículo 62 de la Ley Nº 9235 -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 62.- LOS Subjefes del Servicio Penitenciario de Córdoba, como inmediatos colaboradores del Jefe de la Institución, deben cumplir con todas las funciones que éste le encomiende, y reemplazarlo, con las atribuciones que le son propias, en caso de ausencia, impedimento transitorio o vacancia.”

Artículo 52.- Modifícase el artículo 63 de la Ley Nº 9235 -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 63.- COMPETE asimismo a los Subjefes del Servicio Penitenciario de Córdoba:

- a) Ejercer el comando del Consejo Superior Penitenciario;
- b) Participar en la fiscalización e intervenir en el funcionamiento técnico, operativo y administrativo de las dependencias de la Institución, propiciando en su caso mejoras o actualizaciones que resulten convenientes, y
- c) Verificar que el tratamiento brindado a los internos se ajuste a las normas y políticas criminológicas y penitenciarias vigentes.”

Artículo 53.- Modifícase el artículo 64 de la Ley Nº 9235 -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 64.- EN caso de ausencias, enfermedad o vacancias, los Subjefes serán reemplazados interinamente por el Oficial Superior más antiguo en actividad.”

Artículo 54.- Modifícase el artículo 65 de la Ley Nº 9235 -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 65.- LOS Subjefes, con el asesoramiento del Director General de Seguridad, proponen al Jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba los destinos y funciones en su caso, del personal de la Institución.”

Artículo 55.- Modifícase el artículo 66 de la Ley Nº 9235 -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 66.- EL Consejo Superior Penitenciario es el organismo que proporciona asesoramiento y asistencia a la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, a fin de lograr un mejor servicio y el mayor aprovechamiento de sus medios. Está comandado por los Subjefes del Servicio Penitenciario de Córdoba e integrado por los titulares de las Direcciones Generales. En caso de ausencia de los Subjefes, son reemplazados por el Oficial de mayor grado y antigüedad de entre sus miembros.”

Artículo 56.- Modifícase el artículo 68 de la Ley Nº 9235 -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 68.- PARA el tratamiento de cuestiones cuya especificidad o importancia tornen necesario el concurso de alguno de los restantes titulares de Direcciones y/o del cuadro de Oficiales Superiores, la Jefatura y/o las Subjefaturas del Servicio Penitenciario de Córdoba, podrán resolver la convocatoria del Consejo Superior Penitenciario, con indicación de los asuntos a considerar y de los miembros a incorporar, los que en tal caso actuarán con iguales facultades que los miembros natos del Consejo Superior Penitenciario.”

Artículo 57.- Modifícase el artículo 70 de la Ley Nº 9235 -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 70.- EL Servicio Penitenciario de Córdoba se integra por Direcciones Generales que estarán a cargo de Oficiales Superiores. Las Direcciones Generales son las siguientes:

- a) Dirección General de Técnica Penitenciaria y Criminológica;
- b) Dirección General de Seguridad;
- c) Dirección General de Tratamiento Penitenciario y Obras;
- d) Dirección General de Formación Profesional;
- e) Dirección General de Gestión Administrativa, y
- f) Toda otra Dirección General que sea necesaria para el cumplimiento de su misión de guarda y custodia de detenidos, procesados y condenados en los establecimientos carcelarios.”

Artículo 58.- Deróganse los artículos 1º al 11 de la Parte I de la Ley Nº 9235 -Ley de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, sus modificatorias y toda legislación que se oponga a la presente Ley.

Artículo 59.- Incorpórase como artículo 3º bis de la Ley Nº 4982, el siguiente:

“Artículo 3º bis.- Por los servicios adicionales de vigilancia y seguridad que preste la Policía de la Provincia de Córdoba, los requirentes deberán abonar, además de la tasa fijada en la presente Ley y su reglamentación, una tasa de hasta el treinta por ciento (30%) de la misma, destinada a solventar los gastos administrativos de logística y operacionales que demande la

prestación de este tipo de servicios, como aquellos otros que establezca el Ministerio de Seguridad o la autoridad que lo sustituya en sus competencias.

Los montos percibidos por este concepto ingresarán a una cuenta especial en el Banco de la Provincia de Córdoba S.A., diferenciada de la establecida por la Ley Nº 7386, cuya administración estará a cargo de la citada cartera ministerial.”

Artículo 60.- Modifícase el artículo 20 de la Ley Nº 10571 -Régimen de los Prestadores de Servicios de Seguridad Privada-, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 20.- Prohibición de uso de armas. Queda expresamente prohibido para los prestadores de los servicios enumerados en la presente Ley el uso de cualquier tipo de armas, con las excepciones previstas en la Ley de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana de la Provincia de Córdoba Nº Las habilitaciones que en virtud de esta norma conceda la Autoridad de Aplicación a los prestadores de servicios de seguridad privada serán otorgadas con la mención expresa ‘Sin autorización para el uso de armas’ o ‘Con autorización para el uso de armas menos letales’.”

Artículo 61.- Incorpórase como artículo 32 *bis* a la Ley Nº 10571 -Régimen de los Prestadores de Servicios de Seguridad Privada-, el siguiente:

“Artículo 32 bis.- Las disposiciones de los artículos 30, 31 y 32 de la presente Ley se ejecutarán de conformidad a las previsiones de la Ley de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana de la Provincia de Córdoba Nº”.

Artículo 62.- Incorpórase como inciso h) del artículo 3º de la Ley Nº 9475 - Creación del Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (CoPEC)- el siguiente:

“h) Desarrollar a través del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, creado por la Ley de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana de la Provincia de Córdoba Nº, las tareas de planificación, control, evaluación y capacitación establecidas en dicha norma, como así también el diseño y la gestión del Observatorio de Seguridad y Convivencia.”

Artículo 63.- Incorpórase como inciso e) del artículo 4º de la Ley Nº 9475 - Creación del Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (CoPEC)- el siguiente:

“e) El Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, creado por la Ley de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana de la Provincia de Córdoba Nº”.

Artículo 64.- Modifícase el artículo 5º de la Ley Nº 9475 - Creación del Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (CoPEC)-, el que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 5º.- LA designación del Presidente del Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (CoPEC), de los integrantes del Comité Ejecutivo y de los miembros del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia creado por Ley Nº, es facultad del Poder Ejecutivo Provincial y contemplará la consulta a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, empresario, académico, sindical, social y político, a través de un mecanismo de recepción de opiniones y observaciones, expresas y fundadas, que ciudadanos y entidades deseen manifestar al respecto.”

Artículo 65.- Incorpórase como apartado 5) del artículo 7º de la Ley Nº 9475 - Creación del Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (CoPEC)- el siguiente:

“5) La organización, estructuras y demás aspectos de funcionamiento del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia -cuyas funciones determina la Ley de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana de la Provincia de Córdoba Nº, serán establecidos por vía reglamentaria.”.

TÍTULO II EXÁMEN TOXICOLÓGICO Capítulo Único Certificado. Incumplimiento

Artículo 66.- Certificado Médico. Las personas que desempeñen funciones por elección popular, Gobernador, Vicegobernador, Legisladores y Tribunales de Cuenta, los Ministros, Secretarios, Directores y Subdirectores, Asesores y toda persona que, por disposición legal o reglamentaria, ejerza funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados, están obligados a presentar anualmente ante el Ministerio de Salud, autoridad de aplicación del presente Título, certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, guardando debida reserva todo aquél que tenga acceso al contenido de los mismos. Los resultados del examen (positivo/negativo) serán considerados “datos sensibles” en los términos de la Ley Nacional Nº 25326 la que será aplicable en todo cuanto sea compatible con la presente norma. Toda persona que tenga acceso al contenido de los mismos, tiene la obligación de guardar reserva de su contenido.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará el procedimiento que disponga la reglamentación a cargo del Ministerio de Salud y, según corresponda, los mecanismos para el abordaje integral a personas con consumo problemático de drogas psicotrópicas ilegales, implementados por el área competente del Poder Ejecutivo Provincial, a fin de brindar contención y asistencia.

TÍTULO III
FISCALÍAS DE INSTRUCCIÓN - FISCALÍAS MÓVILES - JUZGADOS DE CONTROL
Capítulo Único
Creación. Facultades

Artículo 67.- Créanse en la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, once Fiscalías de Instrucción que serán designadas como de Cuadragésimo Primera, Cuadragésimo Segunda, Cuadragésimo Tercera, Cuadragésimo Cuarta, Cuadragésimo Quinta, Cuadragésimo Sexta, Cuadragésimo Séptima, Cuadragésimo Octava, Cuadragésimo Novena, Quincuagésima Nominación y Quincuagésima Primera Nominación, respectivamente.

Artículo 68.- Créanse una Fiscalía de Instrucción en la Primera Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Carlos Paz, Departamento Punilla, que será designada como Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple del Cuarto Turno; dos Fiscalías de Instrucción en la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Río Cuarto, Departamento Río Cuarto, que serán designadas como Fiscalías de Instrucción de Competencia Múltiple del Cuarto y Quinto Turno, respectivamente; y una Fiscalía de Instrucción en la Séptima Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Cosquín, Departamento Punilla, que será designada como Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple del Segundo Turno.

Artículo 69.- Créanse en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, tres Juzgados de Control y Faltas que se denominarán Juzgados de Control y Faltas de Décimo Segunda, Décimo Tercera y Décimo Cuarta Nominación, respectivamente.

Artículo 70.- Créase una Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico en cada una de las sedes que se corresponden a las siguientes ciudades:

- a) Córdoba;
- b) Río Cuarto;
- c) Villa Carlos Paz;
- d) Cruz del Eje;
- e) Marcos Juárez;
- f) Bell Ville, y
- g) Villa Dolores.

Artículo 71.- Créase en la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, un Juzgado de Control cuya numeración será establecida por el Ministerio Público Fiscal y que tendrá asignada -además de las competencias que por ley le corresponden- la de Lucha contra el Narcotráfico en los términos del artículo 34 de la Ley Nacional Nº 23737, de conformidad a la adhesión dispuesta por Ley Nº 10067.

Artículo 72.- Establécese que las Fiscalías de Instrucción Móviles de Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia de Córdoba, creadas en el artículo 70 de la presente Ley tienen jurisdicción en el ámbito territorial y en la modalidad que en cada caso establezca el Ministerio Público Fiscal.

Artículo 73.- Facúltase al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba, conforme a sus funciones y atribuciones, a dictar las normas que aseguren el cumplimiento del presente Título y a adoptar las medidas adecuadas que permitan la eficaz operatividad funcional y organizacional de las Fiscalías de Instrucción, Fiscalías Móviles y Juzgados de Control creados en esta norma. La estructura, ámbito de actuación y demás aspectos de organización de las Fiscalías creadas en la presente Ley serán establecidas por la Fiscalía General de la Provincia y podrá hacerlo bajo el formato de Unidad Fiscal.

Artículo 74.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a realizar los ajustes presupuestarios necesarios a los efectos del cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 75.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Leg. Fernández, Torres Limia, Siciliano, Alesandri, Bruno, Spaccesi

DESPACHO DE COMISIÓN EN MINORÍA

Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones 20 de Diciembre de 2023

A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:

Los Legisladores Matías Pablo Gvozdenovich, Walter Norberto Nostrala y Gregorio Hernández Maqueda al dictaminar acerca del **Proyecto de Ley Nº 38407/L/23**, iniciado por el Poder Ejecutivo, estableciendo la Ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, modificando las Leyes Nº 9400, Adhesión provincial al Programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego Nº 10571, Régimen de los Prestadores de Servicio de Seguridad Privada; Nº 9475, creación del COPEC y Nº 9235, Policía de Córdoba, **COMPATIBILIZADO con el Proyecto de Ley Nº 38413/L/23**, iniciado por el Poder Ejecutivo, creando 11 Fiscalías de Instrucción y 3 Juzgados de Control en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba; y 4 Fiscalías de Instrucción en las ciudades de Villa Carlos Paz, Río Cuarto y Cosquín, y con el **Proyecto de Ley Nº 38415/L/23**, iniciado por el Poder Ejecutivo, creando Fiscalías Móviles de Instrucción de Lucha contra el Narcotráfico en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Villa Carlos Paz, Cruz del Eje, Marcos Juárez, Bell Ville, y Villa Dolores; así como un Juzgado de Control con competencia en la Lucha contra el Narcotráfico en la Primera

Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba, **ACONSEJAN**, por las razones que en el Plenario darán, **RECHAZAR** los proyectos en cuestión.

Hernández Maqueda, Nostrala, Gvozdenovich

DESPACHO DE COMISIÓN EN MINORÍA

Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones 20 de Diciembre de 2023

A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:

El Legislador Rodrigo María Agrelo, al dictaminar acerca del **Proyecto de Ley N° 38407/L/23**, iniciado por el Poder Ejecutivo, estableciendo la Ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, modificando las Leyes N° 9400, Adhesión provincial al Programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego N° 10571, Régimen de los Prestadores de Servicio de Seguridad Privada; N° 9475, creación del COPEC y N° 9235, Policía de Córdoba, **COMPATIBILIZADO** con el **Proyecto de Ley N° 38413/L/23**, iniciado por el Poder Ejecutivo, creando 11 Fiscalías de Instrucción y 3 Juzgados de Control en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba; y 4 Fiscalías de Instrucción en las ciudades de Villa Carlos Paz, Río Cuarto y Cosquín, y con el **Proyecto de Ley N° 38415/L/23**, iniciado por el Poder Ejecutivo, creando Fiscalías Móviles de Instrucción de Lucha contra el Narcotráfico en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Villa Carlos Paz, Cruz del Eje, Marcos Juárez, Bell Ville, y Villa Dolores; así como un Juzgado de Control con competencia en la Lucha contra el Narcotráfico en la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba, **ACONSEJA**, por las razones que en el Plenario dará, **PRESTARLE APROBACIÓN** de la siguiente manera:

**LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA**

**TÍTULO I
SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA
Capítulo Primero**

Sistema Integrado de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana

Artículo 1º.- Composición. El Sistema Integrado de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana está compuesto por:

- a) El Poder Ejecutivo Provincial, a través de los ministerios, secretarías y direcciones competentes;
- b) El Poder Legislativo de la provincia de Córdoba;
- c) El Poder Judicial de la provincia de Córdoba;
- d) El Ministerio Público Fiscal;
- e) Las Fuerzas Provinciales de Seguridad:
 - 1) Policía de la provincia de Córdoba;
 - 2) Servicio Penitenciario de Córdoba, y
 - 3) Fuerza Policial Antinarcotráfico.
- f) Las Guardias Locales de Prevención y Convivencia Ciudadana (GLP);
- g) Los Consejos Departamentales, Municipales y Barriales de Prevención y Convivencia creados por la Ley N° 9235;

Artículo 2º.- Responsabilidad Estatal. El Estado provincial es el único responsable de las políticas públicas de seguridad pública y seguridad ciudadana.

**Capítulo Segundo
Guardias de prevención municipales y comunales**

Artículo 3º.- Adhesión. En el marco de las autonomías establecidas por la Constitución de la Provincia de Córdoba, los municipios o comunas pueden adherir a la presente Ley y, sobre esa base, constituir sus respectivas Guardias Locales de Prevención y Convivencia.

Artículo 4º.- Convenios de adhesión. Los municipios que adhieran a la norma y desarrollen tareas preventivas de seguridad deberán convenir con la provincia el alcance, modalidad y ejecución de las actividades a desarrollar por sus guardias locales de prevención y convivencia.

Artículo 5º.- Igualdad de trato. La provincia al suscribir cada convenio con los municipios deberá respetar el principio de no discriminación e igualdad de trato con los mismos.

Artículo 6º.- Indelegabilidad del poder de policía. La provincia no podrá delegar en los municipios las facultades del poder de policía que le ha otorgado en forma exclusiva la Constitución de la Provincia.

Artículo 7º.- Prohibición de uso de armas. Las Guardias Locales de Prevención y Convivencia Ciudadana (GLP) tienen prohibido el uso de armas de cualquier tipo o naturaleza.

**Capítulo Tercero
Disposiciones complementarias**

Artículo 8º.- Defensoría de las Fuerzas de Seguridad. La promoción y protección de los derechos del personal de las Fuerzas Provinciales de Seguridad, amparados en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, la Constitución de la Provincia de Córdoba y las leyes y reglamentos vigentes, constituye una función primordial de la Defensoría de las Fuerzas de Seguridad, creada por Ley Nº 10732. La Defensoría de las Fuerzas de Seguridad estará integrada por un defensor titular designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.

Artículo 9º.- Derógase el 2º párrafo del artículo 14 quater de la Ley 10.732.

Artículo 10º.- Cámaras de Video Vigilancia. Quienes dispongan de cámaras de video vigilancia, cámaras de seguridad u otro medio técnico o sistema similar, instalados en espacios privados de acceso público, o en establecimientos privados que capten imágenes y/o sonidos del espacio o lugares públicos, deben poner a disposición de la autoridad judicial competente, previa orden de la misma, el contenido almacenado en sus sistemas tecnológicos.

Artículo 11º.- Modifícase el artículo 5º de la Ley Nº 9400 -de Adhesión a la Ley Nacional Nº 26216-, el que queda redactado de la siguiente manera:

"Artículo 5º.- Incentivos. *TODA persona que realice la entrega voluntaria de armas de fuego y municiones, se hará acreedora del incentivo que establezca la Autoridad de Aplicación por vía reglamentaria, además del previsto en la Ley Nacional Nº 26216."*

Artículo 12º.- Adhiérase la Provincia de Córdoba a la ley Nacional 25.938 – REGISTRO NACIONAL DE ARMAS DE FUEGO Y MATERIALES CONTROLADOS, SECUESTRADOS O INCAUTADOS. El Ministerio de Seguridad, o el órgano que en el futuro lo reemplace, reglamentará los alcances de la adhesión.

TÍTULO II EXÁMEN TOXICOLÓGICO

Capítulo Único Certificado. Incumplimiento

Artículo 13º.- Certificado Médico. Las personas que desempeñen funciones por elección popular, Gobernador, Vicegobernador, Legisladores y Tribunales de Cuenta, los Ministros, Secretarios, Directores y Subdirectores, Asesores y toda persona que, por disposición legal o reglamentaria, ejerza funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados, están obligados a presentar ante la autoridad competente dentro del plazo de treinta (30) días de asumir en su cargo o de entrada en vigencia de la norma, certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, guardando debida reserva todo aquél que tenga acceso al contenido de los mismos.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará el procedimiento que disponga la reglamentación y, según corresponda, los mecanismos para el abordaje integral a personas con consumo problemático de drogas psicotrópicas ilegales, implementados por el área competente del Poder Ejecutivo Provincial, a fin de brindar contención y asistencia.

TÍTULO III FISCALÍAS DE INSTRUCCIÓN - FISCALÍAS MÓVILES – JUZGADOS DE CONTROL

Capítulo Único Creación. Facultades

Artículo 14º.- Créanse en la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, once Fiscalías de Instrucción que serán designadas como de Cuadragésimo Primera, Cuadragésimo Segunda, Cuadragésimo Tercera, Cuadragésimo Cuarta, Cuadragésimo Quinta, Cuadragésimo Sexta, Cuadragésimo Séptima, Cuadragésimo Octava, Cuadragésimo Novena, Quincuagésima Nominación y Quincuagésima Primera Nominación, respectivamente.

Artículo 15º.- Créanse una Judicial, con sede en la ciudad de Carlos Paz, Departamento Punilla, que será designada como Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple del Cuarto Turno; dos Fiscalías de Instrucción en la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Río Cuarto, Departamento Río Cuarto, que serán designadas como Fiscalías de Instrucción de Competencia Múltiple del Cuarto y Quinto Turno, respectivamente; y una Fiscalía de Instrucción en la Séptima Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Cosquín, Departamento Punilla, que será designada como Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple del Segundo Turno.

Artículo 16º.- Créanse en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, tres Juzgados de Control y Faltas que se denominarán Juzgados de Control y Faltas de Décimo Segunda, Décimo Tercera y Décimo Cuarta Nominación, respectivamente.

Artículo 17º.- Créase una Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico en cada una de las sedes que se corresponden a las siguientes ciudades:

- a) Córdoba;
- b) Río Cuarto;
- c) Villa Carlos Paz;

- d) Cruz del Eje;
- e) Marcos Juárez;
- f) Bell Ville, y
- g) Villa Dolores.

Artículo 18º.- Créase en la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, un Juzgado de Control cuya numeración será establecida por el Ministerio Público Fiscal y que tendrá asignada -además de las competencias que por ley le corresponden- la de Lucha contra el Narcotráfico en los términos del artículo 34 de la Ley Nacional Nº 23737, de conformidad a la adhesión dispuesta por Ley Nº 10067.

Artículo 19º.- Establécense que las Fiscalías de Instrucción Móviles de Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia de Córdoba, creadas en el artículo 54 de la presente Ley tienen jurisdicción en el ámbito territorial y en la modalidad que en cada caso establezca el Ministerio Público Fiscal.

Artículo 20º.- Facúltase al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba deberán en uso de sus atribuciones dictar las normas que aseguren el cumplimiento del presente Título y a adoptar las medidas adecuadas que permitan la eficaz operatividad funcional y organizacional de las Fiscalías de Instrucción, Fiscalías Móviles y Juzgados de Control creados en esta norma.

Artículo 21º.- Los juzgados y fiscalías creados en el presente título, a excepción de aquellos que tengan competencia en Lucha contra el Narcotráfico, tendrán competencia en los procesos donde se investiguen delitos contra la Administración Pública y demás estipulados en el Art. 54 de la Ley 8835.

Artículo 22º.- La operatividad de las fiscalías y juzgados creados en la presente ley queda supeditada a la previa afectación presupuestaria de los recursos necesarios a tal fin.

Artículo 23º.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Rodrigo Agrelo

DESPACHOS DE MINORÍA DE LA COMISIÓN AD HOC

Córdoba, 19 de diciembre de 2023

DESPACHO DE MINORÍA

A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:

El expediente Nº 38407/L/23, remitido por el Poder Ejecutivo afirma impulsar el supuesto objetivo de mejorar la calidad y capacidad del Estado provincial en la persecución de las actividades delictivas y otorgarle a la ciudadanía en general un marco de mayor seguridad pública. Con el articulado propuesto y con las reformas impulsadas, este objetivo está lejos de ser satisfecho.

Es evidente que en el último tiempo, los índices delictivos se han incrementado considerablemente tanto a nivel nacional como a nivel provincial. El Observatorio del Delito, dependiente del Ministerio de Seguridad, reconoce que en 2022 se denunciaron 89.139 robos y hurtos en toda la provincia de Córdoba, mientras que en 2021 se denunciaron 77.268 hechos, evidenciando un incremento de un año a otro del 15%^[1].

En este contexto, el proyecto en cuestión, representa una decisión de ruptura con la Ley Nº 9.235, sancionada durante la gobernación de José Manuel De la Sota en el año 2005 y, por lo tanto, con todas las decisiones de política implementadas hasta hoy por los gobiernos de Hacemos por Córdoba.

La normativa vigente, que se intenta derogar parcialmente con este proyecto, especifica en su artículo 2º que es el Estado el responsable único de la seguridad en la provincia, a saber: "La seguridad pública está a cargo exclusivo del Estado Provincial y tiene por objeto preservar la integridad y derechos de las personas, la libertad, el orden y la paz pública en el marco del Estado de derecho".

Con fundamento histórico, conservador o liberal, la función de ofrecer seguridad siempre ha quedado circunscrita de manera total en los brazos del Estado, no pudiendo renunciar a la provisión de dicho servicio por obligación contractual originaria, considerando que el uso legítimo de la violencia es la contracara del derecho a la seguridad de los ciudadanos de un mismo suelo.

A la luz de este proyecto, queda no solamente expuesta la intención del Gobernador de refundar la política de seguridad de Córdoba, sino la creación de un nuevo paradigma que desea abandonar una función intrínseca al aparato estatal, hecho pasible de ser constitucionalmente cuestionado.

La modernización de la normativa vigente puede bien encauzarse en procesos de gobernanza, no por ello deslindando responsabilidades de manera directa de parte del Estado provincial. Un ejemplo concreto lo establece la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, en el año 2016, reformó su normativa en materia de seguridad ciudadana y modernizó los procesos y alcances mediante la Ley Nº 5.688, no por eso brindándole a terceros las funciones que le competen al Estado o integrando al sector privado al sistema integral de seguridad.

La solución a los múltiples hechos delictivos acaecidos durante los últimos años o a los excesos institucionales de la mano de las mismas fuerzas de seguridad no se encontrarán si no es por medio de reformas que ataquen la causa central de los problemas: la corrupción dentro

de las fuerzas, la falta de capacitación y preparación, la impunidad del poder político, la protección de las víctimas y de los uniformados responsables, entre otras cuestiones. En ese sentido, la deuda institucional de Córdoba nuevamente repercute negativamente. Proyectos como Ficha Limpia, Derogación del Fuero Anticorrupción, Regulación del Hábeas Corpus, Extinción de Dominio, Protección de Víctimas de Delitos y de Denunciantes de Delitos de Corrupción constituyen sólo algunas de las principales deudas que promoverían una sociedad con mejor seguridad jurídica, con instituciones más fuertes, con menor delito y con más respeto por la ley.

Estos elementos faltantes y la iniciativa que nos convoca, dan cuenta de la necesidad del gobierno de Llarora de mantener un statu quo que es funcional a un modo de ejercicio del poder, que pacta y se mantiene impune. En ese sentido, toda política de seguridad, afirma Juan Federico (2013)^[2], debe procurar romper con la "lógica de pacto doble", entre la dirigencia política, las fuerzas policiales y la delincuencia: "...la política se desentendía de la lucha contra el delito, delegaba todo en la Policía con la condición de que no trajera mayores problemas; la Policía, "negociaba" con los delincuentes para que el crimen no generara caos social" (p. 52).

La inclusión del sector privado y de los municipios y comunas en una supuesta lógica de gobernanza hace las veces, entonces, de una privatización parcial de la seguridad en la provincia y de una descentralización irresponsable bajo la excusa de las autonomías municipales. Todo esto, con el objetivo, como se dijo, de licuar cualquier tipo de responsabilidad del Estado provincial, mediante un claro abandono por parte del Estado de su incumbencia directa y excluyente en la materia.

Se dejará a los cordobeses a merced de empresas privadas cuya motivación no necesariamente estará en ofrecer un servicio de seguridad de calidad y equitativo, provocando una profundización de la desigualdad ya existente en la sociedad de Córdoba en lo que a respuesta y presencia estatal respecta. La cuasi municipalización, por su parte, es una prueba más del planteo iniciado anteriormente: no existirá mejor seguridad pública ni mayor federalismo por el hecho de crear guardias locales de prevención, sino un deslinde de responsabilidades del Estado provincial hacia menores niveles de gobierno. Muchos municipios, es un hecho, no cuentan con los recursos administrativos y humanos para adherir a la ley y construir una fuerza local, mucho menos para capacitar debidamente.

En esa línea, los gobiernos locales verán afectadas sus finanzas, debiendo afrontar mayores cargas y, por ende, debiendo incrementar su recaudación. En paralelo, los actores privados verán jerarquizada su labor, por las mayores atribuciones de las que gozarán, lo que se verá reflejado en incrementos de costos, de precio e incluso en mayor poder de negociación de los gremios implicados.

Si bien el proyecto avanza en cuestiones cuyo debate es central poder impulsar, como el desarme de la población o la certificación de no consumo de drogas por parte de funcionarios, es importante un abordaje más completo de estas iniciativas. Respecto al primer punto, es difícil de alcanzar en tanto la ciudadanía siente miedo y desprotección. En cuanto al segundo, debemos también avanzar hacia un Programa de Concientización mucho más integral, como el presentado a nivel nacional por la entonces diputada Leonor Martínez Villada, que impulsa una fuerte campaña audiovisual, sonora y gráfica para extender y difundir información sobre los efectos negativos del consumo de drogas en la población.

Por otra parte, la obligación de poner a disposición las cámaras de video vigilancia de privados debería ser una cuestión facultativa, tal y como lo recomendaron los legisladores Austin y Agrelo en su red social X días atrás. La obligatoriedad de "ofrecer el contenido almacenado en los sistemas tecnológicos" es una determinación que avanza sobre la propiedad privada y la intimidad.

Finalmente, pero no menos preocupante, el artículo 23 de este proyecto incurre en un gravísimo error conceptual: que las armas sean catalogadas como menos letales no implica que no lo sean. De la misma manera, que no sean armas de fuego no es condición para afirmar que agentes con menor preparación puedan hacer uso de ellas sin arriesgar a la población en general. Tampoco puede asegurarse la ausencia de abusos o de delitos contra los derechos humanos de los cordobeses. Lejos de presentarse como una medida que invite a la paz, el proyecto multiplica las atribuciones de terceros y las oportunidades para profundizar la degradación social.

Tal y como afirmó el Dr. Javier Octavio Sosa ante la Comisión el pasado lunes, una política de seguridad requiere de una visión más profunda y global. La delincuencia actualmente se encuentra articulada y organizada, frente a un Estado cada vez más compartimentado, desarticulado y, por lo tanto, sin respuesta efectiva frente al delito.

Por las razones expresadas anteriormente y las que serán dadas en el plenario, la COMISIÓN AD HOC, al dictaminar acerca del expediente N° 38407/L/23, iniciado por el Poder Ejecutivo, estableciendo la Ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, ACONSEJA RECHAZAR el proyecto en cuestión.

Gregorio Hernández Maqueda

Legislador provincial bloque Coalición Cívica ARI

DESPACHO DE COMISIÓN

Secretaría de Comisiones, 19 de diciembre de 2023

A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:

La Comisión Ad Hoc, al dictaminar acerca del **Proyecto de Ley N° 38407/L/23**, iniciado por el PODER EJECUTIVO PROVINCIAL **ACONSEJAN**, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, **PRESTARLE APROBACIÓN** de la siguiente manera:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

**LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA**

TÍTULO I

SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA

Capítulo Primero

Sistema Integrado de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana

Artículo 1º.- Composición. El Sistema Integrado de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana está compuesto por:

a) El Poder Ejecutivo Provincial, a través de los ministerios, secretarías y direcciones competentes;

b) El Poder Legislativo de la provincia de Córdoba;

c) El Poder Judicial de la provincia de Córdoba;

d) El Ministerio Público Fiscal;

e) Las Fuerzas Provinciales de Seguridad:

1) Policía de la provincia de Córdoba;

2) Servicio Penitenciario de Córdoba, y

3) Fuerza Policial Antinarcotráfico.

f) Las Guardias Locales de Prevención y Convivencia Ciudadana (GLP);

g) Los Consejos Departamentales, Municipales y Barriales de Prevención y Convivencia creados por la Ley N° 9235;

Artículo 2º.- Responsabilidad Estatal. El Estado provincial es el único responsable de las políticas públicas de seguridad pública y seguridad ciudadana.

Capítulo Segundo

Guardias de prevención municipales y comunales

Artículo 3º.- Adhesión. En el marco de las autonomías establecidas por la Constitución de la Provincia de Córdoba, los municipios o comunas pueden adherir a la presente Ley y, sobre esa base, constituir sus respectivas Guardias Locales de Prevención y Convivencia.

Artículo 4º.- Convenios de adhesión. Los municipios que adhieran a la norma y desarrollen tareas preventivas de seguridad deberán convenir con la provincia el alcance, modalidad y ejecución de las actividades a desarrollar por sus guardias locales de prevención y convivencia.

Artículo 5º.- Igualdad de trato. La provincia al suscribir cada convenio con los municipios deberá respetar el principio de no discriminación e igualdad de trato con los mismos.

Artículo 6º.- Indelegabilidad del poder de policía. La provincia no podrá delegar en los municipios las facultades del poder de policía que le ha otorgado en forma exclusiva la Constitución de la Provincia.

Artículo 7º.- Prohibición de uso de armas. Las Guardias Locales de Prevención y Convivencia Ciudadana (GLP) tienen prohibido el uso de armas de cualquier tipo o naturaleza.

Capítulo Tercero

Disposiciones complementarias

Artículo 8º.- Defensoría de las Fuerzas de Seguridad. La promoción y protección de los derechos del personal de las Fuerzas Provinciales de Seguridad, amparados en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, la Constitución de la Provincia de Córdoba y las leyes y reglamentos vigentes, constituye una función primordial de la Defensoría de las Fuerzas de Seguridad, creada por Ley N° 10732. La Defensoría de las Fuerzas de Seguridad estará integrada por un defensor titular designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.

Artículo 9º.- Derógase el 2º párrafo del artículo 14 quater de la Ley 10.732.

Artículo 10º.- Cámaras de Video Vigilancia. Quienes dispongan de cámaras de video vigilancia, cámaras de seguridad u otro medio técnico o sistema similar, instalados en espacios privados de acceso público, o en establecimientos privados que capten imágenes y/o sonidos del espacio o lugares públicos, deben poner a disposición de la autoridad judicial competente, previa orden de la misma, el contenido almacenado en sus sistemas tecnológicos.

Artículo 11º.- Modifícase el artículo 5º de la Ley N° 9400 -de Adhesión a la Ley Nacional N° 26216-, el que queda redactado de la siguiente manera:

"Artículo 5º.- Incentivos. *TODA persona que realice la entrega voluntaria de armas de fuego y municiones, se hará acreedora del incentivo que establezca la Autoridad de Aplicación por vía reglamentaria, además del previsto en la Ley Nacional N° 26216."*

Artículo 12º.-Adhiérase la Provincia de Córdoba a la ley Nacional 25.938 – REGISTRO NACIONAL DE ARMAS DE FUEGO Y MATERIALES CONTROLADOS, SECUESTRADOS O INCAUTADOS. El Ministerio de Seguridad, o el órgano que en el futuro lo reemplace, reglamentará los alcances de la adhesión.

**TÍTULO II
EXÁMEN TOXICOLÓGICO**

**Capítulo Único
Certificado. Incumplimiento**

Artículo 13º.- Certificado Médico. Las personas que desempeñen funciones por elección popular, Gobernador, Vicegobernador, Legisladores y Tribunales de Cuenta, los Ministros, Secretarios, Directores y Subdirectores, Asesores y toda persona que, por disposición legal o reglamentaria, ejerza funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados, están obligados a presentar ante la autoridad competente dentro del plazo de treinta (30) días de asumir en su cargo o de entrada en vigencia de la norma, certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, guardando debida reserva todo aquél que tenga acceso al contenido de los mismos.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará el procedimiento que disponga la reglamentación y, según corresponda, los mecanismos para el abordaje integral a personas con consumo problemático de drogas psicotrópicas ilegales, implementados por el área competente del Poder Ejecutivo Provincial, a fin de brindar contención y asistencia.

**TÍTULO III
FISCALÍAS DE INSTRUCCIÓN - FISCALÍAS MÓVILES – JUZGADOS DE CONTROL**

**Capítulo Único
Creación. Facultades**

Artículo 14º.- Créanse en la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, once Fiscalías de Instrucción que serán designadas como de Cuadragésimo Primera, Cuadragésimo Segunda, Cuadragésimo Tercera, Cuadragésimo Cuarta, Cuadragésimo Quinta, Cuadragésimo Sexta, Cuadragésimo Séptima, Cuadragésimo Octava, Cuadragésimo Novena, Quincuagésima Nominación y Quincuagésima Primera Nominación, respectivamente.

Artículo 15º.- Créanse una Judicial, con sede en la ciudad de Carlos Paz, Departamento Punilla, que será designada como Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple del Cuarto Turno; dos Fiscalías de Instrucción en la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Río Cuarto, Departamento Río Cuarto, que serán designadas como Fiscalías de Instrucción de Competencia Múltiple del Cuarto y Quinto Turno, respectivamente; y una Fiscalía de Instrucción en la Séptima Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Cosquín, Departamento Punilla, que será designada como Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple del Segundo Turno.

Artículo 16º.- Créanse en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, tres Juzgados de Control y Faltas que se denominarán Juzgados de Control y Faltas de Décimo Segunda, Décimo Tercera y Décimo Cuarta Nominación, respectivamente.

Artículo 17º.- Créase una Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico en cada una de las sedes que se corresponden a las siguientes ciudades:

- a) Córdoba;
- b) Río Cuarto;
- c) Villa Carlos Paz;
- d) Cruz del Eje;
- e) Marcos Juárez;
- f) Bell Ville, y
- g) Villa Dolores.

Artículo 18º.- -Créase en la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, un Juzgado de Control cuya numeración será establecida por el Ministerio Público Fiscal y que tendrá asignada -además de las competencias que por ley le corresponden- la de Lucha contra el Narcotráfico en los términos del artículo 34 de la Ley Nacional Nº 23737, de conformidad a la adhesión dispuesta por Ley Nº 10067.

Artículo 19º.- Establécese que las Fiscalías de Instrucción Móviles de Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia de Córdoba, creadas en el artículo 54 de la presente Ley tienen jurisdicción en el ámbito territorial y en la modalidad que en cada caso establezca el Ministerio Público Fiscal.

Artículo 20º.- Facúltase al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba deberán en uso de sus atribuciones dictar las normas que aseguren el cumplimiento del presente Título y a adoptar las medidas adecuadas que permitan la eficaz operatividad funcional y organizacional de las Fiscalías de Instrucción, Fiscalías Móviles y Juzgados de Control creados en esta norma.

Artículo 21º.- Los juzgados y fiscalías creados en el presente título, a excepción de aquellos que tengan competencia en Lucha contra el Narcotráfico, tendrán competencia en los

procesos donde se investiguen delitos contra la Administración Pública y demás estipulados en el Art. 54 de la Ley 8835.

Artículo 22º.- La operatividad de las fiscalías y juzgados creados en la presente ley queda supeditada a la previa afectación presupuestaria de los recursos necesarios a tal fin.

Artículo 23º.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Rodrigo Agrelo

Legislador provincial bloque Encuentro Vecinal

-13-

NARCOTRÁFICO. ENVÍO DE FUERZAS DE SEGURIDAD FEDERALES PARA SU COMBATE Y CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CRISIS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD INTERIOR. INSTANCIA AL PODER EJECUTIVO.

Tratamiento sobre tablas

Sra. Presidenta (Prunotto).- Por Secretaría se dará lectura a la nota con la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 38394/R/23.

Tiene la palabra el legislador Siciliano.

Sr. Siciliano.- Gracias presidenta.

Este proyecto de resolución presentado por el legislador Agrelo insta al Poder Ejecutivo a solicitar un pedido al Gobierno nacional y, teniendo todos los legisladores sobre las bancas el proyecto en cuestión, solicito se evite la lectura del mismo y se proceda a votar dicho proyecto en el tratamiento sobre tablas adelantando el voto positivo del bloque Hacemos Unidos por Córdoba en el tratamiento sobre tablas del proyecto.

Sra. Presidenta (Prunotto).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobada.

Tiene la palabra el legislador Siciliano.

Sr. Siciliano.- Gracias presidenta.

Es para adelantar el voto negativo al siguiente proyecto por parte del bloque Hacemos Unidos por Córdoba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- En consideración la moción del legislador Siciliano.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobada.

Queda rechazado el proyecto.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

38394/R/23

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

Art. 1º.- Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial a fin de que solicite al Poder Ejecutivo Nacional:

El envío de fuerzas de seguridad federales para el combate del narcotráfico destinadas a garantizar el control de los accesos en el límite territorial entre las provincias de Córdoba y Santa Fe.

La constitución del Comité de Crisis del Consejo de Seguridad Interior establecido en el Art. 13º de la Ley 24.059 para el ejercicio de las atribuciones que el mismo tiene para el combate al narcotráfico en las zonas de límite territorial entre las provincias de Córdoba y Santa Fe.

Leg. Rodrigo Agrelo

FUNDAMENTOS

El límite territorial entre las provincias de Córdoba y Santa Fe se ha transformado en una verdadera zona roja de la droga en la Argentina. La situación que vive la ciudad de Rosario en la que grupos de narcotraficantes le disputan al Estado el dominio de los territorios, el sicariato como delito extendido en dicha ciudad y la tendencia expansiva del negocio hacia otros territorios hacen de ese foco rosarino un factor crecientemente preocupante para los cordobeses.

Por otra parte, el ingreso de droga por el norte de la provincia de Córdoba hacia el puerto rosarino y sus inmediaciones resulta hoy relativamente sencillo para los narcotraficantes,

toda vez que la enorme cantidad de rutas y caminos que conectan una provincia con otro transforman al límite entre ambas en una zona “porosa” y atractiva para los narcotraficantes.

Efectivamente, el límite que separa las provincias de Córdoba y Santa Fe está surcado por trece (13) rutas asfaltadas e innumerables caminos rurales que son usadas regularmente por el narcotráfico para la expansión de su vil negocio hacia y desde la provincia de Córdoba.

Lo dicho, no implica como contrapartida insinuar que Córdoba carece de problemas en este aspecto. Todo lo contrario. El sentido de esta petición es dificultar la tarea entre carteles de ambas provincias y permitir que cada una de ellas pueda realizar su propio trabajo puertas adentro. Es más, los narcotraficantes que ingresan desde el norte de Córdoba hacia el puerto de Rosario, en caso de prosperar este pedido verán dificultada su tarea de llegar a destino con su droga. También otras provincias como La Rioja y Catamarca se verán beneficiadas por este cordón interprovincial entre Córdoba y Santa Fe que obstaculice la expansión de las bandas de esta provincia hacia el norte y el oeste argentino.

El pasado mes de febrero de 2023 se reunió el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores, y Asesores Generales de la República Argentina en un número de representantes de diecisiete (17) provincias más la ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Consejo Federal de Política Criminal. En dicha reunión los máximos representantes de los órganos de persecución penal de la referidas jurisdicciones expresaron que “no existe posibilidad alguna de controlar esta calamidad que trae aparejada el narcotráfico si no se implementa en la temática una estrategia conjunta que abre la problemática de manera federal”. En base a ello, es que consideramos que Córdoba debe tomar la iniciativa, adelantándose a solicitar el refuerzo de sus límites con la provincia de Santa Fe, la que muestra un adelanto de lo que pueden llegar a ser nuestras ciudades si dejamos que el narcotráfico asuma el control de espacios colectivos como ha sucedido en la ciudad de Rosario.

Cuál será la gravedad de la situación de Rosario y de la provincia de Santa Fe en esta materia que el conjunto de los funcionarios participantes de la referida reunión del pasado mes de febrero, expresaron puntualmente su “incondicional y absoluto apoyo al Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe”.

Por otra parte, con fecha 15 de agosto de 2023, en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, se reunieron un grupo de funcionarios de altísimo rango, entre ellos camaristas federales, fiscales, comisarios y la intendente de la ciudad de Frontera (Santa Fe), Victoria Civalero, vecina inmediata en el límite interprovincial, quienes expresaron entre otras cosas la intención de “articular esfuerzos para combatir el narcotráfico” en base a once propuestas entre las que podemos mencionar “3) coordinar el trabajo entre las fuerzas provinciales y federales” y “4) canales de conexión entre las diferentes fuerzas” a los fines de no superponer las investigaciones y los esfuerzos” y “11) generar recursos materiales y tecnológicos a las fuerzas de seguridad y requerir la participación de los tres niveles del Estado nacional, Provincial y Municipal ...”

Es en el mismo espíritu ya señalado que esta Legislatura debe abogar por el cumplimiento concreto de las acciones destinadas a transformar a Córdoba y la Argentina en un territorio hostil al narcotráfico.

No debe perderse de vista que el incremento de la oferta de droga es un incentivo directo al de la demanda, ya que “la droga paga con droga” y al ingresar a nuestros territorios en su estrategia de corrupción pone en manos de nuevos actores estupefacientes que luego son revendidos para introducir en el consumo especialmente a los jóvenes.

El incremento de la violencia familiar y de la delictiva tiene buena parte de su explicación en el crecimiento del consumo de drogas, por lo que resulta una prioridad la ejecución de una estrategia de combate efectiva y temprana.

Por otra parte, la posibilidad de presencia de las fuerzas federales en los límites interprovinciales permitirá rotar periódicamente al personal actuante de modo que resulte un objeto menor de potencial corrupción por las bandas de narcotraficantes que “todo lo compran”.

Todo lo solicitado en este proyecto, sin dudas, beneficiará en caso de concretarse al conjunto de la sociedad argentina, ya que establecerá en un lugar central del país una verdadera barrera que dificulte estratégicamente el tránsito de la droga hacia importantes zonas del interior y los puertos.

FUNDAMENTO JURÍDICO.

En nuestro país se dictó en el año 1991 la Ley 24.059 denominada Ley de Seguridad Interior, la cual crea el Consejo de Seguridad Interior e invita a las provincias a adherir. La primera autoridad de aplicación de dicha norma fue el Ministerio del Interior, pasando luego a quedar la totalidad de las fuerzas federales bajo la órbita del Ministerio de Seguridad en el año 2010.

Asimismo, nuestra provincia en el año 2000 sancionó la Ley N° 8.831 que disponía la adhesión a la Ley Nacional de Seguridad Interior.

Ingresando al análisis de la Ley 24.059 la misma establece en su Art. 2° que “...se define como seguridad interior a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional.” (el remarcado me pertenece).

Luego el Art. 7º de la norma establece las fuerzas federales que forman parte del sistema de seguridad interior, incluyendo a los gobernadores y las fuerzas policiales de las provincias que adhieran a la ley, como es el caso de Córdoba.

El Art. 8º de la norma establece que el Ministerio de Seguridad "...ejercerá la conducción política del esfuerzo nacional de policía, con las modalidades del artículo 24 ... Coordinará también el accionar de los referidos cuerpos y fuerzas entre sí y con los cuerpos policiales provinciales ... El Ministerio de Seguridad tendrá a su cargo la dirección superior de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional....".

El mismo artículo enumera atribuciones específicas entre las que podemos mencionar:

1. Formular las políticas correspondientes al ámbito de la seguridad interior, y elaborar la doctrina y planes y conducir las acciones tendientes a garantizar un adecuado nivel de seguridad interior, con el asesoramiento del Consejo de Seguridad Interior. ...

3. Entender en la determinación de la organización, doctrina, despliegue, capacitación y equipamiento de la Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria; e intervenir en dichos aspectos con relación a Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, en estos últimos casos exclusivamente a los fines establecidos en la presente ley. ...

4. Disponer de elementos de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional, a través de los jefes de los respectivos cuerpos y fuerzas, y emplear los mismos, con el auxilio de los órganos establecidos en la presente ley.

Luego el Art. 9º crea el Consejo de Seguridad Interior como un órgano consultivo y de asesoría en materia de seguridad, el cual se encuentra integrado entre otros por representantes de fuerzas federales, provinciales y los estados provinciales que adhieren a la norma. El Art. 9º específicamente dispone: "Créase el Consejo de Seguridad Interior con la misión de asesorar al ministro del Interior en la elaboración de las políticas correspondientes al ámbito de la seguridad interior, como asimismo en la elaboración de los planes y la ejecución de las acciones tendientes a garantizar un adecuado nivel de seguridad interior". (el remarcado me pertenece). Reitero que en la actualidad el órgano encargado de la seguridad interior es el Ministerio de Seguridad y no el del Interior.

La Ley Nacional de Seguridad Interior establece, además, en su Art. 13º la posibilidad de constituir un Comité de Crisis dentro del Consejo en los siguientes términos: "... En el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, cuando se lo considere necesario, se constituirá un Comité de Crisis cuya misión será ejercer la conducción política y supervisión operacional de los cuerpos policiales y, fuerzas de seguridad federales y provinciales que se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior en cualquier lugar del territorio nacional y estará compuesto por el ministro del Interior y el gobernador en calidad de copresidentes, y los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Si los hechos abarcaren más de una provincia, se integrarán al Comité de Crisis los gobernadores de las provincias en que los mismos tuvieron lugar, con la coordinación del ministro del Interior. En caso de configurarse el supuesto del artículo 31 se incorporará como copresidente el ministro de Defensa y como integrante el titular del Estado Mayor Conjunto. El subsecretario de Seguridad Interior actuará como secretario del comité...." (el remarcado me pertenece).

Por último, el Art. 23º de la ley establece que: "El empleo de las fuerzas de seguridad y policiales nacionales fuera del ámbito de las normas que reglan la jurisdicción federal estará estrictamente sujeto al cumplimiento de alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando estén en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada;" y el Art. 24º establece "Producidos los supuestos contemplados en el artículo precedente, el gobernador de la provincia donde los hechos tuvieron lugar podrá requerir al Ministerio de Seguridad el concurso de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional, a fin de dominar la situación se dará al Comité de Crisis la intervención que le compete, de acuerdo a lo normado en la presente ley" (el remarcado me pertenece)

Si bien el fundamento de una resolución debe encuadrarse en valoraciones políticas sobre una determinada situación, el recuento normativo respecto a la seguridad interior deja establecida la posibilidad de emitir por parte de esta Legislatura una declaración (en este caso, un pedido) en tal sentido.

Tampoco podemos desconocer que la Constitución de la Provincia de Córdoba en su Art. 104 otorga a la Legislatura las siguientes atribuciones "...1. Dictar todas las leyes que sean necesarias para hacer efectivos los derechos, deberes y garantías consagrados por esta Constitución sin alterar su espíritu. ... 40. Promover el bienestar común, mediante leyes sobre todo asunto de interés general que no corresponda privativamente al Gobierno Federal".

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Leg. Rodrigo Agrelo

-14-

**LEY N° 9571, CÓDIGO ELECTORAL PROVINCIAL. INCORPORACIÓN DEL
ART. 49 BIS. LEY N° 9572, RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS. INCORPORACIÓN DEL ART. 11 BIS.**

Tratamiento sobre tablas

Sra. Presidenta (Prunotto).- Por Secretaría se dará lectura a la nota con la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 38404/L/23.

Tiene la palabra el legislador Siciliano.

Sr. Siciliano.- Gracias, señora presidenta.

Como ustedes saben, en nuestras bancas consta el proyecto presentado por la legisladora Austin y otros bloques de esta Legislatura incorporando el artículo 49 bis a la Ley 9571 del Código Electoral provincial; como consta en cada una de nuestras bancas, solicito se evite la lectura de dicho proyecto y, asimismo, solicito el tratamiento sobre tablas del mismo adelantando el voto positivo a dicho proyecto en el tratamiento sobre tablas del bloque Hacemos Unidos por Córdoba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobada.

Tiene la palabra el legislador Siciliano.

Sr. Siciliano.- Gracias presidenta.

Es para adelantar el voto negativo del bloque Hacemos Unidos por Córdoba a dicho proyecto.

Sra. Presidenta (Prunotto).- En consideración la moción del legislador Siciliano, de rechazo al proyecto.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobado el rechazo al proyecto.

PROYECTO DE LEY

38404/L/23

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

FICHA LIMPIA

Artículo 1º. Incorpórase el artículo 49 bis a la Ley N° 9.571, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 49 bis. Ficha limpia. No podrán ser candidatos las personas que se encuentren condenadas a penas privativas de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por los siguientes delitos:

a. Los delitos previstos en los capítulos VI (cohecho y tráfico de influencias), VII (malversación de caudales públicos), VIII (negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas), IX (exacciones ilegales), IX bis (enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados) y XIII (encubrimiento), todos del título XI del libro segundo del Código Penal de la Nación;

b. El delito de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5, del Código Penal de la Nación;

c. Los delitos previstos en los capítulos I y II del título IX (delitos contra la seguridad de la Nación), del libro segundo del Código Penal de la Nación;

d. Los delitos contra la integridad sexual comprendidos en los artículos 119º, 120º, 124º a 128º, 130º, 131º y 133º del Título III del Libro Segundo del Código Penal;

e. Los delitos contra el estado civil de las personas comprendidos en los artículos 138º, 139º y 139º bis del Título IV del Libro Segundo del Código Penal; y

f. Los delitos contra la libertad comprendidos en los artículos 140º, 142º, 142º bis, 145º bis, 145º ter y 146º del Título V del Libro Segundo del Código Penal.

La inhabilitación prevista en el presente artículo se extenderá desde que exista sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior, o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.

Los partidos políticos o alianzas electorales, a fin de acreditar el cumplimiento del párrafo anterior, deberán exigir a todos los precandidatas/os y candidatas/os titulares y suplentes que integren sus listas, para cualquier cargo electivo provincial y municipal, el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) emitido por el Registro Nacional de Reincidencia (o el informe o documento que lo reemplace), siendo responsables directos de su presentación por ante los órganos con competencia electoral. El citado certificado se deberá acompañar junto con la presentación de listas, tanto en las elecciones primarias como en las generales.

Artículo 2º. Incorpórase el presente artículo 11 bis a la Ley N° 9.572, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 11 bis. A efectos de las postulaciones de candidatos a cargos públicos electivos a nivel provincial y municipal, rigen las disposiciones contempladas en el artículo 49 Bis de la Ley 9571. Dichas disposiciones son extensivas, para candidatos a cargos partidarios.

Artículo 3º. Comuníquese al Poder Ejecutivo

Leg. Austin, Almada, Gispert, Juez, Martoccia, Nostrala, Pereyra, Peirone, Botta, Peralta, Rossi, Hernández Maqueda, Bisotto, Bottasso, Briz, Briner, Carignano, Contrera, Ferrero, Grich, Gudiño, Gvozdenovich, Jaimes, Luna, Molina, Nicolás, Nigro, Saliba, Szpanin, Valiente, Tamis, Sala.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto es una reproducción del expediente N° 31310/L/20, ingresado el 7 de octubre del año 2020 por los entonces legisladores Marcelo Cossar, Cecilia Irazuzta, María Elisa Caffaratti, Marisa Carrillo, Patricia de Ferrari, Verónica Garade Panetta, Juan Jure, Daniela Gudiño, Dante Rossi, Antonio Rins, Aurelio García Elorrio, María Rosa Marccone, Alberto Ambrosio, Silvia Paleo, Raúl Recalde, Darío Capitani y Orlando Arduh.

Aquellos legisladores interpretaron y representaron la voz de más de 400.000 ciudadanos que sumaron su firma para que este proyecto logre su tratamiento a nivel nacional y en las distintas jurisdicciones. Ese mismo movimiento ha logrado, al día de hoy, que el proyecto se instale en la agenda pública y que muchas legislaturas subnacionales avancen en su sanción.

Los fundamentos de la iniciativa, descriptos a continuación, señalan de manera oportuna el desafío al que nos enfrentamos quienes tenemos la tarea de legislar para proteger lo público y para elevar el nivel ético de los servidores a cargo. Es que en las últimas tres décadas, gradualmente, las administraciones públicas vienen generando cuerpos normativos y organismos de control que fortalecen lo que el especialista español Manuel Villoria define como una "infraestructura ética para la función pública".

En ese sentido, afirma el autor, los sistemas de control –jurídicos y no jurídicos– y las actitudes y comportamientos sociales y políticos constituyen un conjunto de esclusas formales e informales que auxilian en la adecuada gestión de las conductas de los empleados públicos. Estas esclusas o muros de contención contra la corrupción o el fraude en la administración constituyen la denominada infraestructura ética, es decir las herramientas, sistemas y condiciones que eviten y sancionen las actividades inmorales y proporcionan los incentivos para el profesionalismo y los modelos de conducta en la administración. Dicha infraestructura ética consta de muy diversos elementos, según la OCDE: apoyo político, un marco legal eficaz, una sociedad civil activa y vigilante, un sistema de controles y un organismo coordinador (Villoria, 2005: 14)[1].

La transparencia como política pública está asociada a la profundización democrática, a la buena gobernanza y a la prevención y combate a la corrupción. Por lo tanto, tales políticas serán consideradas eficientes si contribuyen a profundizar los niveles de democracia de los países, a garantizar o mejorar la gestión de las políticas públicas y/o a prevenir y combatir la corrupción (Moreira Correa y Claussen Spinelli, 2011: 78)[2].

En este sentido, nuestro país ha venido dando señales intermitentes de compromiso con los principales acuerdos internacionales que velan por la transparencia y la lucha contra la corrupción, verdadero flagelo de nuestras actuales democracias liberales. La corrupción es un problema estructural que mina los cimientos de nuestras sociedades, cortando el vínculo de ejemplaridad que debe existir entre los representados y quienes coyunturalmente tienen la responsabilidad de representar a sus pares.

La lucha contra la corrupción exige desplegar y aunar todos los esfuerzos del Estado a fin de contrarrestar este fenómeno que no conoce fronteras ni grados de desarrollo. Nuestro país, por su parte, no es inmune a este fenómeno y a pesar de ciertos avances en la materia como lo demuestra el último informe anual -2018- de la organización Transparencia Internacional, que ubicó a nuestro país en el puesto 85, -obteniendo una notable mejora en cuanto su calificación con respecto a años anteriores-, la realidad demuestra que todavía queda mucho trabajo por hacer.

Estas preocupaciones son parte de una agenda nacional que la Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio viene trabajando en el Congreso de la Nación y en más de diez legislaturas provinciales, en donde estamos impulsando el tratamiento y la aprobación de dispositivos institucionales que, bajo el nombre de "ficha limpia", regulen y limiten la posibilidad de ser candidatos a cargos electivos y partidarios a personas que se encuentren condenadas a penas privativa de la libertad por delitos que afectan a la administración pública, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso.

Los diferentes proyectos de "ficha limpia" se amparan en la necesidad de que cada persona que pretenda desempeñar funciones de naturaleza pública pueda demostrar a priori a la ciudadanía y al cuerpo electoral que no es o ha sido investigado, procesado y/o condenado por delitos a la administración pública en cualquiera de sus niveles, hecho que es violatorio del principio republicano de la responsabilidad agravada de cualquier funcionario público.

También una "ficha limpia" es garantía frente al uso abusivo de las denominadas inmunidades funcionales, como la libertad de arresto que protege a los diputados y senadores nacionales, dado que es de público y notorio conocimiento que un uso inapropiado de dichas prerrogativas ha permitido las candidaturas y la elección de legisladores con sentencias firmes en causas contra la administración pública, generando un blindaje legal que impida la prosecución debida de dichas causas. Con estas prácticas se degrada la imagen de los cuerpos legislativos, pero peor aún, se degrada la percepción de la actividad política por parte de la ciudadanía.

Esta propuesta se ampara en una enorme cantidad de cláusulas constitucionales, legales y provenientes de tratados internacionales aprobados y con plena vigencia en nuestro país. Por su parte, muchas provincias también han avanzado decididamente en la construcción de marcos de integridad en la gestión pública, instrumentos propios para las democracias más transparentes y relacionales que proponemos consolidar de modo definitivo.

Partiendo de la propia Constitución Nacional, la cláusula Alberdiana del artículo 16 establece a la idoneidad como requisito de admisibilidad en el empleo público. Dicho abordaje de la idoneidad estaba anclada a la idea de mérito, así como también involucraba axiológicamente la idea de integridad y ejemplaridad en la función pública. Alberdi tomó como fundamento de este dispositivo constitucional la experiencia Napoleónica de creación y consolidación de la burocracia francesa, una de las más probas y eficientes del planeta. Junto con ello, el modelo republicano de gobierno presente en el artículo 1º de nuestra C.N. conlleva, entre otros, el principio de responsabilidad agravada para quienes desempeñan una función pública, reforzando el ideal ético que debía inspirar a quienes asumieran a futuro compromisos con la vida política nacional.

La reforma constitucional de 1994 actualiza este abordaje en el importante artículo 36, que determina que quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, queda inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Este es uno de los escasos ejemplos en donde la Constitución avanza tipificando un delito de carácter constitucional, equiparando al mismo como un atentado contra el propio sistema democrático, y definiendo la imprescriptibilidad del mismo.

De una interpretación armónica e integrada de ambas cláusulas constitucionales se desprende que el objetivo de los convencionales constituyentes fue evitar que quienes hayan cometido delitos de corrupción sean considerados una opción electoral válida. Todo ello en resguardo de la Constitución Nacional, las instituciones democráticas y el bienestar general de toda la Nación.

Esta iniciativa se encuentra también en consonancia con importantes convenciones internacionales en materia de derechos humanos, transparencia y lucha contra la corrupción. La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción dispone en su artículo 7 inciso 2:

Cada Estado parte considerará también la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, a fin de establecer criterios para la candidatura y elección a cargos públicos.

Esto último de ninguna manera viola el principio constitucional de inocencia, puesto que, en primer lugar: el artículo 23 inciso 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sostiene en materia de derechos políticos que:

La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades de elegir y ser electos en cargos públicos, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

A nivel legislativo, existen también en el plano nacional normas que amparan y justifican la viabilidad de esta iniciativa. A modo de ejemplo, las personas que hayan sido condenadas con sentencia firme a una pena privativa de la libertad por haber cometido delitos dolosos, actualmente, no pueden ser candidatas por haber sido excluidas del Padrón Electoral, en virtud de las disposiciones del artículo 33 inciso a) de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y el artículo 3 del Código Nacional Electoral.

Conviene también descartar este último argumento que plantean algunos detractores a la presente propuesta, basados en el supuesto de que una ley de ficha limpia atenta contra el principio constitucional de inocencia. Frente a ello, se opone el principio más elemental del derecho público: no existen derechos absolutos y cada uno de ellos admite restricciones razonables y legales conforme lo sostiene el artículo 14 de la C.N., y cuyos límites están planteados en el artículo 23 de dicho cuerpo legal.

La elegibilidad no es un derecho natural que acompaña a todos desde el nacimiento. El derecho al sufragio pasivo se adquiere cumpliendo las condiciones estipuladas por la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia. Solo los argentinos (por nacimiento o naturalizados) que cumplan con ciertas condiciones de elegibilidad (ciudadanía, edad, domicilio, residencia, formación de la persona, etc.) y no se encuentren sometidos a las causas de inelegibilidad tienen el derecho a postularse a un cargo electivo y disputar el voto de los electores.

Las inelegibilidades, por su parte, tienen como objetivo preservar a las instituciones de la entrada de personas que no tengan el perfil deseado, todo ello según criterios razonables y objetivos. En este sentido, mientras que la sanción penal tiene fines punitivos, la inelegibilidad electoral está dirigida a la delimitación del perfil esperado de los candidatos. La inelegibilidad no pretende, entonces, castigar a nadie, en la medida en que su determinación punitiva es previa a cualquier acto electoral.

En la provincia de Córdoba existen también cláusulas constitucionales que abordan y delimitan el derecho político de representar, a modo de marcos de integridad para el desempeño de las máximas funciones públicas. Los artículos 86 y 137 de la Constitución Provincial inhabilitan para ejercer los cargos de legislador y de gobernador y vicegobernador, respectivamente, a los condenados por delito mientras no hayan cumplido sus penas y a los que estén inhabilitados para ejercer cargos públicos.

Por su parte, el artículo 14 del mismo cuerpo llega a establecer la responsabilidad estatal frente a los daños que puedan causar los hechos y actos producidos por todos sus funcionarios y agentes.

Por todo lo dicho, y conscientes de que en nuestra provincia queda mucho trabajo por delante en materia de legislación que prevea, limite y castigue de manera efectiva los delitos contra la administración pública en todos sus niveles, es que proponemos la inclusión de nuestra propuesta de ficha limpia para todos los candidatos a cargos públicos y partidarios de naturaleza electiva, a través de reformas parciales a las leyes provinciales 9571(Código Electoral Provincial) y 9572 (Régimen jurídico de los partidos políticos).

Como conclusión, nos parecen oportunas las reflexiones de Villorria (2019: 95-96)[3], quien nos invita a hablar de la calidad de la democracia y de la necesidad de definir vías para superar la democracia de mínimos, construyendo unas democracias plenamente relegitimadas. Unas democracias que aseguren un sistema de controles del poder suficientemente consolidados como para evitar derivas autoritarias y donde la voluntad popular, al tiempo, no sea secuestrada por élites de poder político y económico que son opacas, no responden y no permiten que surjan alternativas. Democracia de calidad implica y exige controles fuertes sobre el poder político, no solo elecciones (...) en primer lugar, la opción por una democracia de calidad es una opción ética, exige una difícil renuncia al ejercicio del poder discrecional por parte de los políticos y sus resultados positivos se ven a medio y largo plazo; lo que hemos aprendido a través de la historia es que el buen gobierno es un gobierno democrático que sabe auto-limitar su poder. Pero para ello es preciso, además, construir instituciones que promuevan la imparcialidad, la transparencia y la rendición de cuentas y que, en definitiva, eviten la corrupción de los pilares esenciales de la sociedad y, especialmente, del gobierno y la administración. Estas instituciones se entienden mejor si comprendemos que la legitimidad democrática no se basa tan solo en ganar elecciones.

Esta visión macro necesita su complemento micro. Por ello creemos que las instituciones generales de control deben ser acompañadas por sistemas organizacionales que, a través de instrumentos y procesos adecuados generen, en cada convocatoria al cuerpo electoral, un marco de refuerzos mutuos que promuevan integridad y desincentiven comportamientos deontológicamente indeseables.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de ley.

Leg. Austin, Almada, Gispert, Juez, Martoccia, Nostrala, Pereyra, Peirone, Botta, Peralta, Rossi, Hernández Maqueda, Bisotto, Bottasso, Briz, Briner, Carignano, Contrera, Ferrero, Grich, Gudiño, Gvozdenovich, Jaimes, Luna, Molina, Nicolás, Nigro, Saliba, Szpanin, Valiente, Tamis, Sala.

-15-

**LEY N° 9122, TRIBUNALES DEL FUERO PENAL ECONÓMICO Y
ANTICORRUPCIÓN, Y CAPÍTULO II DEL TÍTULO III DE LA LEY N° 8835,
CARTA DEL CIUDADANO. DEROGACIÓN.**

Tratamiento sobre tablas

Sra. Presidenta (Prunotto).- Por Secretaría se dará lectura a la nota con la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 38405/L/23.

Tiene la palabra el legislador Siciliano.

Sr. Siciliano.- Gracias, presidenta.

Obra en nuestras bancas copia dicho proyecto, iniciado por el legislador Hernández Maqueda y otros bloques, la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico, planteando o instruyendo al Fiscal General y al Tribunal Superior de Justicia a la reubicación de personal en otras áreas, por ello solicito se omita la lectura del mismo. Asimismo, solicito su tratamiento sobre tablas adelantando el voto positivo del bloque Hacemos Unidos por Córdoba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- En consideración el tratamiento sobre tablas.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobado.

Tiene la palabra el legislador Siciliano.

Sr. Siciliano.- Gracias, señora presidenta.

Es para adelantar el voto negativo al proyecto en tratamiento.

Sra. Presidenta (Prunotto).- En consideración la moción del legislador Siciliano.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobada.

Queda rechazado el proyecto.

PROYECTO DE LEY
38405/L/23
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
DEROGACIÓN DEL FUERO PENAL ECONÓMICO ANTICORRUPCIÓN

Artículo 1º. Derogación. Derógase la Ley Nº 9.122 y el Capítulo II del Título III de la Ley Nº

8.835.

Artículo 2º. Personal afectado. Instrúyese al Fiscal General y al Tribunal Superior de Justicia a reubicar al personal afectado a los órganos referidos en el artículo anterior.

Artículo 3º. Causas en trámite. Gíranse las causas en trámite en dicho Fuero y las que surjan con posterioridad a la publicación de la presente ley a los fiscales y jueces competentes por un sistema de sorteo.

Artículo 4º. Sorteo. Prohíbese la utilización de sistemas de sorteo cuya contratación, dependencia y control no sea exclusivo del Poder Judicial.

Artículo 5º. Recursos. Destínase a las fiscalías y juzgados de la primera circunscripción judicial personal especializado en la lucha contra la corrupción y los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades.

Artículo 6º. De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Leg. Hernández, Peralta, Rossi, Botta, Almada, Gispert, Juez, Martoccia, bloque Frente Cívico de Córdoba, Austin, bloque UCR

FUNDAMENTOS

El presente proyecto es una reproducción del expediente Nº 37657/L/23, presentado el 9 de agosto de 2023 por los entonces legisladores Cecilia Irazuzta, Álvaro Zamora Consigli y Amelia Moscoso y del expediente Nº 16784/L/15, ingresado el 20 de mayo de 2015 por el entonces legislador Aurelio García Elorrio.

Ambos proyectos parte de la base de reconocer la corrupción como un fenómeno que socava los cimientos de la sociedad, compromete la integridad de las instituciones y obstaculiza el desarrollo. En la Argentina, la corrupción y los reclamos desatendidos de una ciudadanía apática también han ocasionado el desprestigio de la política como instrumento para transformar la realidad. Los privilegios de unos pocos han provocado la desconfianza de la sociedad hacia sus representantes. Sin desmerecer la múltiple cantidad de problemáticas que afronta nuestro país, podemos afirmar que la corrupción es la más peligrosa y dañina. La inseguridad, la pobreza, la inflación, la falta de infraestructura, entre otros asuntos, tienen en su gran mayoría orígenes relacionados a prácticas espurias que debemos combatir.

Montuschi (2019) afirma que "la permanencia y aceptación (explícita o tácita) de actos de corrupción en la sociedad tiende a crear una cultura de la corrupción que vuelve muy difícil todo intento de erradicación de la misma" [1]. La ausencia de valores tanto individuales, como la responsabilidad, el honor, la verdad y la equidad, o de valores corporativos. Como la integridad, la responsabilidad social y la honestidad; configuran un modelo de sociedad caracterizada por la normalización de comportamientos "corruptos". Es por eso que nuestro deber es legislar para corregir las deficiencias del sistema.

En este contexto, la Ley Nº 8.835, conocida como Carta del Ciudadano, sancionada en marzo del 2000 y la Ley Nº 9.122, de agosto de 2003, crean y asignan competencias al fuero Penal Económico y Anticorrupción en el ámbito del Poder Judicial de nuestra provincia. Este venía aparentemente a solucionar el problema endémico antes mencionado. En aquel entonces, cuando el Poder Ejecutivo presentó dicho proyecto de ley, nuestro país venía de transitar tiempos muy difíciles atravesados por la famosa consigna del "que se vayan todos". De esta manera, la creación de un fuero supuestamente especializado para investigar y encarcelar funcionarios corruptos significaba un alivio para el reclamo genuino de los cordobeses. Sin embargo, en los hechos, no se cumplieron los objetivos que se perseguían.

Córdoba, lamentablemente, registra un largo historial de presuntos hechos de corrupción en su historia reciente. A estos fines, se tomarán solamente dos ejemplos: Uno de los más representativos es el Hotel Ansenuza, construido por el Gobierno de la Provincia a través de la Lotería. Dicho complejo hotelero (inaugurado en 2015) fue objeto de numerosas denuncias por sobrepagos, no sólo por miembros de la oposición sino también por especialistas de mercado, quienes objetaron que, del monto original de licitación de \$50 millones, se terminaron abonando \$400 millones por su construcción. A pesar de ello, el fiscal de Instrucción, Gustavo Dalma, resolvió en 2017 que los hechos constatados en la investigación "no encuadraban en figura penal alguna" [2].

Otro ejemplo señero es la construcción de los gasoductos troncales. Esta obra está citada cuatro veces en la lista de coimas registrada por Alberto Youssef, banquero brasilero y principal delator de la causa Lava Jato, quien hizo referencia a tres intermediarios y, al menos, a USD\$36 millones de dólares en concepto de dádivas [3]. Esto trajo como consecuencia que, de los diez tramos ejecutados, ocho debieran ser nuevamente licitados. La Justicia cordobesa desestimó en 2015 una denuncia presentada por los entonces legisladores Quinteros, Montero y

García Elorrio con el argumento de que los supuestos pagos ilegales se habrían realizado hasta 2014 (según las constancias existentes en el caso Odebrecht), mientras que los gasoductos fueron licitados al año siguiente, por lo que no era posible que alguien hubiera pagado coimas por una obra que no se hizo [4].

Los dos ejemplos anteriormente mencionados sirven para ilustrar que la creación del fuero Anticorrupción significa un claro fracaso que impide que hechos presuntamente contrarios a derecho sean debidamente investigados. A su vez, permite que en el marco de un sistema acusatorio, sólo dos fiscales y un juez de control concentren el poder para abrir o cerrar investigaciones penales preparatorias. Sus nombramientos fueron afines al Partido Justicialista, lo que permitió que prácticamente la totalidad de los funcionarios de la segunda provincia y de la segunda municipalidad del país tengan garantizada su impunidad por no haber rendido jamás cuentas ante la Justicia.

La lucha contra la impunidad por delitos de corrupción, como se relata hasta aquí, encuentra respaldo y dirección en el marco jurídico nacional e internacional. El artículo 36 de la Constitución Nacional, primero, reconoce como un atentado contra el sistema democrático a los delitos dolosos contra el Estado que conlleven enriquecimiento. Se equipara a la corrupción, entonces, con la traición a la patria y al alzamiento contra el orden institucional, dando cuenta de la gravedad de los actos de un funcionario que comete este tipo de delitos ejerciendo una actividad producto de la confianza pública.

De la misma manera, la Convención Interamericana contra la Corrupción emerge como un compromiso regional significativo. Ratificada por los Estados miembros de la OEA, incluida la Argentina mediante la Ley Nacional N° 24.759, la Convención establece lineamientos concretos para prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ámbito público y privado, promoviendo la cooperación internacional y la participación ciudadana como instrumentos clave en la construcción de sociedades más justas, transparentes y éticas. En un sentido similar, la Ley Nacional N° 26.097, aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

La presente ley busca entonces, en consideración a los fundamentos antes detallados, derogar el Capítulo II del Título III de la Ley N° 8.835 y la Ley N° 9.122, para evitar que el mecanismo de sorteo de causas en materia de delitos de corrupción esté controlado por el poder político y que, de este modo, vuelva a recaer sobre cualquier fiscal de la circunscripción judicial que se trate. A la par, procura asignar los recursos necesarios para favorecer la investigación en cuestión.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Leg. Hernández, Peralta, Rossi, Botta, Almada, Gispert, Juez, Martoccia, bloque Frente Cívico de Córdoba, Austin, bloque UCR

[1] Monstuschi, L. (2019). Corrupción, costos y políticas. El caso argentino. Asociación Argentina de Economía Política.

[2]
<https://lmdiaro.com.ar/contenido/15368/hotel-ansenuza-archivan-la-causa-por-sobreprecios-en-la-obra>

[3]
<https://www.lavoz.com.ar/politica/como-aparece-cordoba-en-la-investigacion-del-lava-jato-en-brasil/>

[4] <https://enredaccion.com.ar/corrupcion-guia-para-entender-el-caso-odebrecht-en-cordoba/>

-16-

**LEY NACIONAL N° 27725, DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS.
ABSTENCIÓN DE SU MODIFICACIÓN O DEROGACIÓN. INSTRUCCIÓN E
INSTANCIA A LOS LEGISLADORES NACIONALES POR CÓRDOBA.**

Moción de vuelta a comisión

Sra. Presidenta (Prunotto).- Por Secretaría se dará lectura a la nota por la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 38439/R/23.

Tiene la palabra legislador el legislador Knipscheer.

Sr. Knipscheer.- Gracias, señora presidenta.

Sí, yo había solicitado en esta nota el tratamiento sobre tablas pero, bueno, pasan cosas; la verdad es que pasan cosas en esta Argentina y en esta Córdoba, y hay dos cosas que me parecen importantes, una, que me hubiese gustado tratarlo con el pleno del Cuerpo, creo que hubiese tomado otra forma, otra fuerza, hubiese encontrado acompañamiento de otros legisladores que ahora no están, han decidido no estar, y ya le voy a explicar por qué. La otra es que, estando nosotros en este recinto, el Poder Ejecutivo nacional ha emitido un Decreto de Necesidad y Urgencia.

La verdad es que yo ya no sé si es atemporal mi solicitud porque no sé si en ese decreto de necesidad y urgencia el presidente Milei ha tomado alguna determinación respecto a qué va a hacer con el Impuesto a las Ganancias. La verdad

que estando acá en el recinto no lo sé, ya nos enteraremos cuando lo publique en el Boletín Oficial.

No obstante eso, presidenta, quiero dejar en claro mi posición. Hace sólo dos meses y medio el Congreso Nacional sancionó la Ley de Impuesto a las Ganancias, donde 800 mil argentinos se vieron beneficiados. Yo pude presenciar la media sanción en la Cámara de Diputados, y por eso entiendo que iba a encontrar el acompañamiento de legisladores de otros bloques porque en esa sesión, donde 135 diputados nacionales votaron por la afirmativa y 103 por la negativa, la mayoría de los argumentos esgrimidos por los diputados que rechazaron el proyecto de eliminación del Impuesto a las Ganancias decían que era por lo atemporal del tratamiento del tema, porque estaba en el medio de una campaña electoral. Bueno, la campaña electoral ya terminó y me parecería muy injusto volver atrás con algo que es un reclamo histórico de los trabajadores en la República Argentina.

Además, presidenta, en esa sesión varios de los diputados nacionales, ahora gobernadores de diferentes provincias, acompañaron el proyecto de eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. No obstante eso, en estos días se han escuchado voces de muchos gobernadores que ante la pérdida de los ingresos por eliminación del Impuesto a las Ganancias, solicitaban que se pueda compensar con la coparticipación del Impuesto al Cheque, impuesto injusto también si los hay que nació para irse rápido hace más de veinte años y todavía lo tenemos.

Entonces, presidenta, yo quiero dejar clara mi postura e instruir humildemente a los diputados y senadores por Córdoba para que, dadas sus facultades que tienen en el Congreso Nacional, soliciten al gobierno nacional que se coparticipe el Impuesto al Cheque y no se vuelva atrás con algo tan injusto como el Impuesto a las Ganancias. Además, en la sesión misma varios diputados por Córdoba, sabiendo que la provincia de Córdoba iba a dejar de recibir los fondos coparticipables, acompañados de otros diputados de diversas provincias, presentaron un proyecto, entre ellos el diputado García Aresca y la diputada Natalia De la Sota, solicitando la compensación con el Impuesto al Cheque.

Esa es la razón de la resolución, no voy a solicitar el tratamiento sobre tablas; voy a pedir que pase a la comisión pertinente teniendo la certeza y la esperanza de que muchos legisladores que hoy no están me acompañen en esa resolución.

Y desde esta banca, en Córdoba, le pido al presidente Milei que coparticipe el Impuesto al Cheque; que no vuelva atrás, ya que sería un error y una gran injusticia para más de 800 mil trabajadores de la Argentina.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Prunotto).- Gracias, legislador Knipscheer.

En consideración la moción del legislador Knipscheer de pase a comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobado.

38439/R/23

Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Knipscheer, instruyendo a los Senadores (Art. 104 inc. 5 C.P.) e instando a los Diputados Nacionales por Córdoba para que se abstengan de modificar o derogar la Ley Nacional N° 27725 de Impuesto a las Ganancias.

Comisiones: De Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-17-

LEY N° 10870, SOBRE ADJUDICACIÓN DE TERRENOS AL RADIO MUNICIPAL DE TANTI, DPTO. PUNILLA. DEROGACIÓN.

Moción de vuelta a comisión

Sra. Presidenta (Prunotto).- Por Secretaría se dará lectura a la nota con la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 38442/L/23.

Tiene la palabra el legislador Siciliano.

Sr. Siciliano.- Gracias, presidenta.

En primer lugar, es para pedir, teniendo en nuestras bancas el proyecto presentado por el legislador Luna, sobre la adjudicación de terrenos al radio municipal de la localidad de Tanti y contando con la necesidad de estudiar en mayor profundidad dicho proyecto, es que solicito se omita su lectura, sabemos de qué se

trata y solicitamos su vuelta a comisión para poder tratarlo con mayor profundidad, y si así lo consideramos, poder aprobarlo en la próxima sesión.

Sra. Presidenta (Prunotto).- En consideración la vuelta a comisión del proyecto.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobada.

38442/L/23

Proyecto de Ley, iniciado por el Legislador Luna, derogando la Ley N° 10870 sobre la adjudicación de terrenos al radio municipal de Tanti, Dpto. Punilla.

Comisiones: De Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de Legislación General

-18-

**REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA. ARTÍCULO 59.
MODIFICACIÓN.**

Tratamiento sobre tablas

Sra. Presidenta (Prunotto).- Se encuentra reservado en Secretaría, con una moción de tratamiento sobre tablas, el proyecto 38462/R/23.

Tiene la palabra el legislador Torres.

Sr. Torres Lima.- Gracias, señora presidenta.

Primero, y en virtud del desconcierto que todos tenemos en esta sesión a causa de esta maniobra extorsiva de no dar quórum, recién el legislador Ricardo Sosa se levantó para ir al baño, omitió la Presidencia darse cuenta de que faltaba él para poder aprobar la vuelta a comisión del proyecto de Tanti, que recién mencionó el legislador Siciliano, razón por lo cual advierto de esta situación para que cuando regrese el contador Ricardo Sosa votemos nuevamente como corresponde.

No obstante ello, voy a hablar del proyecto que recién se mencionó, el cual fuera presentado por los bloques de la oposición, en este desconocimiento sistemático de lo establecido en el Reglamento Interno desde que comenzamos nuestra acción en esta Cámara de la democracia de Córdoba, en el sentido de que nunca quisieron aceptar lo establecido en el Reglamento.

Al respecto, permítame, señora presidenta, leer lo establecido en el Capítulo del Reglamento Interno de esta Legislatura provincial que habla de la organización y constitución de los bloques parlamentarios, el artículo 57, reza que "Los grupos de tres o más legisladores podrán organizarse en bloques de acuerdo con sus actividades políticas"; y en un segundo párrafo señala expresamente que "Dos o más bloques políticos podrán constituir un interbloque, al solo efecto de actuar políticamente en forma conjunta. La conformación de ese interbloque no implicará asignación de estructura administrativa, ni incidirá en la representatividad legislativa de cada bloque en la integración de las comisiones de la Legislatura...". Es claro como el agua.

El artículo 59, que habla de las comisiones, y particularmente de la Comisión de Labor Parlamentaria que a este presidente provisorio le toca presidir en ausencia, en algunas oportunidades, de la vicegobernadora, establece expresamente: "La Comisión de Labor Parlamentaria estará integrada por el presidente y los vicepresidentes de la Legislatura y los presidentes de los bloques parlamentarios o quienes lo reemplacen". Queda claro, señora presidenta, que no hay interbloque reconocido para la participación en ninguna Comisión de esta Cámara de Legisladores en la provincia de Córdoba.

Es por ello que el intento, o la intentona –muchas veces violentando la situación-, de que un interbloque conformado por bloques que dicen no ser parte, porque incluso han presentado una nota la UCR, el Frente Cívico, el ARI y el PRO - después el PRO negó, desconoció y manifestó que no era parte de ese interbloque, pero, bueno, es una cuestión que tendrán que resolver ellos, que las cuestiones políticas de ellos no impregnen el trabajo legislativo de esta Cámara-, pero, más allá de quienes conforman ese interbloque, hubo una constante metodología para tratar de imponer a la presidenta del interbloque en la Comisión de Labor Parlamentaria; y, claramente, de lo que instruye y reza de manera taxativa este Reglamento Interno de la Legislatura cordobesa, eso está prohibido, excepto, señora presidenta, que

haya un acuerdo o un asentimiento por parte de la presidencia que lleva adelante dicha comisión.

Nosotros, hasta el día de hoy, fuimos flexibles; es más, en la Comisión de Labor Parlamentaria hoy discutí con el presidente de mi bancada en virtud de que me parecía oportuno que la presidenta –entre comillas- de ese interbloque participara para que, de alguna manera, pudiéramos dar una sesión que, lamentablemente, fue un total desorden, en virtud de las inasistencias multitudinarias de los bloques de la oposición. Pero, señora presidenta, en este proyecto que estos bloques que hoy no están presentes para defender sus ideas, en este proyecto que estos bloques presentaron, buscan modificar el Reglamento Interno, modificar los artículos que establecen y que rezan dichas prescripciones, para que esa presidenta –entre comillas- pueda participar.

Es por ello, señora presidenta, que en virtud de que lo único que hemos recibido, desde el momento en que hemos llegado a esta Legislatura provincial han sido palos en la rueda, como legislador de la bancada de Hacemos Unidos por Córdoba, pero además con el orgullo de haber sido elegido por este Cuerpo como presidente provisorio es que mociono, señora presidenta, se le dé, primero, el tratamiento sobre tablas al proyecto presentado y, posteriormente, el tratamiento de dicho proyecto donde, adelanto, le daremos aprobación al tratamiento sobre tablas, pero el rechazo ineludible a la modificación del artículo del Reglamento Interno que establece la prohibición y el desconocimiento a la actuación de cualquier interbloque que se constituya en esta Legislatura, sobre todo en la Comisión de Labor Parlamentaria.

Muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Gracias, legislador Torres.

Se pone en consideración la moción de tratamiento sobre tablas del proyecto 38462/R/23.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobada.

Se pone en consideración la moción de rechazar el proyecto de resolución.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobada la moción. Queda, en consecuencia, rechazado el proyecto.

**PROYECTO DE RESOLUCIÓN
38462/R/23**

**LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE**

Art. 1º: Modifícase el Art. 59 Del Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, que quedará redactado de la siguiente manera:

*Artículo 59.- La Comisión de Labor Parlamentaria estará integrada por el Presidente y los Vicepresidentes de la Legislatura y los Presidentes de los Bloques Parlamentarios o quienes los reemplacen **y por los Presidentes de los Interbloques que se hubieren conformado.** Se reunirá, por lo menos, una vez por semana durante los períodos de sesiones y, fuera de ellos, cuando así lo disponga el Presidente. Las decisiones de la Comisión se adoptarán siempre en función del criterio del voto ponderado. De cada reunión de Comisión el Secretario Legislativo labrará un acta que suscribirán los miembros presentes.*

Art. 2º: De forma.

Leg. Gvozdenovich, Nostrala, Rossi, Hernández Maqueda, Botta.

FUNDAMENTOS

Señora Presidente:

EL Parlamento es el organismo de mayor representatividad que tiene un estado democrático, donde el o los partidos de gobierno tienen dialogo con los demás partidos políticos con representación legislativa, que tienen la función de controlar la gestión pública.

La Provincia organiza su gobierno bajo la forma representativa, republicana y democrática, como lo consagra nuestra constitución y tiene como objetivo en su preámbulo el definitivo establecimiento de una democracia pluralista y participativa.

Como caja de resonancia de la sociedad, es necesario que este parlamento, se adapte a las realidades de una sociedad cada vez más dinámica y heterogénea, respetando las distintas

formas de conformación de los espacios políticos que participan de la vida democrática de nuestra provincia.

Las modificaciones propuestas, tienen por objetivo, incorporar al reglamento interno la figura de los Interbloques parlamentarios, que son una figura cada vez más utilizada y que tienen existencia en distintos órganos legislativos, tanto a nivel municipal como provincial y nacional.

Que, una interpretación armónica del reglamento, nos permite advertir con claridad que la figura del interbloque se encuentra reconocida jurídicamente en el mismo a los efectos de la actuación política.

El ámbito donde los bloques acuerdan las decisiones políticas es la Comisión de Labor, siendo que, atento a que el voto es ponderado, la presencia de la presidencia del interbloque no altera las votaciones.

Es cierto que el art. 57 señala que la existencia del interbloque no implica estructura administrativa, ni incide en el criterio establecido en el art. 61 aplicado para la conformación de las comisiones de esta Legislatura. Esto es así, en cuanto, busca evitar que la constitución eventual de un interbloque pretenda erigirse como una nueva mayoría que dispute el reparto de comisiones, pero no refiere en ningún caso a la comisión de Labor la que se rige por un criterio de voto ponderado.

Esta modificación, contribuye sin duda al ejercicio pleno de la democracia dentro de este cuerpo, que permite una mejor y mayor participación de los distintos partidos que tiene representación dentro del cuerpo, como expresiones de la soberana popular de los vecinos de la provincia de Córdoba.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares prestéis aprobación al presente proyecto de Resolución.

Leg. Gvozdenovich, Nostrala, Rossi, Hernández Maqueda, Botta.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Tiene la palabra el legislador Torres.

Sr. Torres Lima.- Señora presidenta, yo sé lo que va a pasar y lo quiero expresar hoy.

Es muy posible que las próximas comisiones de Labor Parlamentaria vuelvan a levantarse los bloques que presentaron el proyecto desconociendo el ejercicio democrático que conlleva ser legislador de la provincia, desconociendo lo que la mayoría determinó en el tratamiento de dicho proyecto, y nos dejen sin la posibilidad de llevar adelante una comisión de Labor Parlamentaria que es necesaria para el correcto funcionamiento de esta Casa.

Es por eso, señora presidenta, que además mociono -y quiero que conste en acta y que se vote en el recinto- que, ante la inasistencia a la comisión de los bloques de la oposición en Labor Parlamentaria, se les haga el descuento prescripto en el Reglamento Interno.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Se pone en consideración la moción del legislador Torres.

Quienes estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobada.

Tiene la palabra el legislador Siciliano.

Sr. Siciliano.- Simplemente es para solicitar, presidenta, un cuarto intermedio.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Sí, primero, voy a poner en consideración el pase a comisión del proyecto 38442, estando de nuevo presente el legislador Sosa.

Quienes estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobado.

Tiene la palabra el legislador Siciliano.

Sr. Siciliano.- Muchas gracias, presidenta.

Solicito un cuarto intermedio de no más de 20 minutos para poder ver cómo podemos seguir avanzando con el último tratamiento de la última ley que reza en carpeta.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Pongo en consideración la moción del legislador Siciliano.

Quienes estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Prunotto).- Aprobada.

-Es la hora 23 y 52.

CUARTO INTERMEDIO

-Siendo la hora 1 y 18 del día 21 de diciembre de 2023:

Sr. Presidente (Torres Lima).- Luego del cuarto intermedio, tiene la palabra el legislador Miguel Siciliano.

Sr. Siciliano.- Gracias, presidente.

Voy a solicitar que se levante y se dé por finalizada la sesión por no contar con el quórum necesario para poder continuar.

Sr. Presidente (Torres Lima).- En virtud del artículo 176 del Reglamento Interno y al no tener quórum para continuar con la sesión, es que la misma queda finalizada, agradeciéndoles a los señores y señoras legisladoras que han cumplido con el deber cívico al cual se han comprometido el día que juraron ser legisladores de la provincia de Córdoba.

Feliz Navidad para todos y muchísimas gracias.

Invito a la legisladora Karen Acuña a que proceda a arriar nuestra Bandera Patria del mástil del recinto.

-Así se hace.

Sr. Presidente (Torres Lima).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 1 y 19 del día 21 de diciembre de 2023.

Cr. Víctor González
Subdirector del Cuerpo de Taquígrafos

Myrian Prunotto
Vicegobernadora
Presidente del Poder Legislativo

Justo José Casado
Secretario de Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo